



DERECHOS HUMANOS Y SISTEMA PENITENCIARIO

Supervisión de Derechos Humanos de
Personas Privadas de Libertad 1998 - 1999

Financiado por:
Agencia Canadiense para el
Desarrollo Internacional
ACDI

Elaborado por:
Adjuntía para los Derechos Humanos
Programa de Asuntos Penales
y Penitenciarios

INDICE

PRESENTACION

6

PRIMERA PARTE DIAGNOSTICO DE COYUNTURA DE LA SITUACION CARCELARIA NACIONAL

CAPITULO I REALIDAD CARCELARIA EN CIFRAS

- | | | |
|----|--|----|
| 1. | Población penal | 11 |
| 2. | Situación jurídica de la población penal | |
| 3. | Población penal por tipo de delito | |
| 4. | Población penal por sexo | |
| 5. | Población penal por grupos de edad | |
| 6. | Población penal por tiempo de reclusión | |
| 7. | Población penal por tiempo de sentencia | |

CAPITULO II SUPERVISION DE ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS

- | | | |
|-----|---|----|
| 1. | Establecimientos penitenciarios supervisados | 27 |
| 2. | Variables de identificación penitenciaria | |
| 3. | Población penal supervisada | |
| 4. | Estado de la infraestructura penitenciaria | |
| 5. | Capacidad de albergue y población real de los establecimientos penitenciarios | |
| 6. | La alimentación | |
| 7. | Servicio legal | |
| 8. | Servicio de salud | |
| 9. | Servicio social | |
| 10. | Servicio psicológico | |

11. Servicio religioso
 - 11.1 La Capellanía del E.P. de Lurigancho
 - 11.2 La voz de la Esperanza: un programa radial para los internos
12. El trabajo penitenciario
13. La educación penitenciaria
14. Régimen de visitas
15. Visita íntima
16. Política de traslados

SEGUNDA PARTE

POLITICA CRIMINAL Y SISTEMA PENITENCIARIO

CAPITULO III

POLITICA CRIMINAL DE EMERGENCIA

Y SISTEMA PENITENCIARIO

1. El derecho penal garantista
2. La política criminal de emergencia
3. La política criminal de emergencia en nuestro país
4. La política criminal de emergencia en el sistema penitenciario
 - 4.1 Efectos en el sistema penitenciario
 - 4.2 El régimen penitenciario para internos por terrorismo y traición a la patria
 - a. El régimen para internos por terrorismo y traición a la patria reclusos en bases militares
 - b. El régimen para procesados y sentenciados por delitos de terrorismo y traición a la patria
 - 4.3 El régimen para internos denominados de "Difícil Readaptación"
5. Crítica a los regímenes penitenciarios especiales
 - 5.1 La resocialización del interno
 - 5.2 Presunción de inocencia: régimen para procesados y sentenciados
 - 5.3 Limitación de beneficios penitenciarios
 - 5.4 Principio de humanidad de la pena
 - 5.5 Derecho a la integridad personal y a un trato digno
 - 5.6 El aislamiento prolongado y la incomunicación
 - 5.7 Comunicaciones con el mundo exterior
 - 5.8 Prohibición de la posesión de determinados bienes
 - 5.9 Otras condiciones de detención

69

CAPITULO IV

LOS ADOLESCENTES INFRACTORES Y EL DELITO DE TERRORISMO AGRAVADO

1. Planteamiento del problema 92
2. Los adolescentes infractores y la normatividad internacional
3. La pena privativa de libertad en adolescentes infractores se debe aplicar sobre la base del principio de excepcionalidad y alternatividad
4. La sanción al adolescente infractor debe aplicarse en base al principio de proporcionalidad, cuya medida debe tener un contenido esencialmente educativo
5. Principios para el tratamiento penitenciario del adolescente infractor
 - 5.1 Principio de garantía y respeto a los derechos humanos
 - 5.2 Principio de orientación a la rehabilitación del infractor
 - 5.3 Principio de contacto permanente con la comunidad
 - 5.4 Derecho a recibir educación, formación profesional y trabajo
 - 5.5 Especialización y capacitación del personal a cargo del tratamiento
 - 5.6 Principio de separación de los adultos
 - 5.7 Derecho a conocer las reglas de vida en el establecimiento
 - 5.8 Principio de limitación de la coerción física y del uso de la fuerza
 - 5.9 Derecho a contar con ambientes y condiciones adecuados de alojamiento
6. Adolescentes en un establecimiento penal de máxima seguridad

CAPITULO V

COMENTARIOS INICIALES SOBRE EL SISTEMA DE INVESTIGACIÓN Y JUZGAMIENTO DE LOS DELITOS DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS

1. La creación de la Corte Antidrogas 102
2. Afectación de derechos
 - 2.1 Sobre el derecho al juez natural
 - 2.2 Sobre el derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas
 - 2.3 Sobre el derecho a la defensa
 - 2.4 Sobre el derecho a impugnar las resoluciones judiciales y la reforma de la sentencia por la Corte Suprema
 - 2.5 Aplicación de beneficios penitenciarios
3. La concentración de procesos ha ocasionado sobrepoblación en algunos penales

CAPITULO VI

LA REDUCCION DEL USO DE LA CARCEL

1. Propuestas de corto plazo 109
 - 1.1 La gracia presidencial
 - 1.2 Libertad por exceso de detención procesal

- 1.3 Personas que podrían ser beneficiadas
- 2. Propuestas de mediano plazo
 - 2.1 Instituciones penales que evitan el proceso penal o la privación de la libertad como pena
 - 2.2 Medidas alternativas a la privación de la libertad
- 3. Otras medidas
 - 3.1 Limitación de la detención preventiva
 - 3.2 Beneficios penitenciarios
 - 3.3 Facultad de la Corte Suprema para reformar las sentencias impugnadas

TERCERA PARTE

ALGUNAS INTERVENCIONES DEFENSORIALES

CAPITULO VII

ATENCION DE CASOS

- 1. Atención al público 126
- 2. Instituciones quejadas
- 3. Tipología de las quejas
- 4. Comentarios a los hechos violatorios de mayor incidencia
 - 4.1 Vulneración al debido proceso
 - 4.2 Condiciones carcelarias de detención
 - 4.3 La política de traslados
 - 4.4 Retardo en la concesión de beneficios penitenciarios
 - 4.5 Afectación a la integridad del interno

CAPITULO VIII

INFORME SOBRE EL ESTABLECIMIENTO

PENAL DE YANAMAYO – PUNO

- NOTA PRELIMINAR 134
- CONCLUSIONES 151
- RECOMENDACIONES 160
- BIBLIOGRAFIA 177
- ANEXOS

PRESENTACION

El artículo 152° de la Constitución Política del Estado establece que la Defensoría del Pueblo es la institución encargada de defender los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad, así como supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal y la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía.

Para el adecuado cumplimiento de esta función, el artículo 16° de la Ley N° 26520 – Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, establece el deber de cooperación a las autoridades, funcionarios y servidores de los organismos públicos. Cooperar con nuestra institución significa proporcionar la información que solicitemos y facilitar las inspecciones que necesitemos realizar a establecimientos penitenciarios y de la Policía Nacional, autorizando incluso visitas sin previo aviso para obtener datos o informaciones necesarias, realizar entrevistas personales o estudiar expedientes, informes, documentación, antecedentes y todo otro elemento útil para el desarrollo de nuestra labor. Estas facultades han sido delegadas al Programa de Asuntos Penales y Penitenciarios de la Adjuntía para los Derechos Humanos y las Personas con Discapacidad mediante Resolución Defensorial N° 025-97/DP.

En términos generales, la actividad de la Defensoría del Pueblo en materia penitenciaria está orientada a verificar las condiciones de vida de las personas privadas de libertad, en tanto tienen directa relación con el respeto de sus derechos fundamentales. De hecho, la atención a la problemática carcelaria ha sido una actividad tradicionalmente vinculada a la labor del Ombudsman.

Como parte de nuestra labor de protección de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad o bajo amenaza de ser privadas de ella, atendemos las quejas y peticiones formuladas por los internos, sus familiares y las instituciones que los representan; supervisamos los establecimientos penitenciarios, con la finalidad de verificar el estado de los internos y el cumplimiento de los deberes funcionales de la administración penitenciaria, de la Policía Nacional en el desarrollo de labores carcelarias y del Poder Judicial, en tanto se relacionen con ciudadanos detenidos.

También realizamos investigaciones sobre aspectos relevantes del sistema de ejecución penal. A partir de estas acciones, se formulan recomendaciones,

advertencias, recordatorios de sus deberes legales y sugerencias a las autoridades, funcionarios y servidores de la administración pública de conformidad con el artículo 26° de la Ley N° 26520, con la finalidad de que adopten medidas. Finalmente, brindamos capacitación en temas de derechos humanos y su relación con el sistema penitenciario.

Sin duda, una de nuestras actividades principales es la supervisión de los establecimientos penitenciarios de todo el país. Ello no sólo nos permite conocer de manera directa la problemática carcelaria, sino además levantar información empírica, base de nuestras futuras acciones. Durante estas visitas, efectuamos reuniones de trabajo con las autoridades penitenciarias, con los internos o sus representantes y realizamos inspecciones directas de todos los ambientes del penal, desde las áreas administrativas hasta las celdas y ambientes donde los internos realizan sus actividades diarias.

En el desarrollo de esta actividad, entre enero de 1998 y junio de 1999, se supervisaron 42 establecimientos penitenciarios de todo el país, que en conjunto albergaban al 81% del total de la población penal nacional, que a junio de 1999 ascendía a 27,428. Los resultados de dicha supervisión, así como la evaluación de los principales aspectos de la problemática penitenciaria, están consignados en el *Informe de Supervisión de Establecimientos Penitenciarios (1998 - 1999)*, que hoy presentamos y que ha sido elaborado por el Programa de Asuntos Penales y Penitenciarios.

El Informe consta de tres partes. La primera contiene un diagnóstico de coyuntura de la situación carcelaria nacional a partir de información estadística proporcionada por el Instituto Nacional Penitenciario y nuestra propia constatación, efectuada durante la supervisión de establecimientos penales. En esta parte, resultan preocupantes algunas variables como el alto porcentaje (62.84%) de personas privadas de libertad que tienen la condición de procesados, la situación en la que se encuentra la infraestructura de la mayoría de los penales (50% en mal estado y 32% en regular estado), la sobrepoblación en algunos establecimientos (Lurigancho 265.65%, Chorrillos Comunes 241.6%), así como la prestación deficitaria de los principales servicios, particularmente la alimentación, el servicio legal y médico, éste último agravado por el desabastecimiento crónico de medicamentos.

La segunda parte contiene un análisis del sistema penitenciario desde la perspectiva política criminal, con especial énfasis en la legislación penal de emergencia, relacionada con los delitos de terrorismo, traición a la Patria y terrorismo especial, así como la problemática de los adolescentes infractores

privados de libertad en penales de adultos por éste último delito. Se ha consignado también comentarios iniciales sobre el sistema de investigación y juzgamiento del delito de tráfico ilícito de drogas, criterios para el uso de sanciones penales distintas a la privación de libertad, así como una breve presentación de nuestras intervenciones en la atención de casos.

En la última parte, por considerarlo de interés, se ha incluido el Informe sobre el establecimiento penal de Yanamayo que se formuló luego de nuestra visita en julio de 1999. Además, el Informe contiene también un conjunto de recomendaciones dirigidas a las autoridades relacionadas con la problemática penitenciaria, que están orientadas a lograr la mejora de las condiciones de detención y el respeto de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad.

Considero importante señalar que la labor defensorial en los establecimientos penitenciarios se realiza teniendo como base dos criterios fundamentales: la vigencia del principio de autoridad y el reconocimiento de que los internos tienen vigentes todos los derechos que no se hayan limitado o suspendido por efectos de la sentencia condenatoria. En tal sentido, el Informe pretende coadyuvar al esfuerzo de las autoridades penitenciarias en su difícil tarea de administrar los establecimientos penales e impulsar el goce de aquellos derechos y libertades reconocidos por nuestra Constitución Política del Estado y los instrumentos internacionales.

Finalmente, expresamos nuestro agradecimiento al importante apoyo brindado por la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional - ACDI, sin cuyo concurso no hubiera sido posible realizar la supervisión, elaboración, publicación y difusión del presente Informe.

Lima, enero de 2000

Jorge Santistevan de Noriega
DEFENSOR DEL PUEBLO

EL INFORME DE SUPERVISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE PERSONAS
PRIVADAS DE LIBERTAD 1998 – 1999 HA SIDO ELABORADO POR:

Dr. Wilfredo Pedraza Sierra

Director del Programa de Asuntos
Penales y Penitenciarios

Dr. Luis Francia Sánchez

Comisionado

Dr. Julio Magán Zevallos

Comisionado

Dra. Susana Silva Hasembank

Comisionada

Dr. José Avila Herrera

Comisionado

Dra. María Elena Huerta Ojeda

Comisionado

Dr. Martín Castro Gargurevich

Comisionado

Dr. Julio Vega Galindo

Comisionado

Srta. Miluska Ascarza Aparicio

Apoyo administrativo

Sra. Violeta Valer Drago

Apoyo administrativo

PRIMERA PARTE

Diagnóstico de Coyuntura de la Situación Carcelaria Nacional

CAPITULO I

Realidad Carcelaria en Cifras

1. Población penal

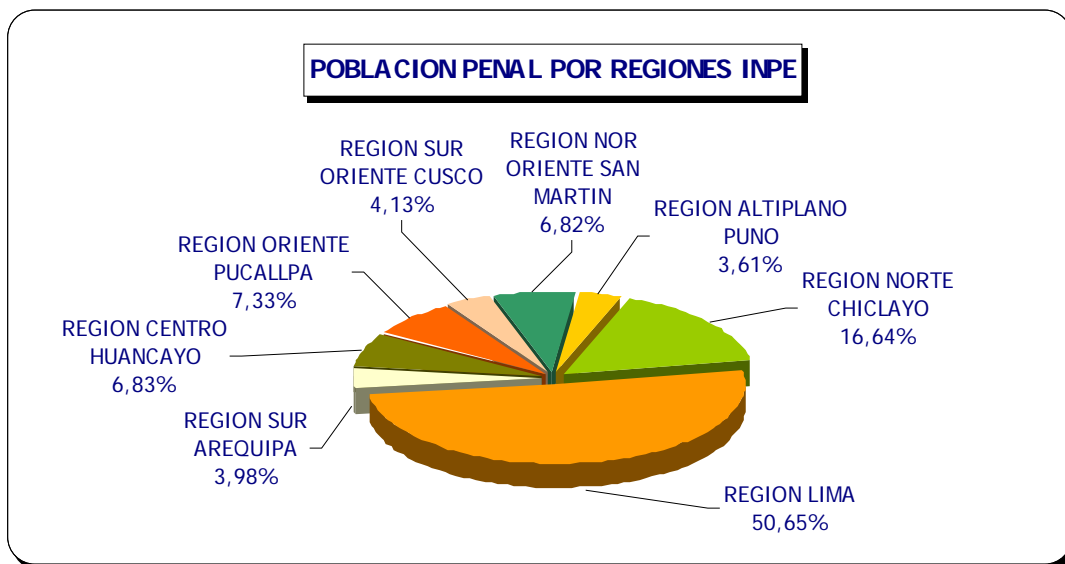
De acuerdo a la información proporcionada por el Instituto Nacional Penitenciario⁽¹⁾, a junio de 1999 la población penal nacional estaba integrada por 27,428 internos, reclusos en 86 establecimientos penales, de los cuales 68 se encontraban bajo el control externo e interno de la Policía Nacional y 18 del Instituto Nacional Penitenciario.



La población penal, está distribuida administrativamente en 8 direcciones regionales (**Ver Anexo N° 1**). La Dirección Regional Lima tiene el índice más alto de la población penal con 13,892 internos, que constituye el 50.65% del total a nivel nacional. La Dirección Regional Norte Chiclayo 4,565, que representa el 16.64%; la Dirección Regional Oriente Pucallpa 2,011, esto es el 7.33%; la Dirección Regional Centro Huancayo 1,874, que constituye 6.83%; la Dirección Regional Nor Oriente San Martín 1,870, que representa el 6.82%; la Dirección Regional Sur Oriente Cusco 1,134 que alcanza al 4.13%; la Dirección Regional Sur Arequipa 1,093,

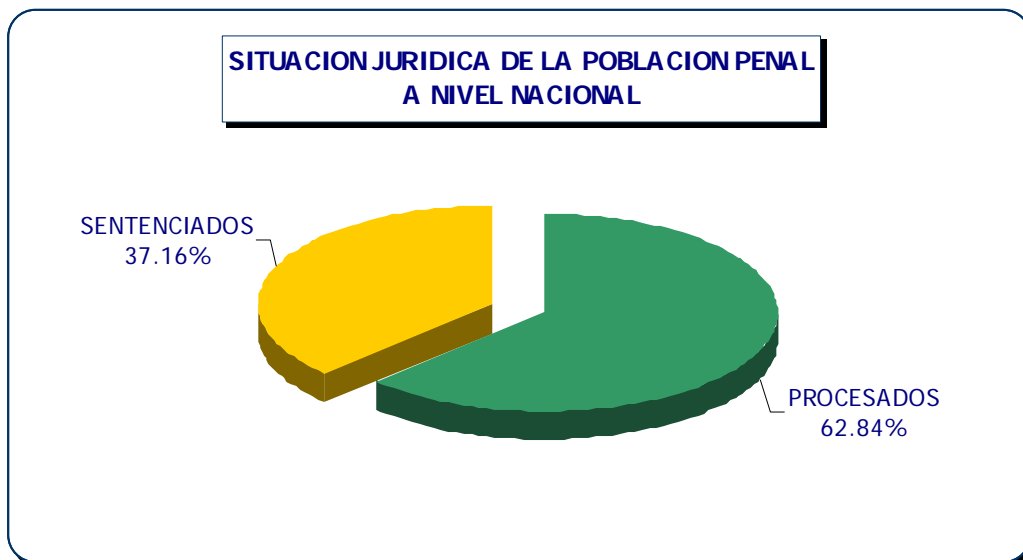
(1) Instituto Nacional Penitenciario. Informe Estadístico Mensual junio 1999. Lima, 1999.

que representa el 3.98%; y, la Dirección Regional Altiplano Puno 989 con el 3.61%.



2. Situación jurídica de la población penal

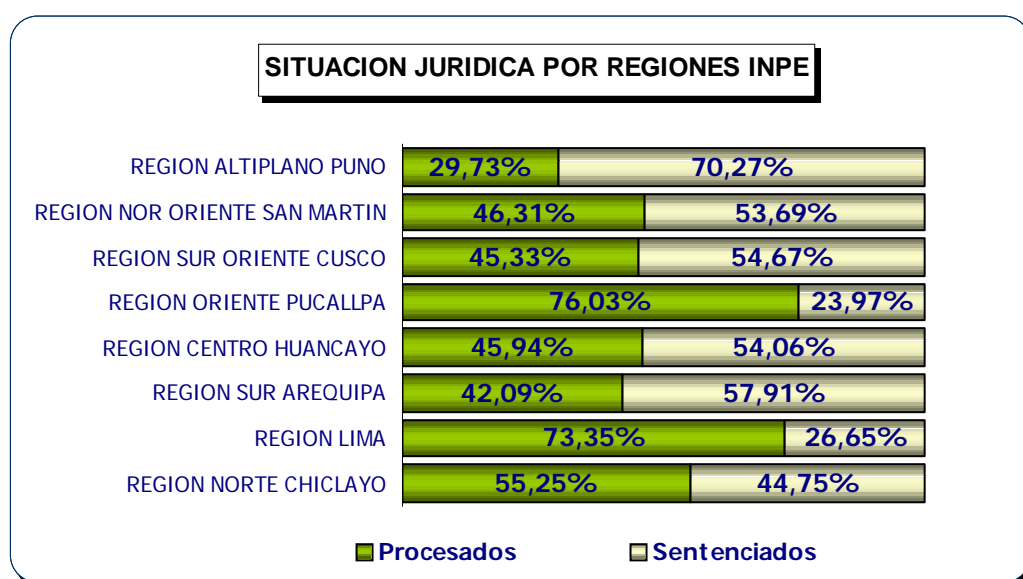
Una de las variables más relevantes de la población penal, es sin duda la situación jurídica. Teniendo como fuente al Instituto Nacional Penitenciario, se puede afirmar que de los 27,428 internos a junio de 1999, 17,236 tenían la calidad de procesados (62.84%) y 10,192 la de sentenciados (37.16%) **(Ver Anexo N° 2)**.



De acuerdo a esta fuente, la Dirección Regional Oriente Pucallpa tiene el más alto porcentaje de presos sin condena, pues el número de procesados constituye el 76.03% (1,529) de su población regional, en tanto que los internos sentenciados sólo representaban el 23.97% (482).

Por su parte la Dirección Regional Lima tenía el 73.35% (10,190 internos), con sólo 26.65% de sentenciados (3,702). Si bien porcentualmente se encuentra algunos puntos debajo de la Región Pucallpa, su volumen nos indica que se trata de la Región con el mayor número de internos procesados.

La Dirección Regional Norte Chiclayo, tiene 55.25% de procesados (2,522) y 44.75% de sentenciados (2,043).



En las Direcciones Regionales Sur, Sur Oriente, Centro, Nor Oriente y Altiplano el porcentaje de internos sentenciados es mayor al de los procesados, siendo significativa la diferencia en la Región Altiplano. Así, la Dirección Regional Sur Arequipa tiene el 57.91% de sentenciados (633) y 42.09% de procesados (460). La Dirección Regional Sur Oriente Cusco cuenta con el 54.67% (620) de sentenciados y 45.33% de procesados (514). La Dirección Regional Centro Huancayo tiene el 54.06% de procesados (1,013) y 45.94% de sentenciados (861). La Dirección Regional Nor Oriente San Martín 53.69% de sentenciados (1,004) y 46.31% de procesados (866). Finalmente, la Dirección

Regional Altiplano Puno donde los internos sentenciados constituyen el 70.27% (695) y los procesados el 29.73% (294).

Estas cifras que, reiteramos, fueron proporcionadas por el Instituto Nacional Penitenciario, han sido cuestionadas por imprecisas desde el Poder Judicial. Lamentablemente, no existe información disponible de ésta u otra instancia, que nos haya permitido confrontarlo. Si bien, es probable que tales cifras tengan márgenes de error, se trata de las únicas disponibles, que además se transmiten como información oficial al Instituto Nacional de Estadística e Informática, por lo que debemos adoptarlas como una referencia válida.

En el Informe de Supervisión de 1997, señalamos ya que en muchas ocasiones internos que fueron condenados conservan su condición de procesados en los registros de la administración penitenciaria, porque no cuentan con una copia certificada de la sentencia. Es evidente entonces, que las dificultades de comunicación entre el Poder Judicial y el Instituto Nacional Penitenciario no han sido superadas aún, situación que contribuye de manera significativa en la existencia de los márgenes de error⁽²⁾. Además, en muchos casos los propios internos no tienen interés de comunicar el cambio de su situación jurídica, por temor a que en su condición de sentenciados puedan ser trasladados a otros establecimientos penitenciarios para el cumplimiento de sus penas.

De otro lado, es obvio que el número de presos sin condena no es responsabilidad de la administración penitenciaria. Desde nuestra perspectiva, el alto índice de procesados se debe a dos factores principales: el inadecuado funcionamiento del sistema penal y la política criminal vigente en nuestro país.

Respecto al primero, es evidente que la alta carga procesal constituye aún un problema sin resolver, la que puede ser explicada por el número insuficiente de magistrados, los altos índices de provisionalidad y la falta de recursos para dotar de mayor apoyo técnico. Los sistemas de juzgamiento a través de salas corporativas de competencia nacional, resultan incomprensibles, especialmente para el delito de tráfico ilícito de drogas, que desde nuestra perspectiva viene generando serios problemas en la administración de justicia, relacionadas con la dilación de los procesos y la calidad de justicia que se administra. En el plano del funcionamiento del sistema penal, debe considerarse también el excesivo

(2) Ver Defensoría del Pueblo. Informe de Supervisión de Derechos Humanos de Personas Privadas de Libertad 1997. Serie Informes Defensoriales N° 11, pág. 24.

uso del mandato de detención, criterio que aunque superado parcialmente, todavía constituye un aspecto que mejorar. De acuerdo a la información del INPE, el 76.34% (13,304) tiene como promedio de permanencia en un penal entre un día y un año, lo que nos indica la necesidad de revisar los criterios empleados por los magistrados para dictar un mandato de detención.

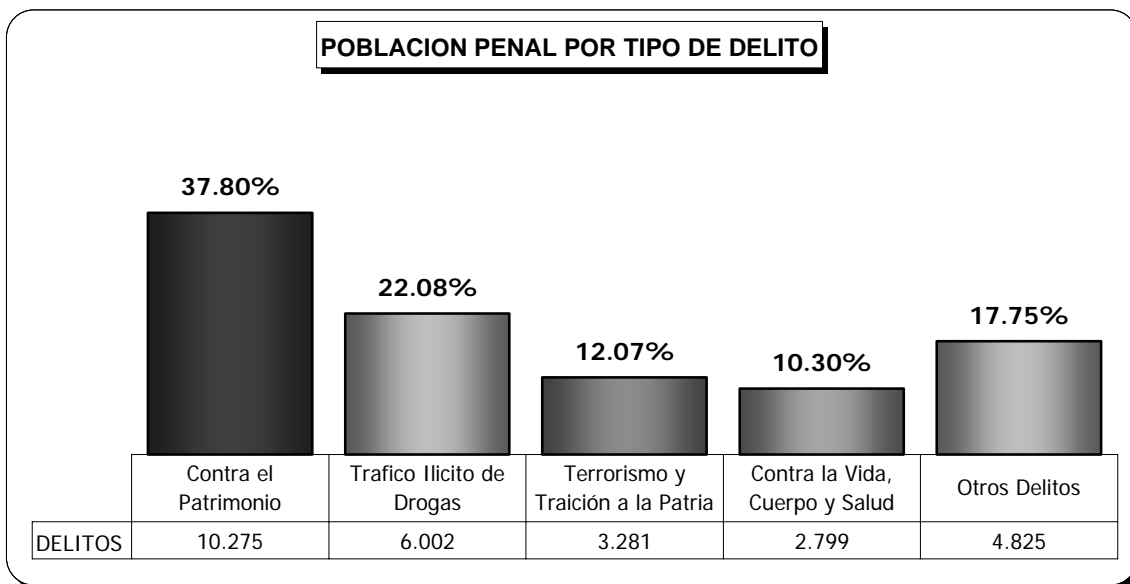
En cuanto al segundo, la política de sobrecriminalizar las hipótesis delictivas y de obligar al juez a iniciar un proceso con mandato de detención, constituyen los aspectos más relevantes que deben ser revisados.

Dentro de este contexto, es importante recordar que desde una perspectiva garantista, el derecho a la libertad personal es el principal límite a las facultades coactivas de las autoridades estatales encargadas del control penal. La privación de la libertad debe ser una medida excepcional, que sólo se tendría que validar ante situaciones extremas.

3. Población penal por tipo de delito

En nuestro país, los delitos patrimoniales han encabezado siempre los índices delictivos vinculados a las personas privadas de libertad. Así, a junio de 1999, estos delitos representaban el 37.46% de la población penal nacional (10,275) ocupando el primer lugar. En orden descendente, los delitos de tráfico ilícito de drogas con el 24.07% (6,602). Como se puede observar, la suma de ambos porcentajes alcanzan el 61.53%, lo que nos indica que la mayoría de nuestra población penal está vinculada a delitos de alto contenido económico.

Luego, siguen los delitos de terrorismo y traición a la Patria con el 10.67% (2,927). A continuación se encuentran los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud con el 10.21% (2,799) y, finalmente, los demás delitos con el 17.59% (4,825).



Como se puede observar, el 82.41% de los internos a nivel nacional están vinculados a sólo cuatro familias de delitos. Esto indica que la mayoría de delitos previstos en el Código Penal y en otras leyes especiales, no tienen incidencia gravitante en la población penal.

En la Dirección Regional Lima los internos por delitos contra el patrimonio suman 6,045 (43.51%), y se concentran mayoritariamente en el Establecimiento Penitenciario de Régimen Cerrado Ordinario de Lurigancho (3,469). Los internos por delitos de tráfico ilícito de drogas son 3,039 (21.88%), la mayoría de los cuales se encuentran reclusos en el penal de Lurigancho (1456) y de Mujeres de Chorrillos (631). Por delitos contra la vida, el cuerpo y la salud hay 921 internos (6.63%). En el caso de los delitos de terrorismo y traición a la Patria, existen 1,329 internos (9.57%), los que se encuentran reclusos mayoritariamente en los Establecimientos Penitenciarios de Régimen Cerrado Especial Miguel Castro Castro (938) y en el de Régimen Cerrado Especial de Mujeres de Chorrillos (252).

La Dirección Regional Norte Chiclayo que tiene una población penal de 4,565 internos, tiene un 36.06% de incidencia en delitos patrimoniales. Las personas reclusas por estos delitos se encuentran básicamente en los establecimientos penitenciarios de Sentenciados de Río Seco en Piura (115), de Sentenciados de Pisci en Chiclayo y de Sentenciados de El Milagro en Trujillo (476). Le siguen los delitos por tráfico ilícito de drogas con el 21.53%, concentrándose en el penal de Río Seco (327) y El

Milagro (290). Luego, los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud con el 13.23%. Finalmente, los internos por delitos de terrorismo y traición a la Patria con el 15.20%, reclusos mayoritariamente en los establecimientos de Picsi en Chiclayo (271) y Huacariz en Cajamarca (181).

En la Dirección Regional Sur Arequipa, los delitos contra el patrimonio representan el 45.56% (426). Los internos por estos delitos se encuentran en su mayoría reclusos en los establecimientos de Varones de Socabaya en Arequipa (254) y de Pocollay en Tacna (119). El 25.80% (282) están vinculados a delitos de tráfico ilícito de drogas, encontrándose todos en los penales de Socabaya varones y Socabaya mujeres en Arequipa. El 12.81% (140) por delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, de los cuales 91 están en Socabaya varones y 25 en Pocollay. Por delitos de terrorismo y traición a la Patria existen 54 internos, que representan el 5.76% del total regional, éstos se encuentran en los establecimientos penitenciarios de Sentenciados de Socabaya (49) y Mujeres de Socabaya en Arequipa (5).

En la Dirección Regional Centro Huancayo, con una población penal de 1,874 personas, el 27.27% de los internos (511) están reclusos por delitos de tráfico ilícito de drogas, en su mayoría en el Establecimiento Penitenciario de Máxima Seguridad de Yanamilla en Ayacucho (371). Por delitos contra el patrimonio, 493 internos que representan el 26.31%, y por delitos contra la vida, el cuerpo y la salud 189 que constituyen el 9.40%, la mayoría reclusa en los establecimientos de Yanamilla (222) y Sentenciados de Huamancaca (217). Los internos por los delitos de terrorismo y traición a la Patria constituyen el 16.17% (303) de la población penal regional y se encuentran reclusos mayoritariamente en los establecimientos penitenciarios de Sentenciados de Huamancaca (186) y de Yanamilla (63).

La Dirección Regional Oriente Pucallpa es la que porcentualmente tiene mayor número de internos por delitos de narcotráfico con el 48.33% de la población regional, quienes se encuentran en los establecimientos penitenciarios de Sentenciados de Huánuco (643) y Sentenciados de Pucallpa (328). Los delitos contra el patrimonio representan el 27.6% y contra la vida, el cuerpo y la salud el 9.4%. En esta región los delitos de terrorismo y traición a la Patria representan el 6.02%, concentrados en los establecimientos penitenciarios de Sentenciados de Huánuco (98) y Pucallpa (23).

La Dirección Regional Sur Oriente Cusco, tiene una población penal de 1,134 internos. Los delitos patrimoniales representan el 36.24% de la población penal regional. La mayor cantidad de internos por estos delitos están reclusos en el Establecimiento Penitenciario de Sentenciados de Quencoro (258). Los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud constituyen el 20.99%. Por tráfico ilícito de drogas el 7.67%, cuya población esta reclusa mayoritariamente en Quencoro (57) y Procesados de Tambopata (16). Por los delitos de terrorismo y traición a la Patria existen 45 internos (3.70%), los cuales se encuentran reclusos en Quencoro (30), Mujeres de Quencoro (11) y Sentenciados de Abancay (4).

El delito con mayor incidencia en la Dirección Regional Nor Oriente San Martín es el tráfico ilícito de drogas con el 33.32% de la población regional (623 internos), reclusos mayoritariamente en los establecimientos penitenciarios de Sentenciados de Iquitos (282) y de Procesados de Tarapoto (140). Los delitos contra el patrimonio y contra la vida, el cuerpo y la salud constituyen el 43.31%. Por terrorismo y traición a la Patria el 1.34%, que se encuentran mayoritariamente en los establecimientos penitenciarios de Sentenciados de Moyobamba (7), Procesados de Tarapoto (10) y Sentenciados de Iquitos (5).

Por último, en la Dirección Regional Altiplano Puno encontramos que el porcentaje de internos por los delitos de terrorismo y traición a la Patria representan el 36% (356), todos los cuales se encuentran en el Establecimiento Penitenciario de Máxima Seguridad de Yanamayo en Puno. Los internos reclusos por los delitos contra el patrimonio y contra la vida, el cuerpo y la salud representan el 35.89%, quienes se encuentran en los establecimientos penitenciarios de Régimen Especial de Challapalca en Tacna (104) y de Máxima Seguridad de La Capilla en Juliaca (302). Finalmente, los internos reclusos por tráfico ilícito de drogas son 105 (10.62%) y se encuentran reclusos en los establecimientos penitenciarios de Sentenciados de Yanamayo (1), La Capilla (70) y Challapalca (34).

DIRECCIONES REGIONALES	Población Penal	Contra el Patrimonio	Contra la Vida, Cuerpo y Salud	Trafico Illicito de Drogas	Terrorismo	Traición a la Patria	Otros
REGION NORTE CHICLAYO	4,918	1760	579	1112	570	116	781
REGION LIMA	13,854	6191	865	3170	823	420	2385
REGION SUR AREQUIPA	1,065	382	89	263	36	4	291
REGION CENTRO HUANCAYO	2,019	557	235	504	229	20	474
REGION ORIENTE PUCALLPA	1,999	468	177	905	64	59	326
REGION SUR ORIENTE CUSCO	1,180	317	251	131	45	2	434
REGION NOR ORIENTE SAN MARTIN	1,787	512	254	539	8	6	468
REGION SUR ORIENTE PUNO	1,013	254	118	121	126	259	135
TOTAL GENERAL	27,835	10,441	2,568	6,745	1,901	886	5,294

4. Población penal por sexo

Como se ha señalado anteriormente, la población penal nacional asciende a 27,428 internos. De ellos, 25,075 son varones (91.42%) y 2,353 mujeres (8.58%). **(Ver Anexo N° 3)**. Como se puede observar, la tasa delictiva tiene una marcada incidencia masculina, pese a que ambos géneros son prácticamente proporcionales en población nacional. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística e Informática, al mes de agosto de 1999, la población masculina ascendía a 11 688,601 (49.67%) personas, en tanto que la femenina a 11 843,100 (50.33%).



La Dirección Regional Nor Oriente San Martín tiene la mayor incidencia porcentual delictiva en varones con el 94.33%, en tanto que la Dirección Regional Sur Arequipa la mayor proporción de mujeres con el 12.35%. La primera cuenta con 1,764 internos varones y 106 internas mujeres (5.67%); y, la segunda con 1,093 varones (87.65%) y 135 mujeres.

La Dirección Regional Norte Chiclayo tiene 4,243 internos de sexo masculino, que constituyen el 92.95% de la población regional, en tanto las mujeres son 322, que alcanzan al 7.05%. La Dirección Regional Lima concentra la mayor población en ambos sexos con 13,892 internos, de los cuales 12,620 son varones (90.84%) y 1,272 mujeres (9.16%).

En la Dirección Regional Centro Huancayo, la población masculina es de 1,696 internos (90.50%) y la femenina de 178 internas (9.50%). En la Dirección Regional Oriente Pucallpa los internos varones son 1,810 (90%) y las mujeres son 201 (10%). En la Dirección Regional Sur Oriente Cusco el número de internos varones asciende a 1,055 (93.03%) y el de mujeres a 79 (6.97%). En la Dirección Regional Altiplano Puno, los internos son 929 (93.93%) y las mujeres 60 (6.07%).

De otro lado, si bien porcentualmente la incidencia delictiva femenina continúa siendo reducida con relación a la que presenta el género masculino, su crecimiento en las dos últimas décadas ha sido notable. Así, en 1978 la población penal femenina alcanzaba al 3.66%, en 1988 el 6.5% ⁽³⁾, y en junio de 1999, ascendía ya al 8.58%. El crecimiento sostenido de la población penal femenina, se explica por su participación en delitos que se desarrollaron con especial énfasis en las dos últimas décadas, como el tráfico ilícito de drogas y el terrorismo. De acuerdo al Instituto Nacional Penitenciario ⁽⁴⁾ a junio de 1999, el 60.26% de la población penal femenina estaba procesada o condenada por el delito de tráfico ilícito de drogas (con especial incidencia en la modalidad de microcomercialización), el 16.89% por delitos de terrorismo y traición a la Patria y por otros delitos sólo el 10.84%.

(3) PEDRAZA SIERRA, Wilfredo: "Áreas Comunes en el Ambito de Ejecución Penal y el Sub Sistema Judicial Penal". En: Situación Actual de la Ejecutoria Penal en el Perú. Cuadernos de Debate Judicial. Investigaciones volumen 3. Consejo de Coordinación Judicial. Lima, 1998; pág. 35

(4) Instituto Nacional Penitenciario. Ob.cit, pág. 5 y 6.

5. Población penal por grupos de edad

Tradicionalmente, la población penal nacional ha estado integrada por jóvenes como ocurre en todos los países del mundo. Como se puede observar en el cuadro siguiente, el 8.82% de internos está conformado por personas que tienen entre 18 y 19 años de edad; el 18.53% entre 20 a 24 años; el 21.82% entre 25 y 29 años; el 18.56% entre 30 y 34 años; el 12.84% entre 35 y 39 años, y el 19.41% más de 40 años.

POBLACION PENAL POR EDAD Y SEXO

EDAD	VARONES	MUJERES	TOTAL	%
menores de 18	41	1	42	0.15%
18-19	2,078	83	2161	7.76%
20-24	4,629	330	4959	17.82%
25-29	5,536	425	5961	21.42%
30-34	5,144	464	5608	20.15%
35-39	3,496	320	3816	13.71%
40-+	4,432	664	5096	18.31%
NEP	186	6	192	0.69%
TOTAL GENERAL	25,542	2293	27835	100.00%

La más alta incidencia se encuentra entre los 18 y 29 años⁽⁵⁾, que representan el 49.17% de la población penal, lo que nos indica que el segmento más criminalizado de la población penal se encuentra en este grupo etario.

La información estadística de los años 1996, 1997 y 1998 nos muestra que la población penal comprendida entre los 18 y 29 años ha tenido siempre una alta incidencia, presentando incluso ligeros niveles de crecimiento. Así, en 1996 este segmento estaba integrado por 11,131 personas, que representaban el 49.16% de la población penal nacional. En 1997 ascendía a 12,113 (49.85%) y en 1998 se incrementó a 13,052 internos, alcanzando el 50.08% de la población penal total⁽⁶⁾.

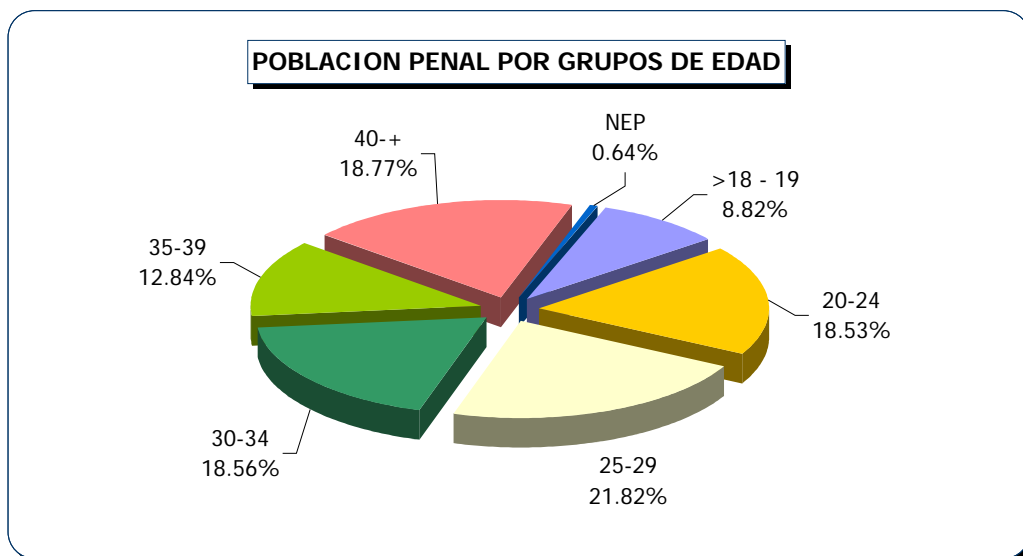
(5) Ibídem, pág. 29.

(6) Ver Instituto Nacional Penitenciario: Anuario Estadístico 1998. Lima, 1999, pág. 12 y 19.

De otro lado, el grupo etario conformado entre los 18 a 34 años de edad, representan el 67.73% de la población penal nacional, lo que indica que más de las dos terceras partes de los internos son jóvenes. Esta situación constituye una variable importante para insistir en la necesidad de revisar los criterios de política criminal que en los últimos años se ha orientado a convertir los establecimientos penitenciarios en simples centros de inocuización o de contención de quienes incurrieron en la comisión de un delito. Frente a una población penal tan joven, nos parece fundamental fortalecer las políticas de prevención, revisar los criterios en base a los cuales se dictan mandatos de detención, así como la adopción de urgentes medidas que eviten que el proceso de prisionización genere a mediano plazo un efecto más negativo de aquel que se quiere evitar.

POBLACION PENAL POR GRUPOS DE EDAD

DIRECCIONES REGIONALES	>18	18 - 19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-+	NEP	TOTAL
REGION NORTE	0	246	843	983	899	725	1113	109	4,918
REGION LIMA	30	1,126	2429	2952	2865	1964	2469	19	13,854
REGION SUR	0	213	208	235	153	97	158	1	1,065
REGION CENTRO	7	138	483	505	359	214	313	0	2,019
REGION ORIENTE	0	103	314	480	619	236	247	0	1,999
REGION SUR ORIENTE	1	113	242	246	189	145	190	54	1,180
REGION NOR ORIENTE	2	198	336	370	286	257	338	0	1,787
REGION ALTIPLANO	2	24	104	190	238	178	268	9	1,013
TOTAL	42	2,161	4,959	5,961	5,608	3,816	5,096	192	27,835



6. Población penal por tiempo de reclusión

El uso de la prisión como respuesta frente a una infracción de carácter penal parece ser una actitud ordinaria en nuestro sistema penal. Los altos porcentajes de internos que permanecen períodos cortos en una prisión así lo indican. Evidentemente, tal situación contraviene criterios garantistas del derecho penal que recomiendan un uso excepcional del mandato de detención y de la prisión en general.

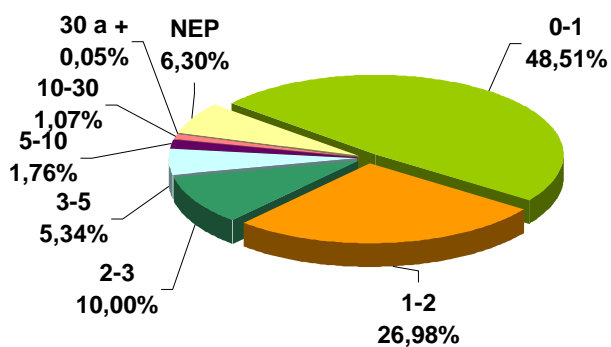
De acuerdo a información proporcionada por el INPE, 13,304 (48.51%) internos tienen un promedio de permanencia en un establecimiento penal de dos días a un año. 7,401 internos (26.98%) entre 1 a 2 años, 2,743 (10%) entre 2 a 3 años, 1,464 (5.33%) entre 3 a 5 años, 482 (1.75%) entre 5 a 10 años, 294 (1.07%) entre 10 a 30 años, 13 (0.05%) entre 30 a más años y 1,727 (6.30%) no especifican.

Como se puede observar, las dos primeras variables, es decir de dos días a dos años de permanencia en el penal ascienden al 75.49% de la población nacional, lo cual significa que los establecimientos penales son prácticamente centros de detención transitorios. Si a ello le añadimos la tercera variable, el 85.49% de los internos tendrían una detención promedio entre dos días a 3 años, lo que confirma la necesidad de revisar los criterios de detención que se vienen aplicando.

POBLACION PENAL POR TIEMPO DE RECLUSION

DIRECCIONES REGIONALES	0-1	1-2	2-3	3-5	5-10	10-30	30 a +	NEP	TOTAL
REGION NORTE CHICLAYO	2.557	1002	502	228	171	100	1	4	4.565
REGION LIMA	6.110	4586	1199	541	74	80		1.302	13.892
REGION SUR AREQUIPA	89	419	171	25	22	24	2	341	1.093
REGION CENTRO HUANCAYO	1.232	288	185	156	10	3		0	1.874
REGION ORIENTE PUCALLPA	1.065	446	236	137	74	24		29	2.011
REGION SUR ORIENTE CUSCO	733	138	65	42	60	58		28	1.124
REGION NOR ORIENTE SAN MARTIN	1.101	366	270	83	26	1	10	23	1.880
REGION ALTIPLANO PUNO	417	156	115	252	45	4		0	989
TOTAL GENERAL	13.304	7.401	2.743	1.464	482	294	13	1.727	27.428

POBLACION PENAL POR TIEMPO DE RECLUSION



7. Población penal por tiempo de sentencia

Desde hace algunos años las penas en nuestro país se han venido incrementando de manera extraordinaria, particularmente en los delitos de alta incidencia en la población penal. La sobrecriminalización se viene sistemáticamente traduciendo en condenas cuya duración es cada vez más prolongada.

Como ya señaláramos anteriormente, de acuerdo al Informe Estadístico de junio del Instituto Nacional Penitenciario la población penal que tenía la condición de sentenciada ascendía a 10,192 (37.16%). De ellos, 589 fueron condenados a pena privativa de libertad no mayor de un año (5.76% de la población nacional de sentenciados); 1,018 tenían sentencias entre uno a tres años (9.96%); y, 1,248 entre 3 a 5 años (12.21%).

El más alto índice de condenas, se encuentra en el rango de 5 a 10 años de pena privativa de libertad con 2,692 sentencias (26.34%), seguido por aquellas con una duración entre 10 a 15 años con 1,792 (17.54%). Nótese que ambas variables de condenas representan el 43.88% de las condenas de la población penal de nuestro país. Los que cumplen condenas entre 15 a 20 años son 1,092 (10.69%), entre 20 a 25 años, 454 (4.44%) y, entre 25 a más años, 56 condenados (0.55%).

Los internos sentenciados a cadena perpetua serían 375, que representan el 3.67% de la población penal nacional de sentenciados, de los cuales 285 son varones y 90 mujeres. El 83.51% de los internos varones condenados a cadena perpetua se encuentran recluidos en el Establecimiento Penal de Yanamayo en Puno y el 62.22% de las internas mujeres en el penal de Máxima Seguridad de Mujeres de Chorrillos.

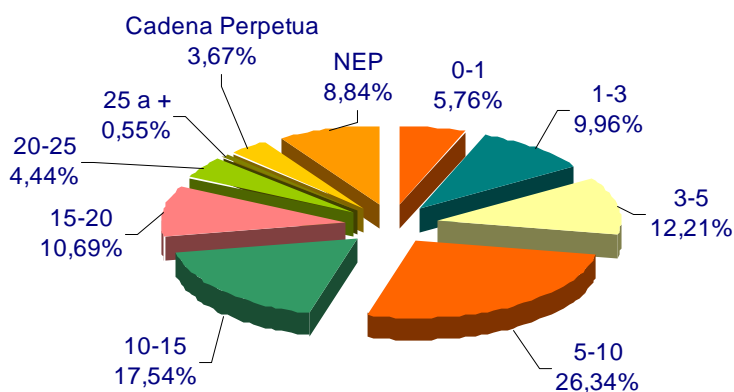
Finalmente, 903 internos sentenciados (8.84%) no tienen especificada con claridad su condena.

En suma, tal como se puede observar, 1607 internos tienen condenas que no superan los tres años de pena privativa de libertad. Ellos podrían haber sido objeto de otras penas o de medidas alternativas a la prisión.

POBLACION PENAL POR TIEMPO DE SENTENCIA

DIRECCIONES REGIONALES	0-1	1-3	3-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25 a +	Cadena Perpetua	NEP	TOTAL
REGION NORTE CHICLAYO	282	317	168	456	325	256	151	35	26	20	2.036
REGION LIMA	51	250	401	1121	644	283	110	5	61	726	3.652
REGION SUR AREQUIPA	9	84	136	166	169	38	27	0	4	0	633
REGION CENTRO HUANCAYO	33	56	106	246	223	245	87	3	14	0	1.013
REGION ORIENTE PUCALLPA	62	121	123	92	53	20	12	0	3	80	566
REGION SUR ORIENTE CUSCO	14	70	98	188	128	76	26	11	8	1	620
REGION NOR ORIENTE SAN MARTIN	95	89	195	313	182	63	41	2	1	23	1.004
REGION ALTIPLANO PUNO	43	31	21	110	68	111	0	0	258	53	695
TOTAL GENERAL	589	1.018	1.248	2.692	1.792	1.092	454	56	375	903	10.219

POBLACION PENAL POR TIEMPO DE SENTENCIA



CAPITULO II

Supervisión de Establecimientos Penitenciarios

1. Establecimientos penitenciarios supervisados

La supervisión de los establecimientos penitenciarios tiene por finalidad proteger los derechos del interno y supervisar el cumplimiento de las funciones de la administración penitenciaria.

La tarea de supervisión de establecimientos penitenciarios constituye una actividad permanente del Programa de Asuntos Penales y Penitenciarios de la Defensoría del Pueblo, en el marco de protección de los derechos humanos de las personas privadas de libertad.

En esta ocasión, el período de supervisión comprendió de enero de 1998 a junio de 1999 y fue efectuada conjuntamente con las Representaciones Defensoriales en los penales de su jurisdicción. Como en el año anterior, esta actividad se desarrolló empleando la Cartilla de Supervisión de Derechos Humanos de Personas Privadas de Libertad aprobada por Resolución Defensorial N° 025-97/DP.

La Cartilla tiene básicamente dos partes. La primera, destinada a consignar el resultado de las entrevistas con autoridades a cargo del establecimiento penal (Policía Nacional e INPE) quienes además nos brindan información estadística; la segunda, nos permite consignar la información recogida de los internos y la constatada a través de la observación directa. Por ello, en muchas ocasiones nos apoyamos con tomas fotográficas y filmaciones.

La supervisión es inopinada y nos permite conocer directamente el estado situacional de un establecimiento penal, pues a las entrevistas con las autoridades, se suma una reunión con los delegados de los internos y el diálogo directo con la población penal en sus propias celdas o en los patios.

En el presente período de supervisión se han visitado 44 establecimientos penales de todo el país. **(Ver Anexo N° 4).**

2. Variables de identificación penitenciaria

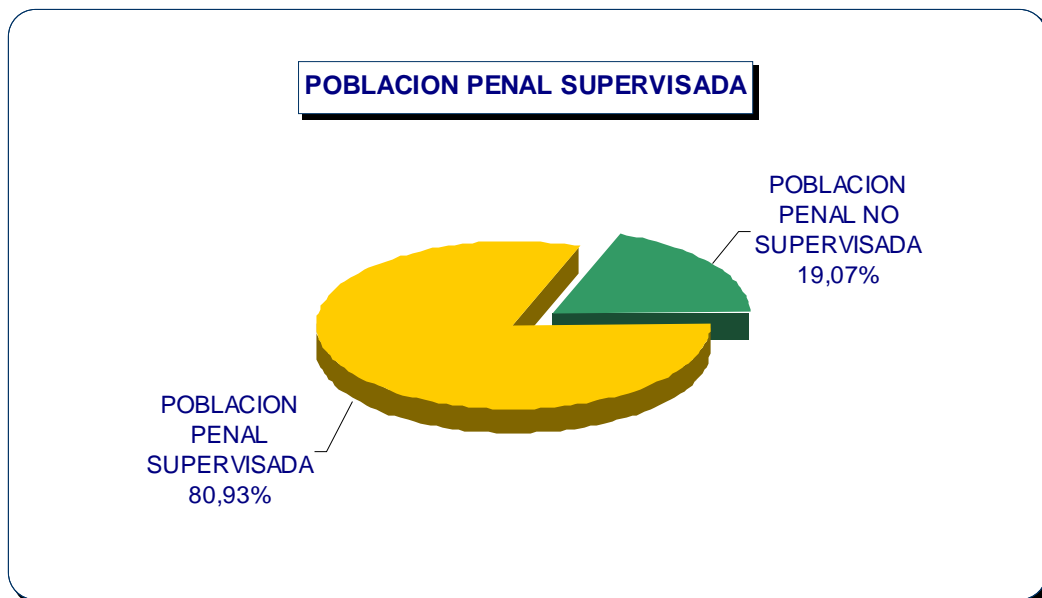
Para efectos de la supervisión de los establecimientos penales, se han considerado las siguientes variables penitenciarias:

- Ubicación del establecimiento
- Capacidad de albergue
- Población penal
- Situación jurídica
- Sexo
- Edad
- Tipos de delitos
- Duración de la pena privativa de libertad.
- Tiempo de reclusión.
- Infraestructura.
- Alimentación.
- Servicios penitenciarios (salud, legal, social, psicológico y religioso).
- Tipos de regímenes penitenciarios
- Tratamiento penitenciario.
- Trabajo y educación.
- Seguridad
- Presupuesto del Instituto Nacional Penitenciario.
- Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional Penitenciario.

3. Población penal supervisada

La población penal nacional al 30 de junio de 1999, ascendía a 27,428 internos. Los 44 establecimientos penales supervisados en conjunto albergaban a 22,197 internos, lo que significa que la supervisión alcanzó al 80.93% de población penal nacional. De dicho grupo, 14,572 (65.65%) internos tenían la condición de procesados y 7,625 (34.35%) de sentenciados; 20,152 eran varones (90.79%) y 2,045 mujeres (9.21%).

La representación gráfica es la siguiente:



La Dirección Regional Lima está integrada por 16 establecimientos penitenciarios, de los cuales se han visitado los 10 centros con mayor densidad poblacional. Estos han sido los de Lurigancho (6,633 internos), Miguel Castro Castro (1,539 internos), Callao (1,119 internos), Mujeres de Chorrillos (854 internas), Nuevo Imperial Cañete (656 internos), Carquín de Huacho (650 internos), Procesados de Chimbote (454 internos), Sentenciados de Huaraz (336 internos), Procesados de Tambo de Mora (362 internos), y Régimen Cerrado Especial de Mujeres de Chorrillos (287 internas). Estos penales en conjunto albergaban a 12,890 internos, que representaban el 58.07% de la población penal supervisada.

La Dirección Regional Norte Chiclayo, esta compuesta por 20 establecimientos penitenciarios. Se supervisaron 7 penales que en conjunto albergaban 3,085 internos, lo que constituían el 13.90% de la población supervisada. Se visitaron los penales de Río Seco en Piura (1,195 internos), Ayabaca (21 internos), Mujeres de Sullana (111 internas), el Milagro de Trujillo (1,135 internos), Procesados de Pacasmayo (64 internos), Huacariz de Cajamarca (411 internos) y de Jaén (148 internos).

La Dirección Regional Oriente Pucallpa estaba compuesta por 4 establecimientos penitenciarios, de los cuales se visitaron los penales de Huánuco (1,242 internos) y de Cerro de Pasco (58 internos), que en

conjunto alcanzaban a 1,300 internos, que representaban el 5.86% de la población penal supervisada.

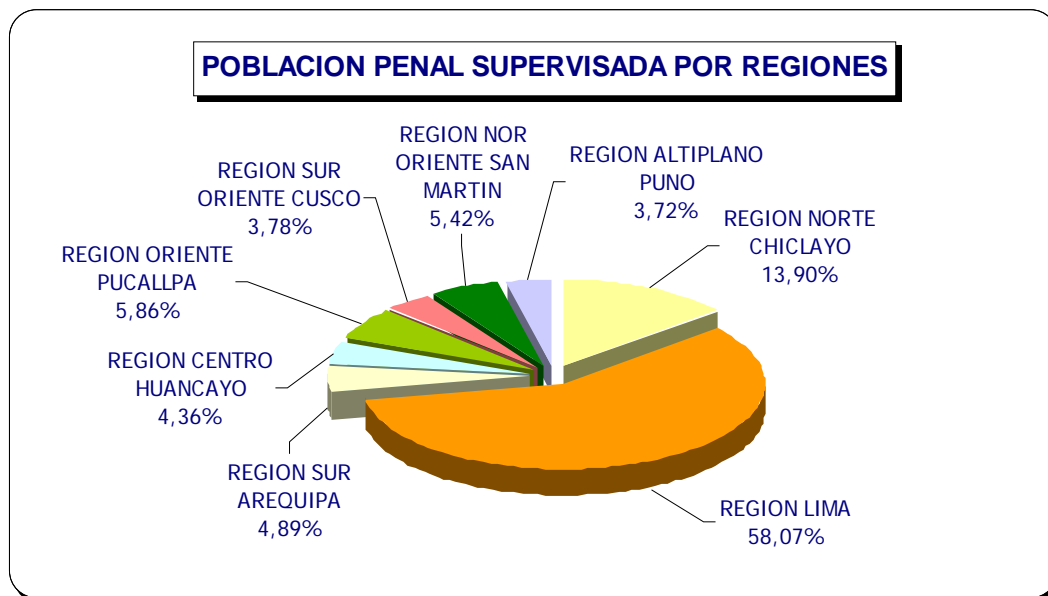
La Dirección Regional Centro Huancayo esta integrada por 12 penales que tenían en total 1,874 internos. En esta Región, la supervisión alcanzó a 7 penales que albergaban a 968 internos, los cuales representaban el 4.36% de la población supervisada. Se visitó el Establecimiento Penitenciario de Yanamilla en Ayacucho (729 internos); además, los penales de Oxapampa (28 internos), Procesados de Satipo (36 internos), Procesados de Tarma (31 internos), La Oroya (46 internos), Mujeres de Concepción (77 internas) y Procesados de Huanca (21 internos).

La Dirección Regional Nor Oriente San Martín está integrada por 8 establecimientos que tenían 1,870 internos. Se han supervisado 6 centros: los de Juanjui (123 internos), Iquitos (564 internos), Anexo Sentenciados de Iquitos (69 internos), Procesados de Yurimaguas (74 internos), Sentenciados de Chachapoyas (143 internos) y Procesados de Bagua Grande (231 internos), que albergaban una población de 1,204 internos, lo que constituía el 5.42% de la población nacional supervisada.

La Dirección Regional Sur Oriente Cusco, tiene 13 establecimientos penitenciarios y contaba con una población de 1,134 internos. La supervisión comprendió los penales de Quencoro (656 internos), Mujeres de Quencoro (59 internas), Sicuani (46 internos) y Procesados de Tambopata (79 internos), los cuales en conjunto tenían una población de 840 internos, que representaron el 3.78% de la población penal supervisada.

La Dirección Regional Sur Arequipa cuenta con 8 establecimientos con 1,093 internos. Se han supervisado 6 penales, los cuales albergaban a 1,085 internos, que constituyeron el 4.89% de la población penal supervisada. Se visitaron los penales de Sentenciados de Socabaya (627 internos), Mujeres de Socabaya (64 internas), Camaná (34 internos), Mollendo (14 internos), Moquegua (19 internos) y Pocollay (327 internos).

Por último, la Dirección Regional Altiplano Puno administra 6 penales con una población de 989 internos. En esta Región se han visitado los penales de Yanamayo de Puno y La Capilla de Juliaca que tenían 375 y 450 internos respectivamente, los cuales hacían un total de 825 internos y que representaron el 3.72% de la población penal nacional supervisada.



4. Estado de la infraestructura penitenciaria

Durante el período del presente informe, se han visitado por primera vez algunos penales. Encontramos establecimientos muy antiguos cuya construcción data de 1890, como el caso del penal de Sicuani en el Departamento del Cusco, el de Procesados de Camaná de 1910, Procesados de Cerro de Pasco de 1923, Procesados de Tarma de 1934, Sentenciados de Chachapoyas de 1942, Procesados de Oxapampa de 1945, Procesados de Huanta y Procesados de La Oroya de 1951, todos los cuales fueron construidos para usos diferentes al de un establecimiento penitenciario, por lo que su infraestructura resulta inadecuada.

En la década del sesenta, se construyeron los penales de Procesados de Yurimaguas en 1961, Procesados de Satipo en 1963 y Procesados de San Pedro de Lloc de Pacasmayo en 1964, que también tuvieron usos diferentes en un primer momento.

Los penales construidos en la década del 90, priorizaron los criterios de seguridad en desmedro de otros aspectos penitenciarios. Celdas unipersonales y bipersonales de tamaños reducidos y limitado ingreso de luz solar, constituyen los aspectos más relevantes, junto a la lamentable decisión de haber eliminado o restringido al extremo las áreas para trabajo y educación. En efecto, en muchos establecimientos no se reservaron ambientes para talleres ni se construyeron aulas educativas, tal

como establece la normativa nacional e internacional. En otros, las áreas destinadas al trabajo no tienen relación proporcional con el número de internos que se proyectó albergar, por lo que su uso es limitado. Por ello, las actividades laborales se efectúan en las propias celdas, en los patios o en áreas destinadas a los jardines, bajo condiciones totalmente precarias y artesanales.

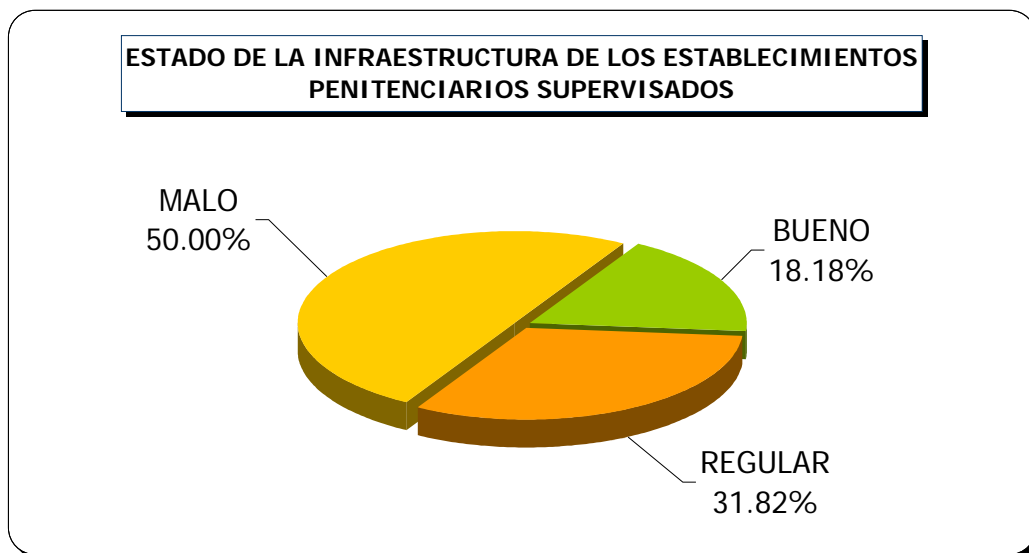
12 establecimientos penitenciarios supervisados en 1997, habían sido remodelados también sobre la base de criterios de seguridad. Así tenemos los establecimientos penitenciarios de Río Seco en Piura, Mujeres de Sullana, Sentenciados de Trujillo, Máxima Seguridad de Pícsi, Procesados de Chimbote, Lurigancho, Miguel Castro Castro, Procesados de Carquín, Sentenciados de Pocollay, Quencoro, Iquitos y Yanamayo.

Ahora bien, para evaluar el estado de la infraestructura de los establecimientos penitenciarios supervisados, se ha considerado necesario asignar una calificación de 0 a 10 a cada establecimiento penal de acuerdo a las siguientes variables:

- Estado de la infraestructura física en general, ubicación, vías de acceso, estado de conservación, instalaciones eléctricas, agua y desagüe.
- Uso original de la infraestructura.
- Relación entre capacidad de albergue y población real.
- Infraestructura penitenciaria (celdas, cuadras, patios).
- Infraestructura de trabajo y educación (existe, suficiente o insuficiente, estado de conservación).
- Infraestructura para servicios penitenciarios (oficinas, mobiliario, equipamiento).
- Infraestructura de seguridad (muro perimétrico, mallas, tierra de nadie, rejas, puertas, torreones).

Para procesar la información se asignó los siguientes rangos: de 0 a 3.5 puntos MALO; de 3.6 a 7.0 REGULAR y de 7.1 a 10 BUENO. **(Ver Anexo N° 5)**

Los resultados de la evaluación de los 44 penales supervisados se presentan en el gráfico siguiente:



Como se puede observar, 22 penales (50%) han sido considerados en mal estado, 14 en regular estado (32%) y 8 en buenas condiciones (18%). Las dos primeras variables juntas alcanzan el 82% de los penales supervisados. Sobre este tema y teniendo en consideración el 100% de los penales, la administración penitenciaria ha considerado que 43 centros (50%) se encuentran en mal estado, 25 (29.07%) en regular estado y 18 (20.93%) en buen estado⁽⁷⁾.

Por el estado de la infraestructura de los penales, es evidente que la mayoría no garantizan el derecho del interno a ocupar un ambiente adecuado, tal como establece el artículo 139° inciso 21 de la Constitución Política del Estado y el artículo 3° del Código de Ejecución Penal.

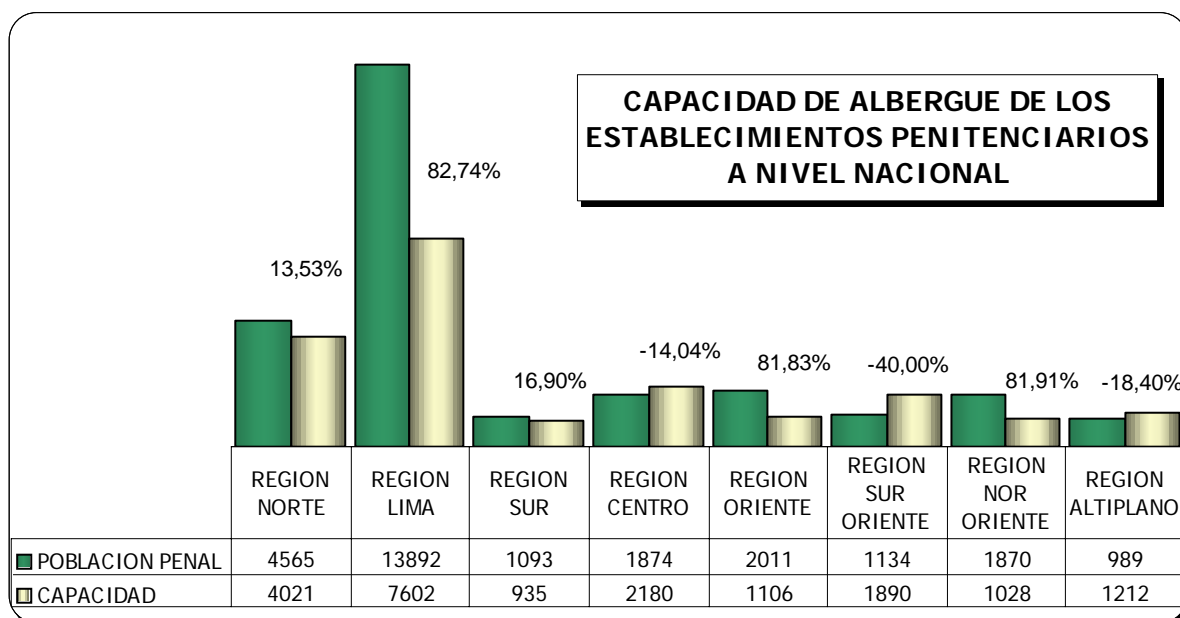
5. Capacidad de albergue y población real de los establecimientos penitenciarios

Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, consideran que es conveniente evitar que en los establecimientos cerrado el número de reclusos sea tan elevado que llegue a constituir un obstáculo para la individualización del tratamiento. Añaden que en algunos países se estima que el número de reclusos en

(7) Instituto Nacional Penitenciario: Informe Estadístico Mensual junio 1999. Lima, 1999.

dichos establecimientos no debe pasar de 500 (Regla 63 inc. 3)⁽⁸⁾. La realidad carcelaria de nuestro país colisiona con este criterio, pues la mayoría de los establecimientos más importantes no sólo han sido construidos para albergar un mayor número de internos, sino que además se encuentran sobrepoblados.

Los 86 establecimientos penales que vienen funcionando en nuestro país, tienen una capacidad de albergue de 19,974 personas. **(Ver Anexo N° 6)**. Sin embargo, nuestra población penal asciende a 27,428 internos, lo que nos indica que existe una sobrepoblación promedio del 37.32% a nivel nacional.



La Dirección Regional Lima tiene el mayor índice de sobrepoblación con el 82.74%. Ello se explica porque el penal de Lurigancho presenta una alarmante sobrepoblación del 265.45%, Mujeres de Chorrillos Comunes con 241.6% y el Callao con 95.63%.

La Región Norte cuenta con 20 penales, tres de los cuales tienen altos márgenes de sobrepoblación. El penal de Jaén tiene el 196%, Mujeres de Sullana el 122% y Piura el 103.92%. En esta Región el índice de sobrepoblación es del 13.53%.

(8) Adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955, y aprobadas por el Consejo Económico y Social en sus Resoluciones 663C (XXIV) de 31 de julio de 1957 y 2076 (LXII) de 13 de mayo de 1977.

La Región Oriente tiene una sobrepoblación del 81.83%. Los penales que mayor índice presentan son el de Huánuco con el 133.46% y el de Pucallpa con 62.5%.

En la Región Nor Oriente el índice es del 81.91%. El penal de Bagua Grande tiene el 285%, la cifra más alta a nivel nacional, en tanto que el de Tarapoto el 224.55%.

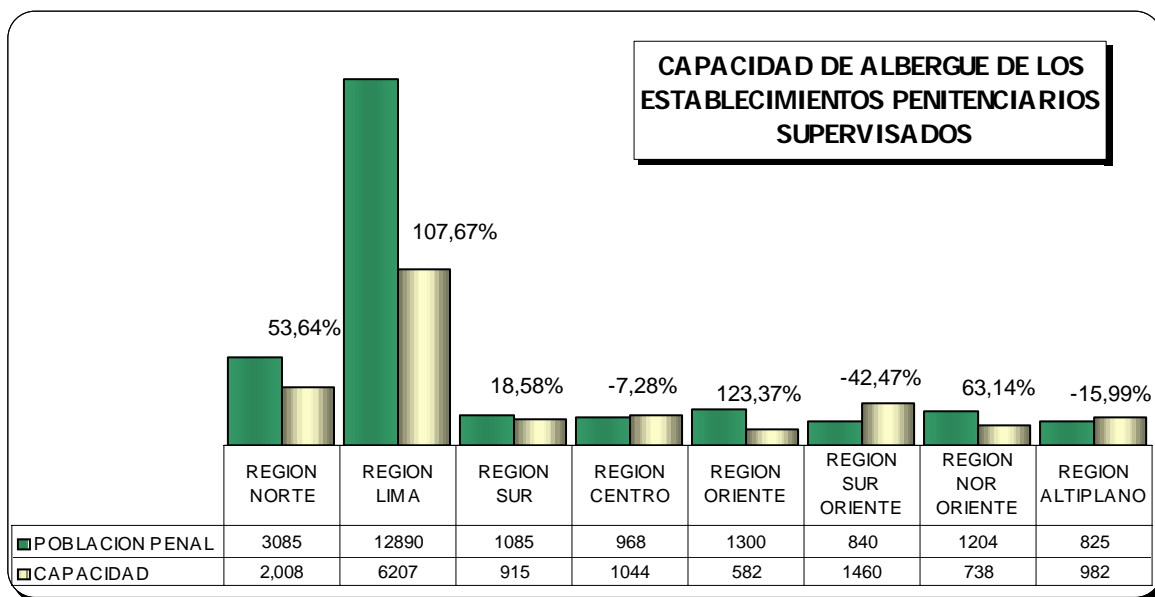
La Región Sur tiene 7 penales, de los cuales 3 se encuentran sobrepoblados. Pocollay (Tacna) con el 172.5%, Camaná con el 70% y Socabaya varones (Arequipa) con el 4.5%. El índice de sobrepoblación en esta Región es del 16.90%, lo que resulta tolerable.

De acuerdo a la información del Instituto Nacional Penitenciario, las regiones Sur Oriente (Cusco), Altiplano (Puno) y la Región Centro (Huancaayo) no presentarían índices de sobrepoblación, pues tendrían capacidad de albergue disponible. Así, la Región Sur Oriente tendría una disponibilidad del 40%, particularmente en el Establecimiento Penitenciario de Sentenciados de Quencoro con el 45.33%. Estas proyecciones han sido efectuadas en base a la información proporcionada por las autoridades penitenciarias, sin embargo nos llama la atención el alto índice de disponibilidad que el penal de Quencoro presenta, pues no se ajusta a la constatación que efectuamos durante la supervisión. Además, se ha considerado indebidamente el pabellón de Venustierio, que no sólo se encuentra deteriorado y sin uso, sino que por su destino no debe incluirse en la capacidad de albergue de un penal. En esta Región, los penales sobrepoblados son el de Sentenciados de Abancay con el 56.67% y el de Procesados de Andahuaylas con el 30%.

La Región Altiplano, tendría una disponibilidad de albergue del 18.40%. Así el penal de Yanamayo que cuenta con 375 internos, tiene una capacidad de albergue para 492, lo que indica que existe disponibilidad del 23.78%. Al respecto, se debe precisar que en la capacidad de este penal, se ha considerado los ambientes del antiguo establecimiento penal que hoy se denomina pabellón San Sebastián. El penal de Máxima Seguridad La Capilla de Juliaca alberga a 450 internos y tendría capacidad para 490 lo que significa una disponibilidad del 8.16%. El penal de Challapalca tiene 138 internos y una capacidad de albergue de 150 lo que indicaría una capacidad disponible del 8%.

En la Región Centro Huancayo, habría capacidad instalada disponible del 14.04%. Sólo el Establecimiento Penitenciario de Máxima Seguridad de Yanamilla tendría el 13.2% de sobrepoblación.

La supervisión en este período alcanzó a 44 establecimientos penitenciarios, de los cuales 23 se encontraban sobrepoblados con un índice promedio del 59.28%.



6. La alimentación

La alimentación en los establecimientos penitenciarios es un aspecto trascendente, pues tiene directa relación con la calidad de vida que se brinda a los internos. El presupuesto diario a junio de 1999 es de S/. 2.50 por interno, que se encuentra vigente desde el mes de junio de 1998. Excepcionalmente, el penal de Challapalca en Tacna tiene un presupuesto superior ascendente a S/.3.50 nuevos soles, debido a que era necesario compensar las difíciles condiciones de vida en dicho penal, por su clima y altitud. En todos los casos, con dicho presupuesto debe cubrirse los costos que demandan el desayuno, almuerzo y una cena.

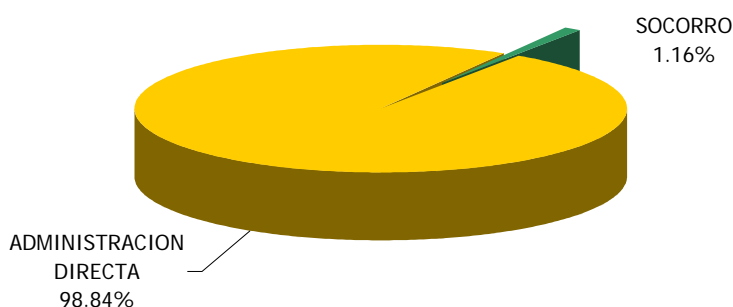
Es evidente que tal presupuesto resulta insuficiente para brindar una adecuada alimentación. En la mayoría de penales el desayuno está compuesto por una taza de té o cualquier otra infusión, más dos panes en promedio. El almuerzo es un solo plato y una tercera ración (cena) está constituida alternativamente por un mate, un caldo o una mazamorra. El

déficit calórico de la alimentación es paliada en gran medida por los alimentos que los propios internos se proveen o por los que les proporcionan sus familiares en los días de visita o de ingreso de víveres.

Sin duda, la adecuada administración y el honesto manejo de los fondos destinados a la alimentación constituyen dos ingredientes importantes para garantizar un mínimo de calidad del servicio. De hecho, es notable una mejor situación en aquellos penales donde los internos participan en la programación, elaboración y distribución de los mismos, pues así existe una mutua supervisión en el manejo de alimentos, pues tanto autoridades como internos participan en el control de la cantidad y calidad de los mismos.

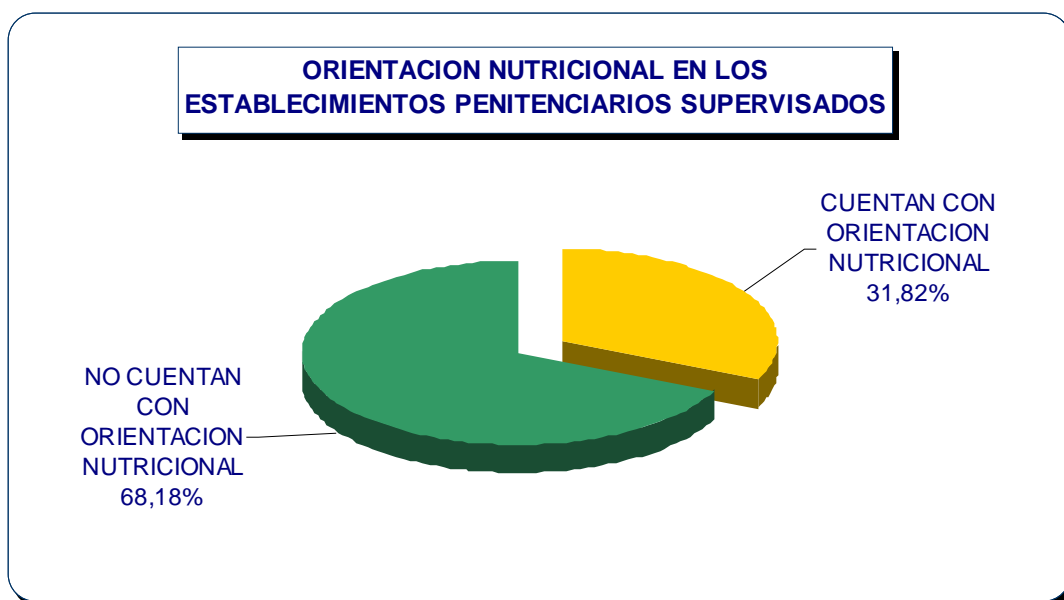
En la mayoría de penales del país se preparan los alimentos y se distribuyen cocidos. La adquisición de los mismos la realizan los administradores del penal o la reciben a través de un proveedor. A este sistema se denomina "administración directa". En otros penales, como los de Ayabaca, Jaén, Tarma, Huanta y Satipo, las autoridades entregan al interno el presupuesto asignado para su alimentación en efectivo, siendo estos quienes por sus propios medios preparan sus alimentos. A esta modalidad se ha denominado "socorro".

**MODALIDAD DE ADMINISTRACION DE ALIMENTOS
EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS SUPERVISADOS**



La orientación nutricional en los establecimientos penitenciarios es limitada. De los 44 penales supervisados, sólo 14 cuentan con este servicio, el mismo que no es brindado necesariamente por profesionales, sino por personas con conocimientos empíricos como los administradores

del penal o auxiliares de salud. En algunos penales, los profesionales del Ministerio de Salud, EsSALUD y la Sanidad de las Fuerzas Policiales brindan este tipo de apoyo. Es evidente, que aquellos penales que reciben asesoría nutricional brindan mejores niveles de alimentación, como es el caso de los establecimientos penitenciarios de Huaraz, Carquin de Huacho, Nuevo Imperial Cañete, Mujeres de Chorrillos, Procesados Primarios de Lima, Máxima Seguridad de Mujeres de Chorrillos, Mujeres de Socabaya, Sentenciados de Socabaya, Pocollay de Tacna, La Capilla de Juliaca, Mujeres de Concepción, Procesados de Cerro de Pasco y Quencoro en Cusco.



El nivel de higiene de las cocinas depende de la organización de los internos encargados de la misma. Durante la supervisión, encontramos que algunos internos que participaban de la preparación de alimentos no habían pasado examen médico previo. En la mayoría de penales el menaje y utensilios como ollas, sistema de calderos, cocinas y otros enseres se encuentran deteriorados. Es importante establecer una política permanente de renovación de utensilios, además de brindarles mantenimiento, así como dotar de vestimenta a los internos que participan de esta actividad.

Consideramos importante buscar mecanismos que brinden alimentación complementaria a la población penal más vulnerable, como los enfermos de TBC, internos psiquiátricos, madres gestantes y niños, para quienes deberían impulsarse programas especiales. En el mismo sentido, además

de reafirmar la necesidad de incrementar el presupuesto, consideramos que para ello se podría tener en consideración el costo de vida de la ciudad donde se encuentra el establecimiento penal. De esta manera el incremento para la ración alimenticia podría ser diferenciado en consideración a esta variable.

7. Servicio legal

El servicio legal de un penal puede brindar asesoría al interno en diversos aspectos. El Código de Ejecución Penal establece que deben absolver gratuitamente las consultas que formule el interno, asumiendo preferentemente "la defensa del interno indigente" (artículos 87° y 89°). En el caso de los beneficios penitenciarios, la participación del servicio legal está relacionado con el asesoramiento y ayuda al interno en la organización y tramitación de los expedientes para la obtención de beneficios penitenciarios" (artículo 90°).

Para los 86 establecimientos penitenciarios que existen a nivel nacional, el INPE cuenta con 55 abogados, lo que indica que existe un notable déficit de profesionales. **(Ver Anexo N° 7).**

La Dirección Regional Lima tiene 26 abogados, siendo la región que tiene mayor número de profesionales, aunque deben atender 13,892 internos. Cuentan con este servicio los penales de Huaraz (01), Chimbote (01), Callao (03), Mujeres de Chorrillos (05), Lurigancho (05), Miguel Castro Castro (01), Procesados Primarios de Lima (03), Carquín (02), Nuevo Imperial Cañete (02), Tambo de Mora (02) y Sentenciados de Ica (01).

En la Dirección Regional Norte Chiclayo existen 6 abogados para una población penal de 4,551 internos. Los penales que tienen el servicio son los de Trujillo (01), Huacariz de Cajamarca (01), Jaén (01), Pisci comunes (01), Máxima Seguridad de Pisci (01) y Mujeres de Chiclayo (01). En esta jurisdicción 14 penales no cuentan con este servicio.

La Dirección Regional Oriente Pucallpa cuenta con 2 abogados que prestan servicio en los penales de Huánuco (01) y Pucallpa (01).

La Dirección Regional Centro Huancayo cuenta con 6 abogados que prestan servicios en los establecimientos penitenciarios de Satipo (01), de Huamancaca de Huancayo (02), La Merced (01) y Yanamilla de Ayacucho (02).

En la Región Nor Oriente el servicio legal se brinda en los establecimientos penitenciarios de Moyobamba (01) y Chachapoyas (01). No tienen atención los penales de Juanjui, Tarapoto, Yurimaguas, Bagua Grande, Iquitos y Anexo de Iquitos.

La Dirección Regional Sur Oriente cuenta con 5 abogados que brindan servicio en los penales de Quencoro (03), Quillabamba (01) y Tambopata (01).

La Dirección Regional Sur Arequipa, cuenta con 6 abogados para una población total de 1,093 internos. Este servicio se presta únicamente en los penales de Socabaya (03), Mujeres de Socabaya (01) y Pocollay (02).

Finalmente, la Dirección Regional Altiplano tiene 2 abogados. El servicio legal se presta en los establecimientos penitenciarios Máxima Seguridad La Capilla (01) y Challapalca (01).

REGIONES	POBLACION PENAL	ABOGADOS
REGION NORTE CHICLAYO	4.565	6
REGION LIMA	13.892	26
REGION SUR AREQUIPA	1.093	6
REGION CENTRO HUANCAYO	1.874	6
REGION ORIENTE PUCALLPA	2.011	2
REGION SUR ORIENTE CUSCO	1.134	5
REGION NOR ORIENTE SAN MARTIN	1.870	2
REGION ALTIPLANO PUNO	989	2
TOTAL GENERAL	27.428	55

La supervisión de establecimientos penales, ha permitido constatar que nuestra población penal presenta altos índices de indefensión legal. Ello no sólo incrementa la alta tasa de presos sin condena, sino además afecta el derecho de acceso a la justicia, pues el interno que no cuenta con asesoría legal no podrá enfrentar adecuadamente su proceso. Por ello, es importante que la administración penitenciaria fortalezca sus esfuerzos para incrementar el número de abogados y de asistentes jurídicos en todos los establecimientos penales del país, pues es exorbitante la cantidad de internos que no saben el estado de sus procesos, que no tienen abogado o que en general solicitan atención jurídica.

Es cierto que para superar esta situación el presupuesto juega un rol importante. Sin embargo, este servicio podría ser mejorado revisando las relaciones con algunas instituciones públicas y privadas, como el sistema de defensa legal gratuito del Ministerio de Justicia, colegios de abogados y las facultades de derecho de las universidades. Incluso, es posible convocar directamente a abogados que ejercen privadamente, quienes bajo determinados supuestos podrían asumir la defensa gratuita de internos. De hecho, la Defensoría del Pueblo recibe frecuentemente comunicaciones de abogados que ofrecen sus servicios gratuitos a un limitado número de internos, a quienes derivamos los casos que conocemos.

En esta línea, nos parece necesario incrementar el estipendio a los estudiantes que realizan su SECIGRA en un establecimiento penal, no sólo para incentivarlos a realizar sus prácticas en los penales, sino para compensar los costos de movilidad que ello demanda, pues generalmente los centros se encuentran ubicados fuera del radio urbano.

8. Servicio de salud

El servicio de salud que se brinda a los internos de un establecimiento penal se encuentra regulado en el artículo 76° del Código de Ejecución Penal. La administración penitenciaria está obligada a prestar los servicios básicos y asume la responsabilidad por la integridad física y mental de los internos⁽⁹⁾.

En consecuencia, conforme a la citada normativa los servicios de salud en los establecimientos penitenciarios deben garantizar el derecho a la integridad física y mental de las personas privadas de libertad a través de acciones de promoción, prevención y recuperación de la salud. Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Regla 26.1), recomiendan además que los profesionales de la salud deben realizar inspecciones frecuentes para verificar las condiciones de higiene y aseo de los reclusos y de los establecimientos, así como las condiciones de calidad e higiene de la alimentación. En consecuencia, las funciones del servicio médico no sólo se vinculan con las tareas de asistencia a los enfermos, sino con otras acciones que directa o indirectamente tienen relación con la salud.

(9) Esta disposición concuerda con lo establecido en la Regla 22° y siguientes de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos.

Sin duda, una variable importante de evaluación de este servicio, está constituido por el número de profesionales. A nivel nacional, la administración penitenciaria cuenta con 44 médicos y 80 enfermeros. **(Ver Anexo N° 8).**

La Dirección Regional Lima que cuenta con 13,892 internos, tiene 28 médicos y 46 enfermeros. El penal del Callao tiene 3 médicos, Mujeres de Chorrillos 4, Máxima de Mujeres de Chorrillos 2, Lurigancho 8, Miguel Castro Castro 6, Procesados Primarios de Lima 2, Nuevo Imperial Cañete 1, Procesados de Tambo de Mora 1 y Sentenciados de Ica 1 médico. Los penales que no tienen atención de profesionales de la salud son el de Huaraz, Chimbote, Carquín-Huacho, Canta y Tambo de Mora en Cañete.

En los 20 establecimientos penitenciarios de la Dirección Regional Norte Chiclayo existen 4 médicos y 13 enfermeros. Tienen profesionales en la salud los penales de Trujillo (01), Huacariz de Cajamarca (01) y Picsi de Chiclayo (02). En 17 penales no existen médicos y sólo en 7 se brinda asistencia a través de enfermeros.

En la Dirección Regional Oriente Pucallpa existen 4 establecimientos penitenciarios y tiene un sólo médico y 3 enfermeros. El penal de Huánuco tiene al único médico de la Región, así como a 2 enfermeros. El penal de Pucallpa cubre sus necesidades con un sólo enfermero.

La Dirección Regional Centro Huancayo tiene 12 establecimientos penitenciarios y sólo 2 médicos, los cuales prestan servicios en los penales de Mujeres de Concepción en Junín y Yanamilla en Ayacucho. Este último penal, cuenta además con los servicios de los 3 enfermeros que tiene la Región.

La Dirección Regional Nor Oriente San Martín cuenta con 8 centros carcelarios y tiene un sólo médico que brinda atención en el penal de Iquitos.

En la Dirección Regional Sur Oriente Cusco existen 13 establecimientos penitenciarios, sólo 2 médicos y 3 enfermeros. Los primeros atienden en los penales de Quencoro varones y Quencoro Mujeres del Cusco.

La Dirección Regional Sur Arequipa cuenta con 3 médicos. 2 de ellos, brindan atención simultánea a los penales de Socabaya varones y mujeres de Arequipa, que tienen además un enfermero por penal. El penal de Pocollay de Tacna tiene 1 médico y 2 enfermeros. No cuentan con este

servicio los establecimientos penitenciarios de Camaná, Mollendo, Chivay y Moquegua.

Por último, la Dirección Regional Altiplano Puno cuenta con 3 médicos, de los cuales 2 se encuentran en el establecimiento penitenciario de Máxima Seguridad de La Capilla de Juliaca y 1 en el de Sentenciados de Yanamayo. El penal de Challapalca, el de Procesados de Huancané, de Azángaro, y el de Procesados de Macusani – Carabaya, no tienen servicio médico.

En cifras globales, 44 penales carecen de todo servicio de salud, por ello resultan desatendidos 3,085 internos que representan el 11.25% de la población penal nacional. 20 penales cuentan con médicos y enfermeros; 4 sólo con médicos y, 18 sólo con enfermeros.

REGIONES	POBLACION		
	PENAL	MEDICOS	ENFERMEROS
REGION NORTE CHICAYO	4.565	4	13
REGION LIMA	13.892	28	46
REGION SUR AREQUIPA	1.093	3	4
REGION CENTRO HUANCAYO	1.874	2	3
REGION ORIENTE PUCALLPA	2.011	1	3
REGION SUR ORIENTE CUSCO	1.134	2	3
REGION NOR ORIENTE SAN MARTIN	1.870	1	2
REGION ALTIPLANO PUNO	989	3	6
TOTAL GENERAL	27.428	44	80

Las enfermedades que mayor incidencia presentan en los establecimientos penitenciarios son las digestivas, bronquiales, venéreas, pulmonares y últimamente SIDA, que según información de los médicos penitenciarios viene creciendo en proporciones alarmantes, principalmente en la población de alto riesgo (internos con enfermedades venéreas, tuberculosis y personas con actividades sexuales promiscuas), para quienes no existe atención médica sostenida como ocurre en el caso de la tuberculosis, donde el Ministerio de Salud a través del Programa correspondiente brinda los medicamentos necesarios.

Es evidente que el número de profesionales en la salud con que cuenta la administración penitenciaria es insuficiente. No sólo en la atención médica general, sino particularmente en el servicio especializado que es bastante restringido. Por ello, urge la necesidad de contar con un mayor número de profesionales en la materia. Además, es importante que la administración penitenciaria fortalezca vínculos con el Sector Salud a efectos de mejorar la atención del interno en los diversos centros hospitalarios. En muchos lugares este servicio, que se venía brindando merced a un convenio entre el INPE y Salud, fue suspendido por deudas derivadas de atención que el INPE no pudo pagar.

Igualmente, la autoridad penitenciaria debería estrechar las relaciones con EsSALUD a fin de que atiendan sin dificultades a los internos asegurados y se promueva el acceso a este sistema a internos que lo deseen, en las mismas condiciones de quienes se encuentran en libertad.

Es importante destacar que las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, recomiendan que los servicios médicos penitenciarios se deben organizar en estrecha vinculación con los servicios sanitarios de la comunidad. Esto último resulta particularmente relevante, porque ello podría garantizar un adecuado servicio especializado y la inclusión de los centros penitenciarios en los programas de prevención de enfermedades que se desarrollan en el ámbito de la salud pública.

En el tema de la salud, otro aspecto preocupante es el desabastecimiento casi generalizado de medicamentos en todos los penales del país. A juicio de la mayoría de internos, se trata de uno de los problemas más graves de las prisiones, que es necesario enfrentar con urgencia. Esta carencia es suplida en muchos casos por las donaciones que realizan el Comité Internacional de la Cruz Roja, instituciones eclesiásticas, organizaciones no gubernamentales vinculadas al trabajo de protección de derechos de personas privadas de libertad y, en otros casos por los propios internos o sus familiares.

Es necesario señalar también que los ambientes destinados a la prestación del servicio de salud no son homogéneos. En la mayoría de los penales se encuentran en malas condiciones y no garantizan una atención adecuada. Sobre este particular se debe recordar que según los Principios de Ética Médica Aplicables a la Función del Personal de Salud, Especialmente los

Médicos en la Protección de Personas Presas y Detenidas⁽¹⁰⁾, el nivel de calidad de los servicios médicos penitenciarios debe ser comparable al nivel de calidad de los servicios médicos de las personas que viven en libertad.

En el Establecimiento Penitenciario de Régimen Cerrado Especial Miguel Castro Castro, existe una clínica, la cual en principio cuenta con un equipamiento aceptable, lo que le permite atender los casos que se presenten en el penal y en algunos casos los del penal de Lurigancho y del resto del país. Además del equipamiento, la clínica cuenta con especialistas en diversas áreas, como traumatología, radiología, neurología, laboratorio, psiquiatría, odontología y medicina general.

Especial interés es el caso del servicio de psiquiatría, por ser el único penal que tiene el mismo mediante un médico contratado.

Caso distinto es el del Establecimiento Penitenciario de Régimen Cerrado Ordinario de Lurigancho, donde el servicio de salud se brinda por un personal de 7 médicos, más el apoyo de 17 técnicos en enfermería, 1 enfermera y 2 serumistas. Este personal es insuficiente para cubrir las necesidades del penal, siendo la proporción de un médico para cada 940 internos. Ello ha originado que se fijen días para la atención de los internos de los diversos pabellones y se designen Delegados de salud en cada uno de ellos. Los propios internos en la semana elaboran la relación de los que serán atendidos.

Por la falta de médicos especialistas y de instalaciones adecuadas, se derivan varios pacientes a la Clínica del penal de Castro Castro, o a un centro hospitalario. El traslado en muchas oportunidades frustra una atención adecuada, mientras que los hospitales de Salud Pública en muchos casos son renuentes a recibir internos de emergencia.

La infraestructura se encuentra en pésimo estado de conservación. Así mismo, los instrumentos clínicos requieren urgente renovación por lo obsoletos que resultan. La farmacia se halla regularmente desabastecida.

Problemas especialmente importantes son los casos de TBC y SIDA. Desde hace 5 años a la fecha, se ha detectado más de 1,000 casos de internos con TBC, mostrando las tasas porcentuales que existe más riesgo de tener

(10) Adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 37/194 de 18 de diciembre de 1982.

TBC al interior del penal que en la población libre. En el caso del SIDA, están confirmados 92 casos.

Si bien existen otros servicios, como odontología, psicología y psiquiatría, su atención no es lo adecuada que se requiere y carece de recursos humanos e infraestructura.

En suma, consideramos que la prestación del servicio de salud en los penales del país se ha venido deteriorando. La falta de profesionales, la limitada atención médica especializada, el desabastecimiento de medicamentos, la restricción en la atención en hospitales públicos y las dificultades de los traslados a los centros hospitalarios, sustentan nuestra afirmación.

9. Servicio social

Para los 86 establecimientos penitenciarios que existen en nuestro país, la administración penitenciaria cuenta con 81 asistentes sociales. (**Ver Anexo N° 9**).

La Dirección Regional Lima tiene 47 asistentes sociales que significan el 58.03% del total de estos profesionales. Los penales que cuentan con este servicio son los de Huaraz (01), Chimbote (03), Callao (05), Mujeres de Chorrillos (03), Máxima Seguridad de Mujeres de Chorrillos (02), Lurigancho (15), Miguel Castro Castro (04), Procesados Primarios de Lima (04), Carquin de Huacho (02), Nuevo Imperial Cañete (03), Tambo de Mora de Chíncha (03) e Ica (02). Los penales que no cuentan con este servicio son los de Canta y Yauyos.

En la Dirección Regional Norte Chiclayo existen 14 asistentes sociales para una población de 4,551 internos. Atienden en los establecimientos penitenciarios de Río Seco de Piura (03), Mujeres de Sullana (02), Trujillo (02), Huacariz de Cajamarca (01), Sentenciados de Pícsi (03), Máxima Seguridad de Pícsi (01), Mujeres de Chiclayo (01) y Mujeres de Trujillo (01). En esta región 12 penales no tienen el servicio.

Es importante destacar que las Direcciones Regionales Nor Oriente San Martín y Oriente Pucallpa presentan los menores índices de atención del servicio social. Así, la Región Nor Oriente, para una población de 1,870 internos, cuenta con un solo profesional que presta servicios en el establecimiento penitenciario de Iquitos. En el segundo caso existen dos asistentes sociales para atender una población penal de 2,011 internos distribuidos en los penales de Huánuco (01) y Pucallpa (01).

La Dirección Regional Centro Huancayo, para una población de 1,874 internos, cuenta con 6 asistentes sociales que prestan servicios en los establecimientos de Huamancaca (03), La Merced (01) y Yanamilla de Ayacucho (02). Los otros 12 penales que la conforman no cuentan con este servicio.

En la Dirección Regional Sur Oriente Cusco, se cuenta con 2 asistentes sociales, quienes atienden en los establecimientos penitenciarios de Quencoro (01) y Mujeres de Quencoro (01).

La Dirección Regional Sur Arequipa es la que presenta el mejor promedio. Para una población de 1,093 internos existen 8 asistentes sociales. Dicho personal presta servicios en los establecimientos penitenciarios de Socabaya (04), Camaná (01), Mujeres de Socabaya (01), Moquegua (01) y Pocolay de Tacna (01). 02 penales carecen de atención de estos profesionales.

La Dirección Regional Altiplano Puno tiene 2 profesionales, los cuales prestan servicios en los establecimientos penitenciarios de Yanamayo (01) y La Capilla de Juliaca (01).

REGIONES	POBLACION PENAL	ASISTENTES SOCIALES
REGION NORTE CHICLAYO	4.565	14
REGION LIMA	13.892	47
REGION SUR AREQUIPA	1.093	8
REGION CENTRO HUANCAYO	1.874	6
REGION ORIENTE PUCALLPA	2.011	2
REGION SUR ORIENTE CUSCO	1.134	2
REGION NOR ORIENTE SAN MARTIN	1.870	1
REGION ALTIPLANO PUNO	989	2
TOTAL GENERAL	27.428	82

Es importante resaltar que la regla 49 de las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos⁽¹¹⁾, establece la necesidad de

(11) Resulta conveniente recordar que de acuerdo al Artículo X del Título Preliminar del Código de Ejecución Penal, las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos han sido acogidas por nuestro Sistema Penitenciario. Se puede sostener, de acuerdo a esta

tener personal penitenciario especializado en número suficiente, como es el caso de los trabajadores sociales. Esta recomendación se justifica especialmente en nuestro país, debido a que estos profesionales prestan un servicio invaluable a los internos, no sólo porque les brindan apoyo asistencial sino porque coadyuvan en el mantenimiento de sus relaciones personales. Sin duda, este servicio es el más legitimado desde la perspectiva de los internos.

El Código de Ejecución Penal en su artículo 85° se inscribe en la lógica de lo afirmado en el párrafo precedente al precisar que *“la asistencia social participa en el proceso de tratamiento del interno”*. Al mismo tiempo, le asigna la tarea de coordinar con las Juntas de Asistencia Post-Penitenciaria en las acciones para la obtención de trabajo y alojamiento del interno próximo a su liberación, aunque esta tarea prácticamente no se realiza.

En nuestro Informe de Supervisión correspondiente a 1997, se decía que el servicio brindado por los asistentes sociales era bueno. Al mismo tiempo, se señalaba que su cobertura estaba afectada por el incremento de la población penitenciaria a nivel nacional⁽¹²⁾. Esta situación no ha variado en lo absoluto, por lo que el Instituto Nacional Penitenciario debe desarrollar acciones orientadas a incrementar profesionales de este servicio.

10. Servicio psicológico

Para la atención del servicio psicológico, el INPE cuenta con 84 profesionales a nivel nacional. **(Ver Anexo N° 10)**

La Dirección Regional Lima tiene 53 psicólogos, distribuidos en los establecimientos penitenciarios de Huaraz (01), Chimbote (01), Callao (08), Mujeres de Chorrillos (04), Máxima Seguridad de Mujeres de Chorrillos (06), Lurigancho (11), Miguel Castro Castro (04), Procesados Primarios de Lima (07), Carquín de Huacho (03), Nuevo Imperial de Cañete (04), Tambo de Mora de Chíncha (02) e Ica (02).

En la Dirección Regional Norte Chiclayo existen 10 psicólogos, los cuales cubren el servicio en 8 establecimientos penitenciarios, como el de

disposición, que estas Reglas forman parte del derecho interno y, por lo tanto, deben ser respetadas y aplicadas.

(12) Defensoría del Pueblo: Derechos Humanos y Sistema Penitenciario. Supervisión de Derechos Humanos de Personas Privadas de Libertad 1997. Informe N° 11. Serie Informes Defensoriales. Gráfica Bellido S.R.L., Lima, 1998, pág. 49.

Tumbes (01), Piura (01), Mujeres de Sullana (01), Trujillo (01), Huacariz de Cajamarca (01), Sentenciados de Picsi (03), Máxima Seguridad de Picsi de Chiclayo (01), y Mujeres de Trujillo (01). Esta Región tiene 20 penales, 12 de los cuales no cuentan con este importante servicio.

Los menores índices de atención se presentan en la Dirección Región Nor Oriente San Martín que tiene 1,870 internos y sólo 2 profesionales, quienes atienden los establecimientos penitenciarios de Tarapoto (01) e Iquitos (01). Este último brinda sus servicios también en el penal Anexo de Iquitos. El 47.06% de la población regional no cuenta con este servicio. Igualmente, la Dirección Regional Oriente Pucallpa que cuenta con 2,011 internos, sólo tiene 3 profesionales, quienes prestan servicios en los penales de Huánuco (01) y Pucallpa (02).

En la Dirección Regional Centro Huancayo para una población de 1,874 internos existen 5 psicólogos que prestan servicios en los penales de Mujeres de Concepción (01), Huamancaca de Huancayo (02), La Merced (01) y Yanamilla de Ayacucho (01). No tienen atención el 13.71% de la población penal regional.

La Dirección Regional Sur Arequipa que tiene una población de 1,093 internos, cuenta con 6 psicólogos. En esta región el servicio psicológico cubre el 93.14% de la población penal y se presta en los penales de Socabaya (03) y Mujeres de Socabaya en Arequipa (02) y Pocollay de Tacna (01).

De los 13 establecimientos penitenciarios con que cuenta la Dirección Regional Sur Oriente Cusco, sólo reciben atención psicológica los de Quencoro Varones y Quencoro Mujeres, con 2 profesionales que atienden ambos penales; quedando sin este servicio el 36.95% de la población regional.

La Dirección Regional Altiplano Puno cuenta con 3 psicólogos, quienes prestan servicio en los penales de La Capilla de Juliaca (01), Yanamayo de Puno (01) y Challapalca de Tacna (01).

REGIONES	POBLACION PENAL	PSICOLOGOS
REGION NORTE CHICLAYO	4.565	10
REGION LIMA	13.892	53
REGION SUR AREQUIPA	1.093	6
REGION CENTRO HUANCAYO	1.874	5
REGION ORIENTE PUCALLPA	2.011	3
REGION SUR ORIENTE CUSCO	1.134	2
REGION NOR ORIENTE SAN MARTIN	1.870	2
REGION ALTIPLANO PUNO	989	3
TOTAL GENERAL	27.428	84

El número limitado de profesionales hace que el servicio se restrinja básicamente a la atención de beneficios penitenciarios. Las terapias individuales o grupales son limitadas. Las visitas de supervisión nos han permitido establecer que en la mayoría de penales este servicio se brinda en ambientes compartidos con otros profesionales, hecho que afecta la calidad del servicio pues por su naturaleza no sólo requiere de ambientes adecuados sino de privacidad. Como ocurre con los otros servicios, tampoco cuentan con material especializado e instrumentos clínicos, por ello, en muchos casos se limitan simplemente a repartir la hoja de protocolo, recortando así la capacidad del servicio.

A través de los pocos programas terapéuticos que existen, se brindan charlas y conferencias; básicamente en drogadicción, sexualidad, autoestima y reincidencia en coordinación con las asistentes sociales.

El fortalecimiento de este servicio es fundamental, pues cada vez es más notoria la sintomatología que vienen presentando muchos internos relacionados con problemas psicológicos y psiquiátricos. La demanda del servicio es mayor en los internos que se encuentran sometidos a regímenes especiales, tanto los considerados de difícil readaptación, como los internos por el delito de terrorismo y traición a la Patria, pues están sujetos a largos períodos de encierro y poco contacto social.

11. Servicio religioso

Los artículos 93° y 94° del Código de Ejecución Penal establecen la libertad de culto y la asistencia religiosa en los establecimientos penitenciarios. Se puede afirmar que en los penales supervisados existe

una libre actividad religiosa, aunque con ciertas restricciones en los de máxima seguridad.

Sin duda, el culto religioso es una de las actividades más importantes que el interno realiza en un establecimiento penal para mitigar los efectos de la prisión. La presencia de la iglesia católica, la evangélica y otras instituciones religiosas es permanente, no sólo en la ejecución de labores carismáticas sino también asistenciales. En este último rubro, prestan apoyo legal, psicológico, servicio social e impulsan diversos programas asistenciales en salud principalmente a los sectores más vulnerables de la población penal, como los enfermos en grave estado, internos psiquiátricos, etc.

Es importante destacar que en los penales de máxima seguridad, se ha dado paso a los denominados pabellones "pilotos" que son ambientes donde se brindan mayor espacio para la actividad religiosa y a partir de ella, otras ocupaciones. Es el caso de los penales Miguel Castro Castro y Chorrillos en Lima y de Yanamayo en Puno, donde los agentes pastorales apoyados por religiosos y autoridades policiales y penitenciarias han logrado espacios importantes a partir de actividades laborales, de autoestima, revalorización de principios, respeto a la vida y a la persona, que desde nuestra perspectiva constituyen los resultados más trascendentes de la actividad pastoral en los últimos años y un soporte efectivo al proceso de pacificación en nuestro país.

Si bien existe actividad religiosa en casi todos los penales, pocos cuentan con ambientes especiales destinados al culto (capillas o auditorios). Por ello, se llevan a cabo en ambientes que se acondicionan ocasionalmente para éste fin. En los penales de máxima seguridad la actividad religiosa se realiza con algunas restricciones como es el caso del penal de Yanamayo, donde los agentes pastorales tienen dificultad de acceso al penal o les limitan el tiempo de su permanencia.

Consideramos importante resaltar la actividad que la iglesia católica presta a través de una red nacional. La labor de la pastoral carcelaria relacionada con las celebraciones eucarísticas, catequesis y acompañamiento espiritual, se presta a través de capellanes, religiosos y laicos. En esta línea de trabajo debemos de resaltar la realizada por la Comisión Episcopal de Acción Social.

Desde la opción evangélica un equipo de agentes pastorales visita también los establecimientos penitenciarios realizando una importante labor. Así, en el pabellón 18 del penal de Lurigancho en Lima patrocinan el "Centro

Victoria", que realiza actividades destinadas a ayudar a internos que voluntariamente desean salir de la adicción del alcohol y las drogas. Para este efecto, han diseñado una organización de varios niveles que han denominado: novatos, pre-guerreros, guerreros, pre-vencedores, vencedores y conquistadores. Cada una de estas etapas tiene sus propios requisitos. Por ejemplo, en el caso del aspirante o novato, debe permanecer durante 04 meses apartado del mundo exterior y sin ningún contacto con el. En este período no se exige mayor obligación que la de permanecer en dicho ambiente. Cumplido este término es denominado pre-guerrero y comienza a participar en labores administrativas para así seguir ascendiendo. Desde la opción evangélica es destacable la labor efectuada por la Asociación Paz y Esperanza.

Desde nuestra perspectiva, la actividad realizada por los agentes pastorales tiene primaria importancia. No sólo porque trabajan directamente con la persona rescatando sus valores, principios y fortaleciendo su autoestima, sino porque contribuyen de manera excepcional a mantener la tranquilidad de los establecimientos penales, su concurso ha permitido solucionar innumerables conflictos. Con toda certeza, sin la labor pastoral los establecimientos penales de nuestro país no sólo serían verdaderas bombas de tiempo, sino que dentro de ellas se habría perdido toda esperanza. Por tales consideraciones, el desarrollo de la actividad pastoral debe ser promovida e impulsada por las autoridades penitenciarias.

11.1 La Capellanía del E.P. de Lurigancho

La Capellanía del penal de Lurigancho está ubicada en el pabellón número catorce, en el ala denominada "Jardín 2". De 1978 a 1990, la Capellanía funcionó en el primer piso del pabellón sólo como una capilla destinada a la celebración de actividades litúrgicas. Luego amplió considerablemente sus actividades, pero continúa manteniendo el mismo nombre.

La Capellanía cuenta con la participación de 30 agentes pastorales, la mayoría de los cuales lo hacen de manera voluntaria. En la plana profesional cuenta con 4 psicólogos, 2 abogados, 4 educadores, 1 economista, 1 antropólogo, 1 enfermera y religiosos de diversas congregaciones.

La Capellanía del penal de Lurigancho, en coordinación con los promotores de cada pabellón, brinda a los internos los siguientes servicios:

- Servicio legal, se avoca exclusivamente a la absolución de consultas y orientaciones legales. No se asumen defensas pues sólo cuentan con dos abogados quienes no podrían cubrir la demanda.
- Servicio de salud, brinda atención de tópico, programa de botiquines y realiza acciones de prevención en tuberculosis y SIDA. También se apoya a los enfermos psiquiátricos.
- Servicio de cultura, encargado de implementar y manejar la biblioteca de cada pabellón. La biblioteca central funciona en la Capellanía y recibe el apoyo de diversas revistas quienes les remiten material bibliográfico que es distribuido en las bibliotecas de los pabellones.
- Servicio de recreación, organiza actividades recreativas como campeonatos deportivos, ajedrez, ping-pong, festival de la canción, entre otros.

El Programa ANDA

El Programa ANDA responde a las iniciales de "Alcohólicos, Narcóticos, Delincuentes Asociados" que ha sido impuesto por los propios internos. Se trata de un programa terapéutico de rehabilitación para personas privadas de libertad y liberados que presentan adicción a las drogas. El Programa se inspiró en el "Proyecto Uomo" o "Proyecto Hombre" desarrollado en España e Italia, donde se puso énfasis en el tratamiento a internos con problemas de consumo de drogas.

Este servicio, que se brinda en el segundo piso del pabellón Capellanía, se inició en 1990 luego de una campaña de divulgación a través de obras teatrales, en las que se introducía la idea del programa a través de charlas motivadoras a las que acudían voluntariamente internos de todos los pabellones del penal de Lurigancho. El Programa empezó a funcionar en 1991 con la asistencia de 05 internos quienes apostaron por su rehabilitación.

Actualmente, el programa ANDA alberga a 52 internos quienes viven en el segundo piso del pabellón Capellanía, que fue construido entre diciembre de 1990 y abril de 1991 con recursos de sus patrocinadores y con mano de obra de los propios internos.

Se busca inicialmente combatir los problemas del consumo de drogas y luego trabajar sobre la personalidad del interno, poniendo énfasis en su conducta delictiva. Los internos que pretenden participar en el Programa, deben cumplir determinados requisitos y aprobar diversas etapas de evaluación.

Un requisito básico es no tener sintomatología psiquiátrica y permanecer como mínimo un período de 6 meses.

a. Etapas del Programa ANDA

- **La entrevista inicial.-** El proceso de admisión de un interno al Programa ANDA, se inicia con una entrevista que es realizada por un psicólogo, en la que se establecen compromisos relacionados con el cumplimiento de horarios, aseo personal y otras actitudes enmarcadas en la auto responsabilidad. En este período se elabora una ficha personal y tiene una duración aproximada de 1 mes.
- **Grupo de acogida.-** En la segunda etapa, inician actividades de motivación y buscan contactos con la familia. El trabajo se va centrando en la evaluación del problema por el cuál el interno solicitó su ingreso al Programa, es decir el consumo de drogas. Se pretende que el interno asuma su condición de persona y busque reintegrarse a la sociedad. En éste esfuerzo participa el psicólogo y el educador. Se firma un compromiso con la familia del interno y éste asume también otros de carácter personal como el no consumo de drogas, la no adopción de aptitudes de violencia y la asistencia diaria a las charlas.
- **Etapas de orientación.-** A partir de esta etapa el interno se traslada físicamente a las instalaciones del Programa, donde deberá permanecer en el futuro. Se le informa lo que se espera de él y lo que se le puede ofrecer. Para ingresar a esta etapa se requiere que el Director del establecimiento penitenciario autorice el traslado de pabellón.
- **Etapas intermedia.-** Consiste en un trabajo de motivación, buscando identificar el problema personal que afecta al interno. Es decir, se trata de establecer las condicionantes que

motivaron que incurriese en un delito. Se utiliza el método de la anamnesis.

- **Etapas de comunidad.-** Se desarrollan las enseñanzas de las etapas anteriores. Para llegar a este período el interno tiene que haber permanecido en el Programa un mínimo de 2 años.
- **Etapas de reinserción.-** Es un trabajo que se realiza extramuros luego de que el interno ha egresado del establecimiento penitenciario. Desde mediados de 1993, han iniciado actividades con las familias de los internos residentes. Desde abril de 1995 ANDA cuenta con una Casa de Acogida, que además de servir como centro de reunión con las familias, es la oficina central y el lugar donde acogen a todos los liberados que tengan necesidad de continuar con el proceso de rehabilitación.

De otro lado, el Programa cuenta con tres ambientes. El primero, para la etapa de orientación que alberga a 15 internos. El segundo, para quienes se encuentran en la etapa intermedia con 15 personas; y, el tercero, para quienes accedieron a la etapa de comunidad que beneficia a 13 internos. Cuenta también con una cocina para la preparación de alimentos, que es solventada con las cuotas que corresponden a los internos participantes, por sus familiares y por los aportes de los responsables de Capellanía. Para la atención terapéutica y la convivencia comunitaria, cuentan con un espacio de recreación, deportes y huerto. Como todo pabellón, la Capellanía está sujeto a las reglas del penal, a las requisas, aplicación de medidas disciplinarias y otras formas de control.

11.2 La Voz de la Esperanza: un programa radial para los internos

El Equipo Pastoral de Cárceles de Arequipa inició la experiencia de un programa radial para internos a fines de agosto de 1995. La idea fue sencilla; muchos internos no son del lugar donde se encuentran presos y sus familias no siempre tienen la posibilidad de visitarlos ni la costumbre de escribirles. Entonces se preguntaron ¿por qué no implementar un medio de comunicación que permita un acercamiento entre el interno y sus seres queridos?

Aprovechando que la mayoría de los internos del penal de varones de Socabaya (Arequipa) tenían receptores de radio, se pensó que a

través de este medio podrían recibir saludos de sus familiares y amigos. Con esta idea básica buscaron una emisora y encontraron al Padre Eloy Arribas, Director de Radio Yaraví, quien aceptó inmediatamente la idea y les pidió escoger un día a la semana. Optaron por el jueves en el horario de 9 a 10 de la noche. Se inició entonces una campaña de motivación a través de la misma radio y distribuyeron afiches en el penal para informar de la iniciativa. El programa recibió el nombre de: La Voz de la Esperanza.

Cuentan que las primeras semanas fueron difíciles porque nadie mandaba saludos, por ello el equipo de la Pastoral de Cárceles visitó a los amigos para pedir que mandaran saludos a algún conocido en el penal. En tanto, la hora del programa era cubierta con música, con la participación de un abogado, quien brindaba algunos consejos legales e informaba lo que pasaba en el penal.

Después de ese período inicial los internos empezaron a mandar saludos a sus familiares y a sus propios compañeros. Los saludos de un pabellón a otro crecían, con todo el colorido de los sobrenombres y de muchas referencias a la vida interna del penal, se solicitaban canciones y así, poco a poco, empezaron a apropiarse del programa.

Para entonces, ya empezaba a faltar tiempo para complacer a todos. Tuvieron que agradecer los servicios del abogado para tener más espacio en el programa, pues también empezaron a llamar los familiares. Primero desde la misma ciudad de Arequipa, para mandar saludos, para avisar que no irían el día de visita o para comunicar cualquier aspecto relacionado con su defensa y luego, comenzaron a llegar las llamadas de fuera de Arequipa. Asimismo, los internos foráneos empezaban a escribir a sus parientes pidiéndoles llamar al programa a fin de poder escuchar su voz en directo.

Luego se inició otro segmento cuando empezaron a llegar mensajes para las internas del penal de mujeres, especialmente de sus hijos y otros familiares. Los hijos informaban a sus madres cómo iban en la escuela, leían pequeños poemas y las reconfortaban con diversos mensajes. También los jóvenes del Centro de Menores Alfonso Ugarte comenzaron a participar, aunque con algunas restricciones pues desde la dirección muchas veces les impedían escribir. Para entonces, el programa había alcanzado gran sintonía.

Por el primer aniversario se amplió el programa a una noche más en el mismo horario. Al año siguiente salían ya tres veces por semana, los martes, miércoles y jueves. No se amplió más porque estimaban que era suficiente, pues era difícil que los internos escuchen la radio más de tres noches seguidas.

Están en el quinto año y el programa se ha consolidado. Durante este período ha cambiado en su forma y en sus protagonistas. Inicialmente había sido concebido para que los familiares saluden a los internos, sin embargo evolucionó de tal forma que son más bien los internos quienes emiten los mayores saludos a sus familiares y a sus propios compañeros de presidio. Se afirma que dos tercios del programa está cubierto con los saludos de los internos y un tercio con los emitidos por sus familiares y amigos. Los saludos se emiten por teléfono, por cartas o directamente desde cabina cuando los familiares o amigos se apersonan a la radio.

Mucha gente que no tiene relación con el mundo carcelario escucha el programa y algunos mandan saludos por simpatía. En el programa se leen los poemas que escriben los internos, sus oraciones y sus inquietudes, cuyos contenidos sorprende a muchas personas. Esto contribuye a la imagen de las personas privadas de libertad ante la sociedad.

Para los internos que no reciben visita es un medio que les permite mantener el contacto con su familia. Hoy se reciben llamadas de Lima, Cuzco, Camaná y Tacna, incluso de Colombia y de Chile. El impacto en los internos que escuchan la voz de un ser querido es importante.

La Voz de la Esperanza es una iniciativa sencilla y poco costosa (gracias a la colaboración de la radio emisora). Sin embargo, tiene un impacto significativo en la vida de los internos y en la sociedad civil. Es un medio que permite acercar la cárcel a la sociedad, mantener el contacto entre los internos y sus seres queridos y también un instrumento importante para la expresión de los internos.

El Equipo Pastoral de Cárceles de Arequipa señala no haber tenido dificultades con las autoridades del penal, pues las cartas que son remitidas a la radio son previamente revisadas. El temor inicial del uso de este medio para transmitir información codificada quedó atrás.

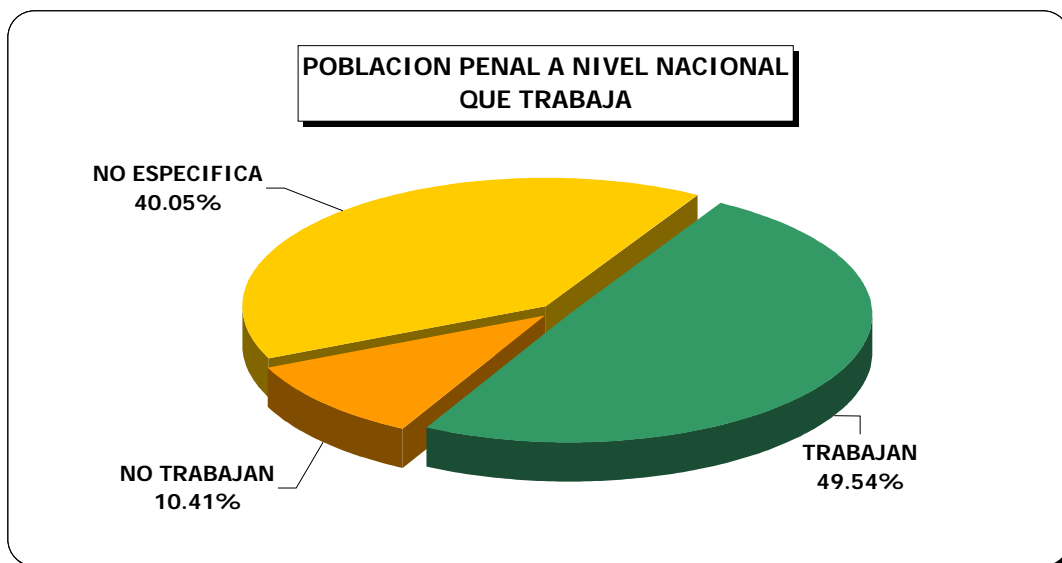
12. El trabajo penitenciario

El trabajo dentro de un establecimiento penitenciario es de primera importancia, no sólo porque forma parte de un mecanismo eficiente de reinserción social del interno, sino porque a través de él contribuye con su sostenimiento y el de su familia.

En la mayoría de los penales supervisados no existen ambientes adecuados para la realización de las actividades laborales del interno. Por ello, se llevan a cabo en ambientes improvisados o en talleres que están en malas condiciones o que no tienen la capacidad que se requiere, haciendo que los internos trabajen en los patios e incluso en sus propias celdas. Las máquinas y herramientas con que trabajan los internos tienen mínimo mantenimiento; de hecho son pocas, por lo que generalmente trabajan con sus propias herramientas.

Los materiales e insumos para el trabajo son suministrados básicamente por los familiares del interno y en algunos casos por el INPE a través del jefe de trabajo del penal.

La población penal que trabaja es de 13,588 internos, que representan el 49.54% de la población penitenciaria a nivel nacional. Los que no trabajan son 2,856 (10.41%) y los que no especifican 10,984 (40.05%). **(Ver Anexo N° 11).**



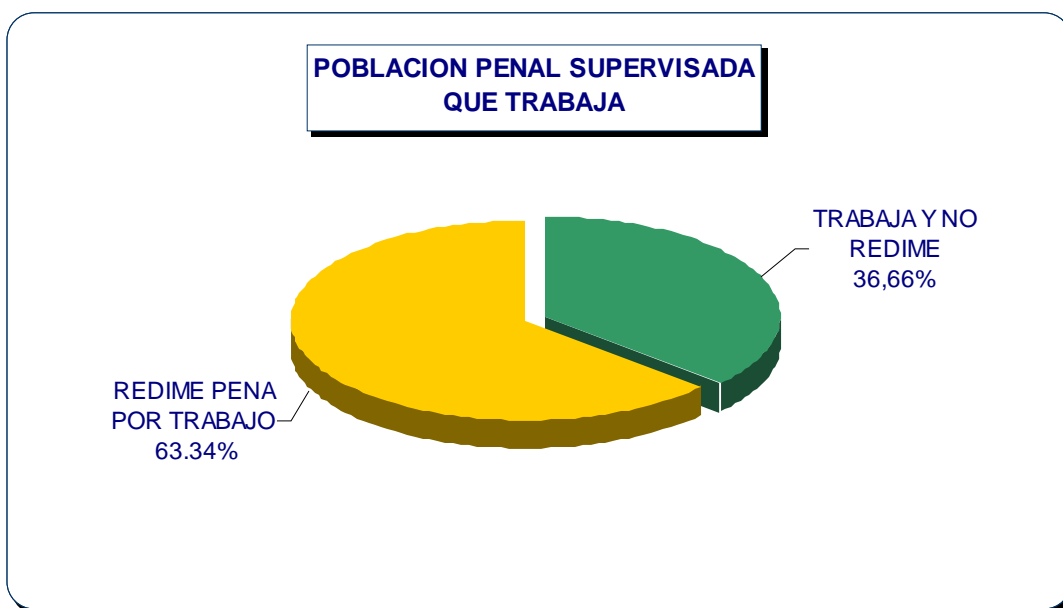
Las labores que mayoritariamente realizan son de tejido, trabajos en arte, carpintería y juguetería. A la primera actividad se dedican el 19.60% de la

población penal que trabaja, a la segunda el 13.08%, a la tercera el 11.92% y a la cuarta el 4.94%.

Los internos varones que trabajan son 12,038, lo que representa el 48% del total de la población penal masculina a nivel nacional. El 20.70% lo hacen en tejido, el 16.08% en arte, el 15.66% en carpintería, el 5.82% en juguetería y el 41.73% en otras labores.

Las mujeres que trabajan son 1,550, que representan el 65.87% de la población penal femenina a nivel nacional. Las labores más realizadas son tejido con 19.84%, manualidades 8.52%, costura 6%, lavandería 5.94% y otras opciones de trabajo 53.61%.

Como señalamos anteriormente, la población penal supervisada alcanzó a 22,197 internos. De ellos, el 52.16% (11,578 internos) realizan alguna actividad de carácter laboral. De éste universo (11,578 internos), el 63.45% lo hace con la finalidad de redimir la pena y 36.55% lo hace sin tal finalidad. Evidentemente, muchos internos que trabajan no redimen pena porque tiene prohibido este beneficio por el tipo de delito que cometieron o en algunos casos, simplemente porque no se han inscrito en las planillas correspondientes por una inadecuada organización del establecimiento penal.



De acuerdo a la información proporcionada por el INPE, en la Región Lima, de una población penal de 12,890 internos, solamente trabajan 5,156 (40%), de los cuales redimen pena el 67.07%. Esta misma

tendencia se presenta en la Región Altiplano de Puno, pues de una población de 825 internos, 367 trabajan (44.49%) y sólo redimen 239 internos (28.97%). En este último caso, se explica por la alta densidad de internos que esta región tiene por delitos de terrorismo y traición a la patria, robo agravado, secuestro y otros, que tienen prohibidos los beneficios.

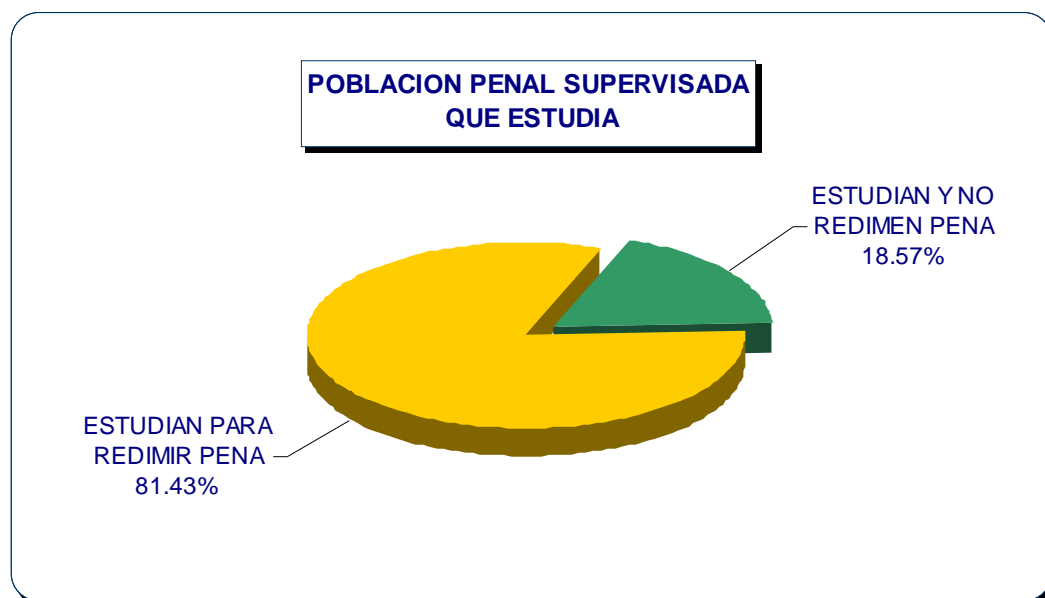
La Región Sur tiene el más alto índice de población que trabaja con el 88.20%, de los cuales redimen pena el 68.03%. En la Región Sur Oriente el número de internos que trabaja es también elevado, con el 80.12%, quienes en su mayoría lo hacen con el fin de redimir su pena. Asimismo, en la Región Nor Oriente el 70.43% de la población supervisada trabaja y de ésta solamente el 17.77% redime la pena.

La Región Norte cuenta con 3,085 internos, de los cuales 2,095 trabajan (67.91%) y redimen pena por trabajo 1,156 (55.18%). En la Región Centro, se encuentran 968 internos, de ellos 616 realizan alguna actividad laboral (63.64%) y redimen 264 (42.86%). La Región Oriente cuenta con una población de 1,300 internos y realizan alguna actividad laboral 866 (66.62%), de los cuales 731 redimen pena (84.41%).

13. La educación penitenciaria

El Estado a través del Instituto Nacional Penitenciario debe promover la educación del interno para lograr su formación profesional o capacitación ocupacional, tal como lo establece el artículo 69° y siguientes del Código de Ejecución Penal. Es evidente que este propósito ha perdido vigor en los últimos tiempos, por la clara tendencia de priorizar la seguridad en los establecimientos penales de todo el país. Ello se evidencia no sólo por los pocos recursos destinados a la educación, sino por la inexistencia de infraestructura con dicha finalidad en los establecimientos penales construidos durante la presente década. La implementación de regímenes internos especiales (D.S. N° 003-96-JUS y D.S. N° 005-97-JUS) han agudizado esta situación, en tanto no permiten o restringen al interno el acceso a esta actividad. En términos generales se puede afirmar que la educación en los establecimientos penitenciarios es insuficiente y limitada.

De otro lado, del total de la población penal supervisada, 6,043 internos realizan alguna actividad educativa, de los cuales el 81.43% lo hace con la finalidad de redimir su pena y el 18.57% con fines de capacitación. **(Ver Anexo N° 12).**



Los internos de la Región Oriente son quienes participan en mayor proporción en los programas de educación. De los 1,300 internos, 529 (40.69%) realizan actividades educativas, de los cuales 372 (81.15%) lo hacen con la finalidad de redimir sus penas. De otro lado, de los internos de la Región Centro, sólo el 15.29% (148 internos) estudia y todos lo hacen con fines de redención.

En la Región Norte estudian 601 internos (19.48% de la población regional) y redimen pena 309 (51.41%); en la Región Lima, de 3,556 internos que estudian (27.59%), redimen pena 3,178 (89.37%); de los 336 internos que estudian en la Región Sur (30.97%), redimen pena 251 (23.13%); en la Región Sur Oriente, estudian 249 internos (29.64%) y redimen pena 217 (87.15%); en la Región Nor Oriente estudian 304 internos (25.25%) y todos lo hacen para redimir sus penas; por último, en la Región Altiplano, estudian 320 internos (38.79%) y redimen pena 142 (81.43%).

Sin duda, teniendo en consideración la finalidad de la pena, asignada por nuestra normatividad, la educación debe ser una de las tareas que con mayor vigor se impulse desde la administración penitenciaria. Los convenios con universidades e institutos superiores estatales o privados, son opciones que deberían impulsarse con mayor énfasis a efectos de llevar la educación a las prisiones. Junto a ello, consideramos necesario brindar mayores facilidades de acceso al interno para recibir cursos a distancia y material bibliográfico.

14. Régimen de visitas

Las personas privadas de libertad tienen derecho a conservar los vínculos con sus familiares, amigos y comunicarse con el mundo exterior, tal como lo establece el artículo 38° del Código de Ejecución Penal. Dicha norma dispone que la administración penitenciaria debe estimular e intensificar las comunicaciones y visitas en cuanto sean beneficiosas para el interno. El artículo 39° del mismo cuerpo legal expresa que las visitas deben realizarse en ambientes especiales, horarios, periodicidad y condiciones que establezca el Reglamento. Estas disposiciones son concordantes con las establecidas en los Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos, especialmente el Principio 19°.

La visita constituye entonces un derecho fundamental para asegurar la relación familiar entre el interno, su cónyuge o pareja y sus hijos. Durante la supervisión de establecimientos penales, hemos constatado que este derecho se reconoce regularmente.

El sistema de visitas en los establecimientos penales, tiene relación directa con el régimen penitenciario en el que se encuentra la persona privada de libertad. Los internos por delitos comunes tienen derecho a visitas tres veces a la semana en promedio, dentro de un horario de 9 a.m. a 5 p.m. aproximadamente.

Los internos sujetos a regímenes especiales tienen su propio sistema. Así, el régimen para internos procesados y sentenciados de difícil readaptación previsto en el D.S. N° 003-96-JUS, modificado por el D.S. N° 007-98 JUS, establece que quienes se encuentran en la etapa de aislamiento celular, no tienen derecho a la visita ni a ningún tipo de contacto social. Los que se encuentran en la etapa cerrada de máxima seguridad, una visita semanal de tres familiares directos por una hora en locutorio, incluyendo la visita de sus hijos menores; en esta etapa no tienen derecho a la visita íntima. Los que se encuentran en la etapa de promoción a la mediana seguridad, tienen derecho a una visita semanal de tres personas debidamente autorizadas por dos horas y en ambientes destinados para tal efecto, incluida la visita de sus menores hijos; tienen visita íntima de acuerdo al Código de Ejecución Penal.

La visita para los internos de terrorismo y traición a la Patria sujetos al D.S. N° 005-97-JUS, varía de acuerdo a la etapa en que el interno se encuentre. Una visita semanal de dos horas de duración por locutorio para las etapas de Máxima Seguridad y Promoción a la Mediana Seguridad.

Para la etapa de Mediana y Mínima Seguridad tres y cuatro horas respectivamente en forma directa. Además, se permite la visita de los menores de edad una vez a la semana en los horarios establecidos para los adultos.

Consideramos que el sistema de visitas a través de locutorios no resulta conveniente para un adecuado fortalecimiento de los vínculos familiares de los internos, menos aún para los niños. Superada la emergencia que pudo explicar la necesidad de implementar este mecanismo por razones de seguridad, consideramos conveniente la eliminación de este sistema. De otro lado, prácticamente todos los penales no cuentan con ambientes especiales para recibir visitas, por ello los internos las acogen en los patios e incluso en sus propias celdas.

Con frecuencia, en la Defensoría del Pueblo se han recibido quejas sobre los excesos en el control de las visitas de parte de algunos efectivos policiales y personal penitenciario. Un aspecto delicado de esta problemática constituyen las revisiones corporales a las visitas de sexo femenino, particularmente las de tipo vaginal, que no sólo se practican en personas adultas sino incluso en niñas, lo que nos parece un exceso.

Si bien en ocasiones existen razones que podrían justificar una revisión corporal especial de una visitante por razones de seguridad, ésta debe ser excepcional sobre la base de circunstancias que permitan suponer razonablemente un comportamiento ilícito de la persona. Es decir, la revisión vaginal no puede constituir de ninguna manera una práctica ordinaria de control de las visitas. Ello afectaría el derecho a la integridad e intimidad de las personas.

Además, la revisión íntima es realizada por personal femenino encargado de la seguridad, lo que nos parece inconveniente. Ante la necesidad excepcional de su práctica, ésta debe ser efectuada en todos los casos por personal profesional del área de salud, con conocimiento del Ministerio Público y en ningún caso deben ser practicadas en menores de edad. En consecuencia, la revisión corporal (cacheo) tanto de varones como mujeres, debe efectuarse respetando la dignidad de las personas y tratando de causar el mínimo de molestias. De lo contrario, no sólo se estaría cometiendo un acto arbitrario, sino desalentando el retorno de la visita del interno, lo cual es sumamente grave.

Otro aspecto de esta problemática está relacionado con los mecanismos de revisión de los productos que los familiares llevan al interno. La manipulación excesiva de comestibles incluso con objetos no higiénicos, la

obligación de pelar algunas frutas, los cambios de recipientes de alimentos envasados, la retención de algunos productos alimenticios, la limitación en la cantidad, etc. constituyen temas concurrentes. Además, las colas para el ingreso al penal (algunas de muchas horas), los actos de corrupción para lograr accesos inmediatos, son parte de esta problemática. También el sistema de control a través de sellos en los brazos de los visitantes, que aplicado a los adultos puede ser razonable, resulta incomprensible en los niños, particularmente cuando se trata de menores que visitan un penal destinado a internos del sexo opuesto.

La administración penitenciaria debería promover campañas de prevención a fin de evitar que los familiares o amigos que visitan un penal se involucren en actos ilícitos intentando introducir objetos prohibidos. Igualmente, deben de precisar con mayor claridad los límites de alimentos y la restricción de bienes que pueden llevar al penal. De hecho, hemos constatado que en la mayoría de los establecimientos, no existen criterios uniformes o que estén supeditados al estado de ánimo o voluntad del personal de turno encargado de la seguridad, hecho que es fuente de permanente conflicto.

Otro aspecto que debe ser materia de evaluación también es la duplicidad de control a las visitas. En algunos penales, como el de Yanamilla en Ayacucho, se ha instaurado de hecho un doble sistema de control. Así en las afueras del penal, lo realizan en primera instancia los efectivos policiales y luego, en la puerta del penal los agentes penitenciarios. Como ocurre en todos los penales del país, incluso en los de máxima seguridad, el personal encargado del control y la revisión de visitas corresponde a la institución que tiene a su cargo la seguridad del penal, en este caso el personal penitenciario. Por ello, nos parece innecesario la labor que sobre esta materia realizan los efectivos policiales, no sólo porque se efectúan en la vía pública y en malas condiciones de higiene, sino porque el doble control genera incomodidades y molestias a los familiares que se deben evitar.

Consideramos que las autoridades penitenciarias deben de promover e incentivar las visitas, no sólo por que ello podría evitar el desmembramiento familiar del interno, sino porque constituyen el mecanismo más importante de provisión de alimentos complementarios, medicamentos, materiales de trabajo e incluso asistencia legal. Sin duda, un mejor y adecuado flujo de las visitas contribuye substantivamente con la tranquilidad de un penal.

15. Visita íntima

La visita íntima está establecida en el artículo 58° del Código de Ejecución Penal como un beneficio penitenciario. Tiene por objeto mantener la relación del interno con su cónyuge o concubino.

La misma se encuentra reglamentada por la Resolución Jefatural N° 084-90-SJ-INPE, de fecha 15 de marzo de 1990, que aprobó las normas complementarias y el programa para su aplicación. Adicionalmente, se ha emitido la Directiva N° 005-90-INPE-DGR-DAS del 30 de junio de 1998, que aprobó las normas y procedimientos para las visitas íntimas en los establecimientos penitenciarios del país. Ambas disposiciones son aplicadas de manera parcial pues no han tenido la difusión suficiente entre las propias autoridades y los internos.

En realidad, pocos son los penales de nuestro país que tienen una infraestructura adecuada para la visita íntima. En el caso de penales de varones, el de Yanamilla de Ayacucho, Tambo de Mora en Ica y Río Seco en Piura son los más significativos, pues están en funcionamiento. En la mayoría de penales ante la inexistencia de una infraestructura adecuada es frecuente que los internos mantengan relaciones sexuales con sus parejas en sus propias celdas durante los días de visita.

En el caso de las mujeres, el acceso a este beneficio es mucho más restringido. En nuestro país, existen sólo dos penales de mujeres que tienen ambientes en funcionamiento para la visita íntima (adonisterios). El primero, el Establecimiento Penitenciario de Máxima Seguridad de Chorrillos, donde las internas que participan del programa pueden recibir a sus parejas cada quince días. Para ello, deben cumplir con algunos requisitos como encontrarse en la etapa de mínima seguridad, tener buena conducta, probar la relación con el cónyuge o concubino, haber participado en los programas de planificación familiar, en el programa de lucha contra el cáncer uterino y mamas, contar la pareja con los certificados médicos de la prueba de Elisa, que en caso del varón deberá hacerse en la Posta Médica de Chorrillos, y además contar con la aprobación del Organismo Técnico de Tratamiento, previa solicitud. El segundo, el penal de Socabaya Mujeres de Arequipa, cuyo adonisterio presta servicios a un reducido número de internas. Se puede afirmar, que existe una suerte de discriminación con las internas en este aspecto.

De otro lado, por la sobrepoblación existente en algunos penales como el de Miguel Castro Castro de Lima, los venusterios vienen siendo utilizados como celdas transitorias. Es conveniente que la administración

penitenciaria habilite ambientes destinados a la visita íntima en todos los penales donde sea posible, para evitar que su práctica se efectúe en ambientes inadecuados y sin la higiene necesaria. De hecho, un sistema sin control es fuente de altos niveles de corrupción y promiscuidad.

16. Política de traslados

El traslado de una persona privada de libertad de un establecimiento penal a otro puede realizarse por disposición de la autoridad penitenciaria o a solicitud del interesado. En el primer caso puede responder a criterios de seguridad, medida disciplinaria, descongestión o juzgamiento. En el segundo, el traslado puede ser por unidad familiar o por salud. En la presente década, la política de traslados de internos se ha acentuado considerablemente.

De un lado, aquellos efectuados en el contexto de la lucha contra el terrorismo como parte de la estrategia antisubversiva, pues de ese modo se pretendía desvincular al interno de su organización. En la actualidad, es notorio que la mayoría de los internos por delitos de terrorismo y traición a la Patria, se encuentran reclusos en establecimientos penales distintos de sus zonas de origen o de los lugares donde cometieron sus delitos.

De otro lado, la política de construcción de penales ha generado la necesidad de una redistribución de la población penal. Si bien es indiscutible una decisión de tal naturaleza, los criterios empleados para ello no siempre han sido los más adecuados, pues en muchos casos se han efectuado con escasa reflexión o sin evaluar sus consecuencias.

Sin duda, un aspecto delicado de esta problemática son los traslados intempestivos. Frecuentemente, se efectúan durante la noche, los internos son sacados de sus celdas con violencia y con la ropa que llevan puesta, sin permitirles llevar todas sus pertenencias. Este tipo de actos de evidente arbitrariedad produce inseguridad en el interno pues generalmente no conoce su destino. La Defensoría del Pueblo en muchas ocasiones ha intervenido no sólo para verificar la nueva ubicación física del interno, sino para comunicar esta situación a sus familiares. De hecho, sería conveniente que la administración penitenciaria establezca un mecanismo de información para los familiares, pues luego de un traslado sin destino conocido, que obviamente produce desconcierto, se producen escenas lamentables que bien se podrían evitar.

Si bien es incuestionable la necesidad de efectuar traslados de internos, consideramos que tales decisiones se realizan, en su mayor parte, como mecanismos de control del orden interno y se aplican frecuentemente como castigo. En tal hipótesis, la política de traslados refleja un manejo vertical de las prisiones.

Ahora bien, superada la etapa de emergencia y a partir de la constatación de la existencia de un gran número de internos desvinculados de los grupos subversivos y de otro sector que se acogieron a los beneficios de la Ley de Arrepentimiento, consideramos importante impulsar políticas de traslados de internos a sus lugares de origen. Debemos de recordar, que el traslado de un interno no sólo implica un cambio físico de su lugar de reclusión, sino también la pérdida del respaldo familiar, que no sólo se traduce en el fraccionamiento de las relaciones familiares, sino en la suspensión del apoyo material que podía estar recibiendo en alimentos, medicamentos, materiales de trabajo, etc. De hecho, si la distancia es considerable y el interno carece de recursos económicos, es frecuente no sólo el deterioro notable de su vínculo familiar, sino la pérdida definitiva de la misma.

Por todo ello, en primer lugar, es necesario un mejor control del sistema de traslados, no sólo para que tales decisiones se ajusten a la exacta necesidad, sino también para evitar actos de corrupción que circundan alrededor de estas decisiones. De otro modo, no se explica el traslado de personas que por sus características tendrían que haber sido exceptuadas de tales medidas. Además, la permanente posibilidad de un traslado intempestivo propicia también actos extorsivos por la posibilidad -real o ficta- de ser incluidos en los próximos traslados. En segundo lugar, la necesidad de implementar una política de traslado de internos a sus lugares de origen, por razones de unidad familiar o simplemente a solicitud del interesado. De hecho, en principio el intercambio de internos entre un penal y otro podría ser una opción interesante por cuanto no alteraría el equilibrio de la población penal.

Finalmente, consideramos que formular una solicitud de traslado es un derecho del interno, que el Consejo Técnico Penitenciario de cada establecimiento penal debería resolverla con prontitud. La dificultad presupuestaria de la administración para efectuar traslados, no debe ser argumento para limitar este derecho, pues sus costos en muchos casos pueden ser sufragados incluso por el propio interno o sus familiares. Además, en otras ocasiones este costo ha sido asumido por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y por algunas organizaciones no gubernamentales que realizan trabajos en cárceles.

SEGUNDA PARTE

Política Criminal y Sistema Penitenciario

CAPITULO III

POLITICA CRIMINAL DE EMERGENCIA Y SISTEMA PENITENCIARIO

1. El derecho penal garantista

En doctrina se han elaborado principios y garantías que limitan la capacidad del derecho penal para afectar derechos fundamentales, basados en el respeto a la dignidad e integridad de la persona. Estos principios contienen además requisitos sobre el contenido de las normas penales, así como sobre su aplicación por los agentes del sistema de control penal, pues se entiende que el derecho penal no tiene capacidad absoluta para limitar los derechos fundamentales de la persona.

Regularmente se afirma que existe contradicción entre una posición *garantista* del derecho penal y la necesidad del Estado de proteger a la sociedad. En esta línea, se sostiene que resulta necesario escoger entre la seguridad de unos pocos (los que delinquen) o de la mayoría (la sociedad). Además, la limitación de garantías fundamentales origina una justicia penal más eficaz, en tanto que su respeto promueve la impunidad de quienes delinquen.

Según Cafferata Nores, esta contradicción es falsa y sólo sirve para deslegitimar opciones garantistas en nombre de la defensa de la seguridad ciudadana. En la misma línea, Mera afirma que *"En un Estado Democrático de Derecho no debe existir oposición entre política criminal y derechos humanos"*.⁽¹³⁾

En este sentido, las garantías y principios del sistema penal configuran el llamado *"sistema garantista"*, que busca la eficiencia en la persecución de la criminalidad, en el marco del respeto de los derechos del ciudadano, ya que como señala Ferrajoli *"sólo un derecho penal reconducido únicamente a la función de tutela de bienes y derechos fundamentales puede, en efecto,*

(13) MERA FIGUEROA, Jorge: "Adecuación del derecho penal chileno a las exigencias de los Derechos Humanos". En: Sistema Jurídico y Derechos Humanos. El Derecho Nacional y las Obligaciones Internacionales de Chile en Materia de Derechos Humanos. Editores Cecilia Medina y Jorge Mera. Escuela de Derecho Universidad Diego Portales. Serie Publicaciones Especiales N° 6. Santiago de Chile, 1996, pág. 352.

conjugar garantismo, eficiencia y certeza jurídica. Y sólo un derecho procesal que, en garantía de los derechos del imputado, minimice los espacios impropios de la discrecionalidad judicial, puede ofrecer a su vez un sólido fundamento a la independencia de la magistratura y a su vez de control de la ilegalidad del poder⁽¹⁴⁾.

Lamentablemente, en los últimos años la opción garantista ha sido desplazada sistemáticamente, dando paso a la denominada política criminal de emergencia.

2. La política criminal de emergencia

El término *política penal de emergencia* o *Política Penal del Orden Público*, se originó en Italia e identificó un modelo dirigido a enfrentar el terrorismo que sufrió hace unos años ese país. Similar orientación se observó en Alemania, Inglaterra y España. En América Latina esta política criminal se desarrolló a partir de la ideología de seguridad nacional y el frente interno.

Iñaki Rivera advierte que *“de modo paulatino, la cultura de la emergencia y/o excepcionalidad, ha irrumpido también en toda su extensión en el ámbito de la ejecución penitenciaria, como ya sucedió con otras áreas del derecho penal⁽¹⁵⁾”*. En efecto, en Europa, además de la crisis de la resocialización y el tratamiento, un factor que afectó la reforma penitenciaria, fue la existencia de una lógica de emergencia en el sistema penal, que se reflejó también en el sistema penitenciario, fenómeno del cual nuestro país no estuvo ajeno.

La política criminal de emergencia o de excepción que se concibió como un mecanismo para combatir a los movimientos terroristas, alcanzó prácticamente toda la legislación del sistema penal. Así, las normas expedidas desde esta posición alcanzaron al derecho penal sustantivo, procesal penal y la ejecución penal, y se han venido expandiendo paulatinamente a otros delitos comunes. En consecuencia, la existencia de regímenes penitenciarios especialmente severos y restrictivos de derechos, no son sólo expresiones aisladas de una perspectiva carcelaria, sino forman parte de una opción político criminal integral.

(14) FERRAJOLI, Luigi: Derecho y Razón. Teoría del Garantismo Penal. Prólogo de Norberto Bobbio. Editorial Trotta S.A. Madrid, 1995, pág. 10.

(15) RIVERA BEIRAS, Iñaki: La Devaluación de los Derechos Fundamentales de los Reclusos. La Construcción Jurídica de un Ciudadano de Segunda Categoría. Biblioteca de Derecho Penal. José María Bosch Editor. Barcelona, 1997, pág. 169.

En nuestro país, esta política no ha sido exclusiva de la presente década. Tal como señala Prado Saldarriaga, sus antecedentes se remontan a los años 30, con las leyes de emergencia de los gobiernos de Sánchez Cerro, Benavides y Odría. Más adelante, durante la década de los 80, se emitieron leyes como la N° 24651, N° 24700, N° 24953 y N° 25031, que fueron cuestionadas por su inconstitucionalidad al afectar el artículo 2° inciso 20°, literal g y artículo 109° de la Constitución Política del Estado de 1979 vigente entonces ⁽¹⁶⁾.

En la lógica de la política criminal de emergencia, se debe incrementar la capacidad de actuación de algunas agencias de control penal en la lucha contra el delito, especialmente la policial, aún cuando ello afecte garantías y derechos fundamentales de los ciudadanos.

De manera general, se puede afirmar que las principales manifestaciones de este modelo son:

2.1 En lo sustantivo

- **Afectación del Principio de Legalidad.-** En lugar de una descripción adecuada de la conducta prohibida, se elaboran tipos penales que prevén hipótesis de responsabilidad objetiva y se sancionan formas de derecho penal de autor. La descripción de las conductas ilícitas son genéricas (tipos penales abiertos) y se penan no sólo las conductas que vulneran efectivamente el bien jurídico, sino también actos preparatorios o de colaboración.
- **Sobrecriminalización.-** El incremento de penas es notorio en delitos de mediana y mayor gravedad. Se elevan los parámetros de la pena privativa de libertad y se introduce la cadena perpetua.
- **Uso de formas de derecho premial.-** Busca estimular la disociación de las organizaciones criminales y la delación entre sus integrantes a cambio de la concesión de beneficios de diversa naturaleza (exención o reducción de penas, cambio de identidad, ventajas pecuniarias, etc).

2.2 En lo procesal

- **Administrativización del proceso penal.-** Aspectos centrales del proceso quedan en manos de órganos extrajudiciales como la

(16) PRADO SALDARRIAGA, Víctor: Comentarios al Código Penal de 1991. Editorial Alternativas. Lima, 1993, pág. 21.

policía. Se amplía la capacidad para detener, incomunicar, intervenir comunicaciones e ingresar al domicilio del ciudadano. Asimismo, se brinda valor de prueba a la investigación policial, sobre la cual se basa el proceso y la sentencia en la instancia judicial.

- **Ampliación de la detención preventiva.-** Se establece como medida obligatoria en determinados delitos, pese a que debe ser aplicada sólo de manera excepcional.
- **Modelo procesal inquisitivo.-** Se amplían las facultades a los agentes penales, originando un desbalance de poder en contra del procesado. El modelo de confrontación entre el Ministerio Público y la defensa, teniendo como ente imparcial al juez, se sustituye por una confrontación que busca fundamentalmente la confesión del procesado. La idea del contradictorio se elimina y con ello el derecho de defensa es relegado.
- **Exclusividad procesal.-** Se afecta el principio de Juez Natural, creándose instancias judiciales especializadas de competencia nacional para el juzgamiento de determinados delitos que en algunos casos son recubiertas de características especiales (como jueces sin rostro, tribunales militares, etc.).

2.3 En la ejecución penal

Se brinda trato idéntico a los internos procesados y sentenciados y se introduce rigurosas condiciones en la ejecución de la pena como vigilancia permanente, aislamiento celular, participación de personal policial o militar en el control de los penales, traslados intempestivos, visitas por locutorio, limitación o prohibición de medios de información, construcción de cárceles de máxima seguridad, etc.

3. La política criminal de emergencia en nuestro país

El Código Penal de 1991 consolidó una corriente de opinión sobre la necesidad de una reforma integral de la legislación penal. Los lineamientos de esta política criminal están contenidos en el Título Preliminar, que consagra una serie de principios garantistas, como:

- La finalidad preventiva del derecho penal, como forma de proteger a la persona humana y la sociedad (artículo I);
- El principio de legalidad (artículo II);

- La prohibición de la analogía (artículo III);
- El principio de lesividad o puesta en peligro del bien jurídico (artículo IV);
- La garantía jurisdiccional, referida a aspectos procesales como el debido proceso y juez natural (artículo V);
- La garantía de ejecución (artículo VI);
- La responsabilidad penal de autor y la prohibición de la responsabilidad objetiva (artículo VII);
- El principio de proporcionalidad de la pena a la responsabilidad por el hecho (artículo VIII); y,
- La función preventiva de la pena y las medidas de seguridad (artículo IX).

Además, el Código Penal significó también un avance importante, porque:

- Estableció los elementos para la comisión por omisión (artículo 13°);
- Modificó el tratamiento del error en el derecho penal, asumiendo el sistema de error de tipo y error de prohibición, así como la figura del error de comprensión culturalmente condicionado (artículos 14° y 15°);
- Señaló la obligatoriedad de la atenuación de la pena en caso de tentativa (artículo 16°) e impunidad de la tentativa inidónea (artículo 17°);
- Eliminó la reincidencia y habitualidad como elemento a considerarse para la graduación de la pena;
- Estableció un sistema de penas privativas de libertad temporal (entre 2 días a 25 años), graduadas de acuerdo a la afectación de la escala de bienes jurídicos, ocupando el primer lugar de ellos la vida, con la pena más alta;
- Introdujo medidas alternativas a la privación de la libertad como la Prestación de Servicios a la Comunidad, Limitación de Días Libres y Multa (artículos 52° a 56°); y,
- Reguló una serie de figuras que relacionadas con la falta de necesidad o utilidad de la pena, como la Suspensión de la Ejecución de la Pena (artículos 57° a 61°), la Reserva del Fallo Condenatorio (artículos 62° a 67°) y la Exención de la Pena (artículo 68°).

Sin embargo, el Código Penal de 1991, que representaba un importante avance en términos de garantismo penal, fue objeto de modificaciones sistemáticas al poco tiempo de su vigencia.

Así, los principales delitos fueron sobrecriminalizados⁽¹⁷⁾, rompiéndose con ello la coherencia del primigenio sistema de penas, en base al bien jurídico protegido y la lesividad de la conducta. Por ejemplo, la cadena perpetua, que es la máxima pena en nuestro ordenamiento legal, es utilizada también para sancionar delitos que afectan bienes jurídicos distintos al de la vida⁽¹⁸⁾, como el patrimonio, la libertad sexual, la seguridad pública, la salud pública, etc., hecho que resulta una incoherencia. Además, al introducirse la pena temporal con un máximo de 35 años y la cadena perpetua⁽¹⁹⁾, se abandona la orientación rehabilitadora de la pena y se viola el principio de humanidad de la pena. De otro lado, se crearon tipos penales que afectan el principio de legalidad o repiten los ya existentes⁽²⁰⁾.

En lo procesal, la política criminal de emergencia, significó la creación de jurisdicciones especiales con competencia nacional para el juzgamiento de ciertos delitos (terrorismo, tráfico de drogas, robo agravado en bandas, delitos tributarios, etc.), afectándose así aspectos fundamentales del debido proceso, como el del juez natural y el derecho a la defensa⁽²¹⁾. En algunos delitos (traición a la Patria y terrorismo especial), se amplió la competencia de la Justicia Militar para juzgar a civiles, decisión que también afectó principios como el juez natural o el de ser juzgado por un tribunal independiente e imparcial⁽²²⁾.

-
- (17) Por ejemplo, el delito de secuestro, que originalmente tenía una pena de entre 2 a 20 años (tipo agravado) tiene en la actualidad una pena de entre 20 años hasta cadena perpetua. Lo mismo sucede en el caso de la violación de menores, robo agravado, extorsión, tráfico de drogas, terrorismo, traición a la patria y terrorismo agravado, por solo mencionar aquellos en donde se establece la cadena perpetua.
- (18) Teóricamente el bien jurídico de primer orden si se toma en cuenta que la Constitución Política del Estado señala que la persona y su defensa es el fin supremo de la sociedad (artículo 1º)
- (19) Es interesante observar como, cronológicamente, la cadena perpetua se inicia con el terrorismo y luego, paulatinamente, se amplía a otros delitos comunes.
- (20) Lo que sucede especialmente en el caso del terrorismo especial.
- (21) Al ser los internos trasladados para su juzgamiento lejos del lugar donde fueron detenidos, se disminuye la posibilidad de contratar a un abogado, así como poder buscar y actuar determinadas pruebas como los testimonios que se quedaron en el lugar de origen.
- (22) Intrínsecamente los tribunales militares no garantizan la independencia e imparcialidad necesarias, especialmente en el juzgamiento de civiles. Al respecto ver: BOVINO, Alberto: "La justicia militar y el juzgamiento de civiles". En: Justicia Militar y Estado de Derecho. Jorge Mera Figueroa (Editor). Cuaderno de Análisis Jurídico. Serie Seminarios N° 40. Escuela de Derecho Universidad Diego Portales. Santiago de Chile, 1998, pág. 283 - 308. Defensoría del Pueblo: Lineamientos para la Reforma de la Justicia Penal en el Perú. Serie Informes Defensoriales, Informe N° 6. Lima, 1998. Y FRANCIA SANCHEZ, Luis Enrique: "Tribunal Independiente e Imparcial y Justicia Militar ¿Diferencias o incompatibilidades?". En: Justicia Militar y Estado de Derecho. Jorge Mera Figueroa (Editor). Cuaderno de Análisis Jurídico. Serie Seminarios N° 40. Escuela de Derecho Universidad Diego Portales. Santiago de Chile, 1998, pág. 309 - 336.

Así mismo, se impone la detención preventiva como regla⁽²³⁾, en lugar de mantener su excepcionalidad. Se afectaron también, otras garantías del debido proceso en el juzgamiento de determinados delitos⁽²⁴⁾ al limitarse el derecho de defensa, la publicidad del proceso, la posibilidad de citar al personal policial que intervino en la investigación del delito, al incrementarse el valor probatorio del atestado policial, etc.

Además de la legislación antiterrorista prevista el Decreto Ley N° 25475 que contiene normas de carácter sustantivo, procesal y de ejecución, los Decretos Leyes N° 25659, N° 25880 y la Ley N° 26508 que regulan el delito de traición a la patria, y los Decretos Leyes N° 25708 y N° 25744 que señalan las normas sobre la investigación, juzgamiento y ejecución de la pena para el delito de traición a la Patria); los Decretos Legislativos sobre Seguridad Nacional dictados por el Congreso de la República al amparo de la Ley N° 26950, constituyen una importante referencia normativa en el marco de la Seguridad Nacional⁽²⁵⁾.

Entre estas normas que implicaron una ampliación de la lógica de emergencia a los delitos comunes, destacan la Ley contra el Terrorismo Especial aprobado mediante Decreto Legislativo N° 895, que asigna cadena perpetua para delitos patrimoniales e incrementa la pena privativa de libertad temporal hasta los 35 años. Vulnera el Principio de Legalidad, pues identifica erróneamente el bien jurídico protegido y asigna a la conducta tipificada un "nomen juris" que no le corresponde, pues califica de terrorismo especial a hipótesis de crimen organizado.

(23) Por ejemplo el caso del terrorismo (artículo 13° inciso a, del Decreto Ley N° 25475), traición a la Patria (artículo 5° del Decreto Ley N° 25659, que remite al procedimiento para terrorismo), terrorismo especial (artículo 7° literal a, del Decreto Legislativo N° 895), los delitos agravados (artículo 1° literal e, del Decreto Legislativo N° 897).

Bajo el rubro delitos agravados, regulados por el Decreto Legislativo N° 896 se incluyen los siguiente delitos comunes: Homicidio calificado, secuestro, violación de sexual de menor de 14 años, violación de sexual de menor de 14 años seguida de muerte o lesión grave, robo, robo agravado y extorsión.

(24) Básicamente los delitos ya señalados: terrorismo (Decreto Ley N° 25475), traición a la Patria (Decreto Ley N° 25659), terrorismo especial (Decreto Legislativo N° 895), los delitos agravados (Decreto Legislativo N° 896 y N° 897). Asimismo algunas figuras de tráfico de drogas (Decreto Legislativo N° 824).

(25) Las principales normas emitidas por el Poder Ejecutivo a partir de esta legislación, son:

- Decreto Legislativo N° 895, Ley Contra el Terrorismo Agravado (23 de mayo de 1998).
- Decreto Legislativo N° 896, Ley Contra los Delitos Agravados (24 de mayo de 1998).
- Decreto Legislativo N° 897, Ley de Procedimiento Especial para la Investigación y Juzgamiento de los Delitos Agravados que Tipifica el Decreto Legislativo N° 896 (26 de mayo de 1998).
- Decreto Legislativo N° 901, Ley de Beneficios de Colaboración (31 de mayo de 1998).
- Decreto Legislativo N° 902, Normas Complementarias a la Ley de Beneficios de Colaboración (1 de junio de 1998).

Amplia la competencia del Fuero Militar para juzgar a civiles involucrados en tales conductas y deja la decisión de calificar el delito al instructor policial⁽²⁶⁾. En el marco del debido proceso, esta norma presenta limitaciones al derecho de defensa, pues establece un proceso de investigación y juzgamiento sumarísimo. La detención con fines de investigación policial se amplía a 15 días (lo que resulta inconstitucional de acuerdo al artículo 2°, inciso 24, literal f de la Constitución Política del Estado), y se permite la incomunicación del detenido hasta por 10 días. Igualmente, se limita el criterio discrecional del Juez, al ordenarse en determinados casos la apertura de la instrucción con orden de detención obligatoria y se limita todo tipo de libertades, disponiéndose también que las cuestiones previas, prejudiciales y excepciones se resuelvan en la sentencia, tergiversando así su naturaleza.

Se otorga valor probatorio al atestado policial y se prohíbe la recusación de magistrados y auxiliares de justicia. Se limitan los beneficios procesales y de ejecución y se establece el cumplimiento de la detención preventiva y de la condena en un penal de máxima seguridad, de conformidad con el D.S. N° 003-96-JUS.

En el mismo sentido, la Ley Contra los Delitos Agravados previsto en el Decreto Legislativo N° 897, impone la cadena perpetua para delitos comunes e incrementa la pena privativa de libertad temporal hasta los 35 años. No obstante estos delitos son juzgados por tribunales comunes, se repite las afectaciones al debido proceso, señalados anteriormente para el caso del terrorismo agravado⁽²⁷⁾. Limitan también beneficios penitenciarios salvo la redención de la pena por el trabajo y la educación y establecen que la pena deberá cumplirse en un centro de máxima seguridad.

Los Decretos de Seguridad Nacional evidencian una opción preventivo especial negativa del legislador, al introducir la cadena perpetua y la pena privativa de libertad temporal hasta los 35 años, lo que significa el abandono de la finalidad resocializadora, por la opción de la inocuización y el aislamiento de la sociedad del individuo infractor.

(26) Sobre esta medida, la Defensoría del Pueblo oportunamente ha señalado sus observaciones y precisado su inconstitucionalidad. Defensoría del Pueblo: Análisis de los Decretos Legislativos sobre Seguridad Nacional dictados al amparo de la Ley N° 26955. Lima, 1998.

(27) Es decir, se limita el derecho de defensa, se establece un proceso sumarísimo, se amplía inconstitucionalmente la detención policial, se permite la incomunicación del detenido, se ordena al Juez la apertura de la instrucción con orden de detención y se limita todo tipo de libertades, se dispone que las cuestiones previas, prejudiciales y excepciones se resuelvan en la sentencia, se otorga valor probatorio al atestado policial y finalmente se prohíbe la recusación de magistrados y auxiliares de justicia

4. La política criminal de emergencia en el sistema penitenciario

4.1 Efectos en el sistema penitenciario

Es evidente que la política criminal de emergencia, tiene efectos directos en el sistema penitenciario. El aumento de las penas incrementa la población penal e incide en el tiempo de permanencia de los internos en un establecimiento penitenciario, el cual cada vez será más prolongado. Ello, a su vez genera sobrepoblación, hacinamiento y el desborde de la capacidad de atención de los servicios penitenciarios que siempre son deficitarios.

Además, el aumento de penas origina que se limite las posibilidades en las que se podría hacer uso de medidas alternativas a la pena privativa de libertad, ya que las penas mínimas de los delitos de gran incidencia, exceden los cuatro años que requiere el artículo 32° del Código Penal. Por las mismas razones, también restringe la aplicación del principio de oportunidad que sólo será posible en delitos cuya pena mínima no supere los dos años de conformidad con el artículo 2° del Código Procesal Penal.

El aumento de penas, hace también que se amplíen los casos en los cuales se permite la aplicación de una medida procesal como la detención, teniendo en cuenta que uno de los criterios para dictarse es que la pena efectiva a aplicarse sea mayor a los 4 años (inciso 2 del artículo 135° del Código Procesal Penal).

Sin embargo, es evidente que en nuestro país la lógica de emergencia tuvo particular incidencia en los regímenes especiales para internos por delitos de terrorismo y traición a la patria y para los denominados de "difícil readaptación".

4.2 El régimen penitenciario para internos por terrorismo y traición a la Patria

En nuestro país, existen dos regímenes especiales para internos por terrorismo y traición a la patria. Uno, para internos recluidos en bases militares por razones de seguridad nacional; y, otro, para quienes se encuentran en los establecimientos penales del país.

a) El régimen para internos por terrorismo y traición a la Patria recluidos en bases militares

El Decreto Ley N° 25475 del 6 de mayo de 1992, denominado Ley Antiterrorista, estableció en su artículo 20°, las primeras disposiciones en materia de ejecución de la pena para los internos por delito de terrorismo, con las siguientes características:

- Cumplimiento obligatorio en un penal de máxima seguridad;
- Aislamiento celular continuo durante el primer año de su detención, y su posterior sujeción a trabajo obligatorio por el tiempo que dure su reclusión;
- Cumplimiento de la pena en celdas unipersonales, sin que puedan los sentenciados compartir dichas celdas; y,
- Derecho a una vista semanal circunscrita a sus familiares más cercanos.

Esta norma fue reglamentada por la Resolución Suprema N° 114-92-JUS del 14 de agosto de 1992 que estableció que la visita sería mensual y sólo por dos familiares directos, con una duración máxima de 30 minutos a través de locutorios controlados visualmente por personal de seguridad. De esta manera, al señalar una visita mensual, la Resolución Suprema estaba *"modificando"* el artículo 20° del Decreto Ley N° 25475, que había establecido una visita semanal.

De otro lado, el Decreto Ley N° 25744 del 27 de setiembre de 1992, que tipificó el delito de Traición a la Patria, estableció en su artículo 2° que durante el cumplimiento de la condena por este delito se observaría en lo que fuere pertinente lo establecido en el citado artículo 20° del Decreto Ley N° 25475.

El régimen descrito anteriormente, rige para los internos recluidos en la Base Naval del Callao.

b) El régimen para procesados y sentenciados por delitos de terrorismo y traición a la Patria

El régimen penitenciario previsto en el Decreto Ley N° 25475, estuvo vigente para todos los internos por terrorismo y traición a

la Patria sin excepción, hasta el 25 de junio de 1997, cuando se dictó el Decreto Supremo N° 005-97-JUS que aprobó el "Reglamento del Régimen de Vida y Progresividad del Tratamiento para Internos Procesados y/o Sentenciados por delito de Terrorismo y/o Traición a la Patria"⁽²⁸⁾, que fue complementada por la Resolución Ministerial N° 182-97-JUS del 21 de agosto de 1997.

Este Reglamento, determinó que sus normas alcanzaban a todos los internos procesados o sentenciados por delitos de terrorismo o traición a la patria, excluyendo en su artículo 1° a los líderes y cabecillas reclusos *"en las bases militares por razones de seguridad nacional"*, para quienes continua vigente el Decreto Ley N° 25475 tal como lo señalamos líneas arriba.

El citado Reglamento, indica que su objetivo es establecer un régimen de vida con criterios técnicos de tratamiento y de seguridad, para un adecuado manejo de la población penitenciaria. También modificar las conductas antisociales, para favorecer la convivencia pacífica y la participación en los programas de tratamiento mediante la aplicación de un régimen progresivo (artículos 1° y 2°). Con este propósito estableció en su artículo 3°, cuatro etapas:

- Etapa Cerrada de Máxima Seguridad
- Etapa de Promoción al Régimen de Mediana Seguridad Especial
- Etapa de Mediana Seguridad Especial
- Etapa de Mínima Seguridad Especial

A este régimen el interno accede por clasificación automática en consideración al delito cometido. Es decir, toda persona privada de libertad por delito de terrorismo y traición a la Patria, es ubicada automáticamente en este régimen, sin más consideración que la naturaleza del delito cometido. Para su ubicación en una de las cuatro etapas, el interno es objeto de una evaluación por el Organo de Tratamiento del penal donde fue recluso. Luego, para efectos de la progresión a otras etapas, tendrá derecho a una evaluación semestral por dicho Organo, pudiendo cambiar a la etapa siguiente luego de dos informes favorables, lo que significa que no será posible cambiar de nivel antes de un año. En caso de que los informes sean desfavorables, el interno podrá regresionar.

(28) Esta norma ha sido posteriormente modificada por el Decreto Supremo N° 008-97-JUS (20 de agosto de 1997) y el Decreto Supremo N° 003-99-JUS (18 de febrero de 1999)

Las principales características de este régimen especial son:

- **Visitas.-** En la primera y segunda etapa, el interno tiene derecho a una visita semanal de un máximo de tres familiares directos⁽²⁹⁾, mediante locutorio y por el tiempo de una hora. En la tercera y cuarta etapa, se establece que las visitas sean directas, es decir sin locutorio, con una duración de dos y cuatro horas respectivamente. En la tercera etapa, el número de familiares que pueden visitar son 3, en tanto que en la cuarta se incrementa a 4.
- **Acceso al patio.-** En la primera y segunda etapa, los internos tienen derecho a dos horas de patio; en la tercera, tres horas; y, en la cuarta, cuatro horas. Obviamente, el resto del tiempo los internos deberán permanecer en su celdas.
- **Visita íntima.-** Restringido en las tres primeras etapas y sólo permitido en la cuarta.
- **Trabajo.-** Para las tres primeras etapas, se establece el trabajo obligatorio durante 8 horas en el interior de sus celdas. En la cuarta etapa se permite el desarrollo de alguna laboral en los talleres destinados a tal finalidad.
- **Educación.-** En la primera etapa no se establece actividad educativa alguna. En la segunda y tercera etapa, los internos pueden desarrollar actividades educativas en sus celdas. Sólo en la cuarta etapa podrán realizar en aulas de educación.

4.3 El régimen para internos denominados de “Difícil Readaptación”

El Decreto Supremo N° 003-96-JUS⁽³⁰⁾ del 23 de julio de 1996, aprobó el “Reglamento del Régimen de Vida y Progresividad del Tratamiento Para Internos de Difícil Readaptación Procesados y/o Sentenciados por Delitos Comunes”, que fue complementado por la Directiva N° 002-97-INPE/DGT⁽³¹⁾.

(29) Quienes deben tramitar ante el penal un carné de visitas que tiene una vigencia de tres meses.

(30) Modificado por el Decreto Supremo N° 003-97-JUS (2 de junio de 1997) y el Decreto Supremo N° 007-98-JUS (4 de setiembre de 1998).

(31) Modificada por la Resolución Ministerial N° 200-98-JUS (10 de setiembre de 1998)

De acuerdo a la citada norma, el régimen tiene como objetivo general establecer un sistema de vida con criterios técnicos de tratamiento y de seguridad, para un adecuado manejo de la población penitenciaria. Buscan modificar las conductas antisociales para favorecer la convivencia pacífica y la participación en los programas de tratamiento (artículos 1º y 2º).

Se trata de un régimen especial, al cual interno accede por clasificación, luego de ser evaluado por el Órgano de Tratamiento del penal. Es decir, la naturaleza del delito cometido no es determinante, salvo en los casos de terrorismo agravado, cuya norma dispone el sometimiento automático de los internos a éste régimen. El Reglamento, no señala lo que se debe entender por un interno de "difícil readaptación". Para ello, se debe recurrir al Manual de Procedimientos de los Equipos Técnicos de Tratamiento Penitenciario⁽³²⁾, que establece tres categorías de internos: fácilmente readaptable, readaptable y de difícil readaptación. Así, el Equipo Técnico⁽³³⁾, deberá recurrir a una clasificación terapéutica sobre la base de un sistema de puntaje establecido en la Directiva N° 001-97-INPE/DGT, sin que para ello se considere la condición de procesado o sentenciado del interno (Artículo 1º).

Este régimen especial establece tres etapas:

- Etapa de Aislamiento Celular
- Etapa Cerrada de Máxima Seguridad
- Etapa de Promoción al Régimen de Mediana Seguridad

Las etapas establecidas en este régimen especial son imperativas para el interno, quien obligatoriamente deberá comenzar por el aislamiento celular, tal como lo establece el artículo 9º del Reglamento, que señala *"El interno trasladado por cambio de régimen o clasificado al Régimen de Máxima Seguridad, ingresará a la Etapa Cerrada de Máxima Seguridad por un periodo de un año..."*. Como se puede observar el aislamiento celular, es una etapa que sólo puede imponerse a los internos que tengan la condición de sentenciados, por lo que su aplicación extensiva a los procesados resulta ilegal.

En este aspecto, el Reglamento colisiona con el Manual de Procedimientos de los Equipos Técnicos de Tratamiento, que

(32) Aprobada por la Resolución Jefatural N° 621-90 INPE/SJ

(33) Conformado por tres profesionales: Psicólogo, Asistente Social y Abogado.

establece como finalidad *"Orientar las acciones de tratamiento penitenciario de manera flexible, que no implica el cumplimiento obligatorio de períodos en los cuales, las facilidades para la rehabilitación con que cuenta la Institución Penitenciaria debe dirigirse en forma eficaz hacia la solución de los problemas de los internos"*.

Luego del vencimiento del año en la etapa de aislamiento celular, el interno pasa automáticamente a la etapa de Máxima Seguridad⁽³⁴⁾, siendo evidente que durante dicho período no fue objeto de tratamiento alguno. El tratamiento individual empieza en la segunda etapa⁽³⁵⁾, pues la progresión en este sistema, también está sujeta a las evaluaciones semestrales del Órgano de Tratamiento. Un interno podrá acceder a la etapa siguiente luego de dos informes semestrales favorables, pudiendo también regresar. Consideramos que en ningún caso, la regresión puede significar retornar o prolongar la etapa de aislamiento celular, pues se trata de una medida excepcional, cuya duración de un año está taxativamente señalada en el artículo 9 del Reglamento.

El interno que se encuentre en la tercera etapa (Promoción a la Mediana Seguridad), que logre aprobar dos evaluaciones semestrales, tendrá derecho a ser reclasificado y trasladado a un régimen ordinario. En caso regresione deberá retornar a la etapa de máxima seguridad⁽³⁶⁾. En consecuencia, un interno considerado de "difícil readaptación", deberá esperar 3 años como mínimo para pasar a un régimen ordinario.

Las principales características de régimen especial son:

- **Visitas.-** En la etapa de aislamiento celular, sólo se permite el contacto del interno con su abogado defensor. En la etapa de Máxima Seguridad, puede ser visitado hasta por tres familiares directos mediante locutorio y durante una hora. En la etapa de Promoción a la Mediana Seguridad, la visita es directa por un tiempo de dos horas.

(34) Artículo 6.1º inciso f de la Directiva N° 007-97-INPE/DGT.

(35) El artículo 30º del Decreto Supremo N° 003-96-JUS, refiere que el interno promovido en la Segunda Etapa, está obligado a participar activamente en las actividades de trabajo y educación, bajo la supervisión y control de las áreas respectivas.

(36) Artículo 26º del Decreto Supremo N° 003-96-JUS. Artículo 6.3º de la Directiva N° 005-98-INPE/DGT.

- **Acceso al patio.-** En la primera etapa tienen derecho a una hora de patio, debiendo permanecer las restantes 23 horas en sus celdas. En la segunda y tercera etapa tienen dos horas de patio y 22 horas de encierro en celdas.
- **Visita íntima.-** Sólo está permitido en la tercera etapa.
- **Trabajo.-** Se permiten actividades laborales durante 8 horas en el interior de sus celdas sólo en la segunda y tercera etapa.
- **Educación.-** Limitado sólo a los internos de la tercera etapa y en sus celdas.

Finalmente, el Decreto Supremo N° 007-98-JUS del 4 de setiembre de 1998, ha determinado que este régimen especial será de aplicación exclusiva en los Establecimientos Penitenciarios de Máxima seguridad de Lurigancho (en un pabellón especial), Miguel Castro Castro, La Capilla-Juliaca, Yanamayo-Puno y Challapalca-Puno, para el caso de varones y en el Máxima Seguridad Especial de Mujeres de Chorrillos⁽³⁷⁾.

5. Crítica a los regímenes penitenciarios especiales

Como ya señaláramos anteriormente, la lógica de la política criminal de emergencia expresada en los regímenes penitenciarios especiales, resultan restrictivas de derechos y obligaciones del interno, entre las que podemos mencionar:

5.1 La resocialización del interno

La reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad constituyen la finalidad de nuestro régimen penitenciario, como lo señala la Constitución Política del Estado en su artículo 139° inciso 22⁽³⁸⁾ y los instrumentos internacionales de derechos humanos⁽³⁹⁾.

Es evidente entonces que constitucionalmente nuestro sistema penitenciario no está orientado al castigo del interno, sino a su

(37) Según la Resolución Suprema N° 346-98-JUS (6 de noviembre de 1998).

(38) Orientación recogida por el Código Penal en los artículos I y IX del Título Preliminar, y el Código de Ejecución Penal en el artículo II de su Título Preliminar.

(39) Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (párrafo 3 del artículo 10°) y la Convención Americana de Derechos Humanos (inciso 6 del artículo 5°).

readaptación, por lo que las medidas aplicadas durante la privación de libertad, deben tener tal finalidad.

Si bien el D.S. N° 005-97-JUS y el D.S. N° 003-96-JUS establecen como objetivo la modificación de la conducta del interno mediante regímenes progresivos, es evidente que su rigidez, verticalidad, dureza y limitados espacios concedidos al interno, hacen que la finalidad resocializadora sea un mito. Si a ello le agregamos la prolongada duración de las penas, la prohibición de beneficios penitenciarios y los servicios penitenciarios deficitarios, resulta evidente que estos regímenes especiales tendrían más bien una finalidad retributiva, pues aparentemente sólo buscan la neutralización o inocuización del interno (prevención especial negativa).

La finalidad retributiva se evidencia con claridad en las dos primeras etapas de estos regímenes, pues limitan al máximo las actividades del interno y lo desvinculan de todo contacto social, inclusive de su familia, restringiéndose incluso, aunque sin clara base legal, el acceso a medios de información masiva (radio, televisión, diarios). Evidentemente, la arquitectura de los nuevos penales construidos sobre la base de criterios de máxima seguridad, contribuyen con el retribucionismo pues se han omitido ambientes para el desarrollo de actividades laborales y educativas, incluso religiosas, que son la base de una política resocializadora.

Por ello, a pesar que las normas señalan que buscan la modificación de la conducta de los internos, en *“la práctica y a través de una vasta red disciplinaria se le imponen reglas estrictas que lo van disciplinando, maniatando, hasta transformarlo en un ser, que no será nunca un buen ciudadano, sino un buen prisionero”*⁽⁴⁰⁾.

5.2 Presunción de inocencia: régimen para procesados y sentenciados

La detención preventiva se funda básicamente en el peligro procesal. Es decir, tiene por finalidad asegurar que el inculpado no eluda la acción de la justicia. El mandato de detención no descansa entonces

(40) MOSQUERA RIAL, Ana: “Derechos Fundamentales y Privación de la Libertad – Control de la Ejecución de la Pena”. En: Revista Jurídica del Perú. Año XLVII. N° 13 Oct-Dic de 1997. Lima, 1997. pág 183-193.

en la *resocialización* de la persona⁽⁴¹⁾, por lo que una persona privada de libertad, en tanto no tenga una sentencia que determine su responsabilidad, debe ser considerada inocente, en virtud del principio de presunción de inocencia⁽⁴²⁾.

Este principio, que tiene efectos procesales en la investigación y juzgamiento, debe tenerlo también en la ejecución penal, en aspectos relacionados con el régimen de vida susceptible de ser aplicado a un procesado en un establecimiento penitenciario. De hecho, nuestro Código de Ejecución Penal en su artículo 11°, establece que los internos procesados deberán ser separados de los sentenciados⁽⁴³⁾ y, en el artículo 95°, clasifica los establecimientos penitenciarios para procesados, sentenciados y otros.

Ello, tiene una razón lógica. Los procesados deben tener un régimen penitenciario diferente al de los sentenciados, por imperio del principio de presunción de inocencia, porque luego del proceso judicial correspondiente podrían ser absueltos. Por tanto, el sometimiento a personas que podrían ser inocentes a regímenes tan severos, resulta excesivo. Dentro de dicho contexto, los procesados no deben ser objeto de tratamientos, deben estar separados de los sentenciados, trabajar de manera voluntaria, no ser privados del contacto con el mundo exterior y, garantizarle su derecho de defensa con el abogado de su elección o uno de oficio si no contara con este.

En consecuencia, el régimen para procesados debe básicamente *"...garantizar su estancia dentro del establecimiento penitenciario como medio preventivo, y a tomar las medidas conducentes para que cada vez que se le requiere comparezca ante el Juez"*⁽⁴⁴⁾. Sin

(41) «La coerción procesal, correctamente regulada y aplicada, no aparecerá vinculada a los fines que persigue el uso de la fuerza pública en el Derecho material, pues, si así fuere, no significaría más que anticipar la ejecución de una sanción no establecida por una sentencia firme mientras no se lleva a cabo el proceso regular establecido por ley para posibilitar esa condena»: MAIER, Julio B. J.: Derecho Procesal Penal. Tomo I. Fundamentos. Segunda Edición. Editores del Puerto s.r.l. Buenos Aires, 1996. pág 514.

(42) Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (párrafo 3 del artículo 14°), así como especifican las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos (regla 84.2) y el Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión (principio 36.1).

(43) Así lo establece también el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (párrafo 2 del artículo 10°), las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos (regla 8 inciso b y 85.1) y el Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión (principio 8).

(44) Comisión Nacional de Derechos Humanos: Manual de Derechos Humanos del Interno en el Sistema Penitenciario Mexicano. CNDDHH. México D. F., 1995, pág. 17.

embargo, los regímenes penitenciarios para internos por terrorismo y traición a la patria y para los de "difícil readaptación" van mucho más allá.

5.3 Limitación de beneficios penitenciarios

En la perspectiva retributiva del régimen de emergencia, se ha venido sistemáticamente suprimiendo los beneficios penitenciarios más importantes, previstos en el artículo 42° del Código de Ejecución Penal, como la redención de la pena por el trabajo y la educación, la semi-libertad, la libertad condicional y la visita íntima, que ha sido limitada a pocos supuestos. Este criterio, afecta el principio de igualdad en el tratamiento y cierra el camino de un importante apoyo en el propósito rehabilitador. Evidentemente, la existencia de beneficios penitenciarios, inclusive de acceso diferenciado de acuerdo a la naturaleza o gravedad del delito, constituirá siempre un importante estímulo para el interno, que no se debe abandonar.

5.4 Principio de humanidad de la pena

Se vulnera especialmente en los casos de aislamiento celular y máxima seguridad, que afectan la salud del interno. La aplicación de la cadena perpetua y las penas privativas de libertad mayores de 25 años, colisionan también este principio, especialmente cuando además de la limitación a la libertad, se imponen otras circunstancias que hacen más aflictivas las penas, como la ubicación de los centros penitenciarios en zonas geográficas de temperatura baja permanente, como es el caso de los penales de Yanamayo en Puno, La Capilla en Juliaca y Challapalca en Tacna. Si bien, en los dos primeros casos, los penales fueron construidos en áreas cercanas a las ciudades, es evidente que el encierro prolongado en bajas temperaturas termina afectando la salud de los internos, por ello, resulta imprescindible la flexibilización del régimen, que sin poner en riesgo la seguridad, pueda permitir al interno mayores horas de patio y la realización de actividades (laborables, educativas o recreativas) que limiten los efectos nocivos del clima.

Mención especial requiere el establecimiento penal de Challapalca, situado a seis horas de la ciudad de Tacna a 4,600 metros sobre el nivel del mar. Las severas condiciones climáticas, la falta de medios de comunicación y su difícil ubicación que limitan el sistema de visitas, colisionan con el principio de humanidad de las penas. Las bajas temperaturas durante el día y particularmente en la noche,

junto a los prolongados períodos de encierro en sus celdas, afectan severamente la salud física y mental de los internos, así como del propio personal penitenciario encargado de la custodia del penal.

5.5 Derecho a la integridad personal y a un trato digno

Toda persona tiene como derecho fundamental conservar su integridad física, psíquica y moral. Así lo ha reconocido el artículo 2º, inciso 1º de la Constitución Política del Estado y las normas internacionales⁽⁴⁵⁾. De ello se deriva la prohibición de las torturas, así como los tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Este derecho es de tal importancia, que su vigencia no depende de la existencia o no de recursos del Estado y en su aplicación no debe hacerse distinción alguna (incluido el tipo de delito que la persona hubiera cometido). Si bien es obvio que algunos derechos pueden ser materia de limitaciones en determinados casos, como lo señala el artículo 4º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, no se autoriza bajo ninguna circunstancia, la suspensión o violación del artículo 7º de dicho instrumento, por lo que el derecho a la integridad personal no puede ser afectado incluso bajo razones de emergencia.

Por ello, las personas privadas de libertad deben ser tratadas respetando su condición de ser humano. En un establecimiento penitenciario se traduce en el derecho a vivir en condiciones compatibles con sus necesidades básicas, psicológicas, sociales y espirituales, respetándose normas mínimas, que van más allá de la prohibición de la tortura y de los tratos crueles, inhumanos o degradantes. Es el Estado el garante de este derecho, como responsable de las cárceles.

5.6 El aislamiento prolongado y la incomunicación

Una de las principales críticas a los regímenes penitenciarios especiales, está relacionado con los periodos prolongados de incomunicación e incluso de aislamiento.

Los dos regímenes penitenciarios materia de comentario, prescriben mecanismos de incomunicación y de aislamientos prolongados. De hecho, el aislamiento celular continuo y los prolongados períodos de

(45) Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 7º y párrafos 1 y 3 del artículo 10º) y la Convención Americana de Derechos Humanos (incisos 1 y 2 del artículo 5º).

encierro en las celdas en las etapas de máxima seguridad y promoción a la mediana seguridad, implican ciertos niveles de aislamiento e incomunicación, que podrían haberse explicado en un contexto de violencia subversiva, pero que superada la emergencia, estimamos deben ser superadas.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que el aislamiento prolongado y la incomunicación, son expresiones de tratos crueles e inhumanos, lesivos de la integridad psíquica y moral de la persona y del derecho que tienen al respeto de su dignidad inherente al ser humano. En dicho sentido se pueden citar las sentencias del caso Velázquez Rodríguez (párrafo 156), caso Godínez Cruz (párrafo 164) y Fairén Garbí y Solís Corrales (párrafo 149).

De idéntica opinión es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos⁽⁴⁶⁾. Así, en el caso del aislamiento celular continuo de un año, sostiene que al no estar señalada como una sanción en el Código Penal, debe ser ordenada sólo por una autoridad judicial sobre la base de razones de seguridad o de disciplina en la cárcel y por el tiempo estrictamente necesario. Puede aplicarse también como medida disciplinaria impuesta luego de un proceso, pero debe ser aprobado por un médico y supervisado durante su ejecución⁽⁴⁷⁾.

También el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas entiende que la incomunicación viola el derecho de toda persona privada de libertad a ser tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano⁽⁴⁸⁾.

En consecuencia, si bien existen circunstancias en las que la incomunicación puede ser aplicada, esta debe ser un instrumento excepcional por los graves efectos que sobre el detenido puede causar (afectación física y perturbación psíquica).

(46) Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 1981-82, Uruguay, párrafo 4, citado en O'DONNELL, Daniel: Protección Internacional de los Derechos Humanos. Comisión Andina de Juristas. Lima, 1989. pág. 86.

(47) Argumentos que cita la Corte Interamericana en el Caso Castillo Petruzzi (párrafo 190).

(48) Comunicación N° 43/1979, Drescher Caldas contra Uruguay (párrafos 2.1 y 14). Así mismo en Comunicación N° 124/1982, Nina Muteba contra Zaire (párrafo 10.2); Comunicación N° 139/1983, Thomas contra Uruguay (párrafo 1.6); Comunicación N° 49/1979, Marais contra Madagascar (párrafo 8.4); Comunicación N° 115/1981, Wight contra Madagascar (párrafos 9.1 y 15.2). En: Naciones Unidas. Selección de Decisiones del Comité de Derechos Humanos adoptadas con arreglo al Protocolo Facultativo. Volumen 2. 17° a 32° periodo de sesiones (octubre de 1982-abril de 1988). Naciones Unidas, Nueva York, 1992.

Todas las comunicaciones del Comité de Derechos Humanos citadas en adelante provienen de la misma fuente.

5.7 Comunicaciones con el mundo exterior

Una de las mayores limitaciones que se impone al interno en los regímenes de emergencia, es la restricción del derecho a la visita, pese a que el artículo 38° del Código de Ejecución Penal establece que *"La Administración Penitenciaria estimula e intensifica las comunicaciones y visitas en cuanto sean beneficiosas para el interno..."*. Esta disposición es concordante con las establecidas en el Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión (Principio 19), así como con los párrafos 1 y 3 del artículo 10° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos⁽⁴⁹⁾.

Para la Comisión Interamericana⁽⁵⁰⁾, el derecho a recibir la visita de sus familiares es un derecho fundamental para asegurar el respeto de la integridad y libertad personal del interno, así como el derecho de protección a la familia. Puede sufrir limitaciones, pero no ser suspendida. Por ello el Estado esta obligado a facilitar el contacto del interno con su familia, dentro de las limitaciones propias del encierro.

En suma, el derecho a la comunicación con el mundo exterior es un derecho absoluto, para todo tipo de internos, que no debe ser negado sin una justa causa⁽⁵¹⁾. En este contexto, las visitas cortas e infrecuentes y la suspensión de las visitas, son formas de una *sanción arbitraria*⁽⁵²⁾. Los internos deben poder comunicarse periódicamente, bajo la debida vigilancia, con su familia tanto por correspondencia como mediante el sistema de visitas⁽⁵³⁾.

5.8 Prohibición de la posesión de determinados bienes

La prohibición de poseer determinados bienes en un establecimiento penal, puede resultar justificado cuando atentan contra la seguridad de los internos o del personal penitenciario. No obstante, el marco normativo de esta limitación no es del todo clara. Así, si bien se tiene derecho a poseer libros y revistas de carácter cultural o científico, se encuentra prohibido aquellos que *"atenten contra la*

(49) O'DONNELL, Daniel: Op. cit., pág. 87.

(50) Sra. X v. Argentina, Caso 10.506, Informe 38/96, del 15 de octubre de 1996. OEA/Ser. L/V11.95 Doc. 7 rev.

(51) Informe Anual 1983-4, página 130, párrafo 10 (Uruguay). Citado en O'DONNELL, Daniel: Op. cit., pág. 87.

(52) Caso 19,2 Diez Años, pág. 171 Haití. Citado en O'DONNELL, Daniel: Op. cit., pág. 87.

(53) Comunicación N° 74/1980, Estrella contra Uruguay (párrafo 9.2).

moral, buenas costumbres o el desarrollo normal del penal". Esta disposición tan genérica e imprecisa, otorga un criterio discrecional muy amplio a la autoridad, de cuya voluntad y muchas veces estado de ánimo, dependerá el acceso o la prohibición de determinados textos, particularmente los referidos a historia y filosofía y otras disciplinas sociales.

También de víveres o artículos que puedan servir para elaborar alguna materia prohibida en el penal. Nuevamente en este caso el criterio amplio para la discrecionalidad origina que la cantidad de alimentos permitido dependa de cada Director.

Igualmente, la prohibición o limitación al acceso de medios de información que no están expresamente prohibidos por ley, como los aparatos de televisión, radio, diarios y revistas de actualidad, particularmente para internos por terrorismo y traición a la patria. La prohibición por razones de seguridad ya no resulta sólida superada casi en su totalidad las razones de emergencia, por lo que es conveniente un marco regulatorio mucho más preciso. Ello impedirá frecuentes conflictos que generan los dispares criterios discrecionales de las autoridades policiales, que en muchos casos no guardan sentido de proporcionalidad o racionalidad respecto a la necesidad de la seguridad del penal.

5.9 Otras condiciones de detención

Las condiciones de detención de los internos por terrorismo y traición a la patria en nuestro país, han sido materia de observación. La Corte Interamericana en base a las condiciones de detención de una interna en el Establecimiento Penitenciario de Máxima Seguridad de Mujeres de Chorrillos, como su ubicación en una celda reducida, sin ventilación ni luz natural suficientes, con derecho a media hora de patio diario, aislamiento celular y un régimen de visitas sumamente estricto, las catalogó como formas de tratos crueles, inhumanos o degradantes (Caso Loayza Tamayo, párrafo 46).

Si bien, la citada interna estaba sujeta al régimen establecido en el Decreto Ley N° 25475, que fue sustituido por el D.S. N° 005-97-JUS, que significó un importante avance, las observaciones pueden mantenerse incluso ahora, pues las etapas de máxima seguridad y promoción a la mediana seguridad, no brindan las condiciones para garantizar la integridad de los internos.

En el mismo sentido, la Comisión Interamericana en su Informe Anual de 1993, en el capítulo referido a la situación en los establecimientos penales del Perú, señaló que las condiciones de reclusión establecidas en el artículo 20° del Decreto Ley N° 25745, que creó las cárceles de máxima seguridad, estableciendo el aislamiento celular durante el primer año y el posterior trabajo obligatorio, así como la restricción de las visitas, eran penas crueles y degradantes que violaban los incisos 1° y 2° del artículo 5° de la Convención Americana. Esta opinión fue ratificada en el caso Castillo Petruzzi ante la Corte Interamericana (párrafo 190 de la sentencia).

CAPITULO IV

Los Adolescentes Infractores y el Delito de Terrorismo Agravado

1. Planteamiento del problema

En mayo de 1998, el Poder Ejecutivo promulgó el Decreto Legislativo N° 895 que tipificó el denominado delito de terrorismo especial⁽⁵⁴⁾, con la finalidad de reprimir la asociación criminal en banda que utilizan armas de guerra, granadas y/o explosivos. La citada norma redujo la edad de la capacidad penal hasta los 16 años y estableció un sistema de penas que va desde la privación temporal de la libertad por un máximo de 35 años y la cadena perpetua. Hasta el 20 de diciembre de 1999, habilitó también la jurisdicción militar para la investigación y el juzgamiento de este delito. En cuanto al régimen penitenciario, estableció un sistema de clasificación automática al disponer que las penas se cumplirán obligatoriamente en un centro de reclusión de máxima seguridad, con aislamiento celular continuo durante el primer año de la condena, prohibiendo de manera absoluta los beneficios penitenciarios del Código Penal y del Código de Ejecución Penal.

En este contexto, un adolescente infractor mayor de 16 y menor de 18 años que incurría en los supuestos del delito de terrorismo especial, era objeto de una pena privativa de libertad no menor de 25 ni mayor de 35 años. En esta misma línea la Segunda Disposición Complementaria y Final del Decreto Legislativo N° 899 – Ley contra el Pandillaje Pernicioso modificó el artículo 250° del Código de los Niños y Adolescentes, al establecer que la medida privativa de libertad aplicable al adolescente infractor en este supuesto no excederá de 6 años, salvo el caso previsto en el inciso c) del artículo 2° del Decreto Legislativo N° 895.

Sin embargo, a partir de la dación del nuevo Código de los Niños y Adolescentes aprobado por Ley N° 27337 publicado el 7 de agosto del 2000, que no contiene la excepción introducida por el Decreto Legislativo 899 en el artículo 250° del anterior Código, estimamos que sobre la base de una interpretación garantista, ya no es posible someter al adolescente

(54) El delito de terrorismo especial se denominaba anteriormente terrorismo agravado. La denominación fue sustituida mediante Ley N° 27235 del 20 de diciembre de 1999.

a un proceso judicial para adultos ni imponer la pena prevista en el Decreto Legislativo N° 895 – Ley contra el Terrorismo Especial.

2. Los adolescentes infractores y la normatividad internacional

De acuerdo a las normas internacionales relativas a los derechos del niño, las personas menores de 18 años al ser titulares de derechos son también sujetos de deberes y responsabilidades. Si cometen infracciones a las leyes penales serán susceptibles de responder penalmente por el hecho cometido⁽⁵⁵⁾. Las normas internacionales prevén entonces un sistema de responsabilidad penal juvenil que teniendo en cuenta la edad del infractor, fortalezca su sentido de respeto por los derechos y libertades fundamentales de los otros al tiempo que promueva su incorporación a la sociedad y asuma una función constructiva en su seno⁽⁵⁶⁾.

Por efecto del Decreto Legislativo N° 895, los adolescentes mayores de 16 años y menores de 18 que incurrieran en los supuestos de terrorismo especial quedaban excluidos del sistema de responsabilidad penal juvenil diseñado por la Convención sobre Derechos del Niño⁽⁵⁷⁾ y por el Código de los Niños y Adolescentes, vigente desde el 28 de junio de 1993.

Tal como lo ha sostenido la Defensoría del Pueblo en su informe de junio de 1998, la reducción de la capacidad penal para estos supuestos delictivos atentaban contra el carácter progresivo de la Convención sobre Derechos del Niño⁽⁵⁸⁾. La incorporación de adolescentes al sistema de responsabilidad penal de adultos, las prolongadas penas que se les podía imponer, lesionaban el sentido protector de la normativa nacional e internacional en materia de niños y adolescentes. Más grave aún era la

(55) La Convención sobre Derechos del Niño define en su artículo 1° quiénes son niños: “*Para los efectos de la presente Convención, se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad*”.

El Código de los Niños y Adolescentes del Perú distingue entre niños y adolescentes. Niño es toda persona desde el momento de la concepción hasta cumplir los 12 años. Adolescente a partir de los 12 años hasta los 18. El sistema de responsabilidad penal juvenil diseñado en el Código establece que los adolescentes son pasibles de medidas restrictivas de derechos llamadas socio-educativas, que van desde la amonestación y la libertad vigilada hasta la privación de la libertad. Los niños que cometen infracciones penales sólo son objeto de medidas de protección, que en sí mismas no son restrictivas de derechos.

(56) Ver Convención sobre los Derechos del Niño: artículo 40° inc. 1.

(57) Adoptada y abierta a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante Resolución 44/25 del 20 de noviembre de 1989. Ratificada por el Estado del Perú mediante Resolución Legislativa N° 25278 del 03 de agosto de 1990.

(58) Defensoría del Pueblo: Análisis de los Decretos Legislativos sobre Seguridad Nacional dictados al amparo de la Ley N° 26955, Lima, junio de 1998, pág. 14 – 15.

situación cuando el adolescente infractor podía ser juzgado por tribunales militares.

Es importante resaltar que conforme al diseño de responsabilidad penal juvenil de la Convención sobre Derechos del Niño, los Estados deben implementar leyes, procedimientos, autoridades e instituciones específicas para el tratamiento jurídico de los niños infractores⁽⁵⁹⁾. Por ello, es evidente que el citado Decreto Legislativo contravenía dicha disposición convencional, no sólo porque violentaba el sentido tuitivo de la legislación sobre niños y adolescentes al habilitar la justicia privativa militar para su juzgamiento, sino porque al disponer el cumplimiento de la condena en un establecimiento penal de máxima seguridad para adultos, ignoraba la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra y la potencial victimización a las que se les confronta⁽⁶⁰⁾. Evidentemente, un adolescente en prisión, puede sufrir sistemático abuso sexual o ser sometido a diversas formas de explotación como obligarlo a realizar tareas de limpieza, cocina, y otros de carácter doméstico, de ahí en la necesidad de derogar urgentemente esta medida.

Una interpretación progresiva de la Convención sobre Derechos del Niño, permite sostener que las modificaciones en esta materia, deben operar siempre en beneficio de los niños para ampliar sus derechos y no para restringirlos. Por ello, luego de que nuestro país asumiera el compromiso de observar las normas de la Convención y de adecuar nuestra normativa a dicho instrumento internacional a través del Código de los Niños y Adolescentes que estableció un sistema de responsabilidad penal especial, resulta incongruente incorporar a los adolescentes dentro de un sistema de responsabilidad penal para adultos, tan excepcional además.

3. La pena privativa de libertad en los adolescentes infractores se debe aplicar sobre la base del principio de excepcionalidad y alternatividad

En el ámbito de las consecuencias que se derivan del sistema de responsabilidad penal juvenil, la normatividad internacional es clara al establecer que la privación de la libertad de un niño o adolescente es una medida de último recurso, debiendo preferirse las medidas socio-educativas en libertad. Cuando se imponga una privación de libertad, ésta

(59) El artículo 40.3, dispone que “los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para promover el establecimiento de leyes, procedimientos, autoridades e instituciones específicos para los niños de quienes se alegue que han infringido las leyes penales o a quienes se acuse o declare culpables de haber infringido esas leyes ...”.

(60) Defensoría del Pueblo: Op.cit., pág. 15.

deberá ser siempre determinada en el tiempo y por breve plazo. Al respecto, la Convención sobre Derechos del Niño dispone en su artículo 37° que *"Los Estados partes velarán porque: (...) b. Ningún niño sea privado de libertad ilegal o arbitrariamente. La detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a cabo de conformidad con la ley y se utilizará tan sólo como medida de último recurso y durante el período más breve que proceda"*.

El principio de excepcionalidad de la privación de la libertad ha sido recogido también en el Código de los Niños y Adolescentes en cuyo artículo 204° se dispone que *"Sólo se privará de la libertad al adolescente infractor como última medida por el período mínimo necesario y limitándose a casos excepcionales previstos en la ley, teniendo como finalidad lograr su rehabilitación"*.

Sin embargo, el Decreto Legislativo N° 895 es contrario al principio de excepcionalidad y alternatividad de la pena privativa de libertad, porque el inciso a) del artículo 7°, obliga al juez abrir instrucción con mandato de detención. En este caso la detención para el adolescente no tiene el carácter excepcional, sino más bien ordinaria, lo que evidencia, que esta normativa colisiona con los principios antes señalados.

4. La sanción al adolescente infractor debe aplicarse en base al principio de proporcionalidad cuya medida debe tener contenido esencialmente educativo

De acuerdo con el Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil del modelo de la protección integral de la infancia, los niños y adolescentes responden de manera diferente a los adultos. Por ello, el sistema de sanciones debe tener en cuenta su condición de personas en proceso de crecimiento y desarrollo psicológico y emocional. Esta situación les confiere derechos adicionales en el ámbito de la responsabilidad penal, con el fin de fortalecer su posición jurídica y asegurar su bienestar. Para la protección integral de la infancia, las sanciones deben tener un componente esencialmente educativo (prevención especial positiva) con la finalidad de que el infractor se fortalezca en el respeto a los derechos de los demás, se reintegre a la sociedad y al mismo tiempo asuma una función constructiva en ella (artículo 40.1 de la Convención)⁽⁶¹⁾.

(61) Sobre el particular señala la especialista argentina Gimol Pinto: *"Por su especial condición de persona que está creciendo, un sistema de responsabilidad penal juvenil no debe sólo incluir los derechos y garantías con los que cuenta un adulto frente al poder punitivo del Estado, sino que además merece ser dotado de derechos y garantías específicos. Uno de ellos es dotar a la sanción*

Las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores⁽⁶²⁾, exigen además que la respuesta punitiva debe ser proporcional no sólo a la gravedad del delito y a las necesidades de la sociedad sino a las exigencias y necesidades del infractor. Por tal razón, en las sanciones impuestas a personas menores de 18 años debe tenerse en cuenta principalmente *el interés por garantizar el bienestar y el futuro del joven*⁽⁶³⁾

Es evidente, que el Decreto Legislativo N° 895 sólo pretendía neutralizar a quienes incurrir en el delito de terrorismo especial (prevención especial negativa). Ello se deduce del tipo de sanciones que prevé, desde la privación de la libertad de 25 a 35 años hasta la cadena perpetua, sin posibilidad de adelantar su liberación a través de un beneficio penitenciario pues ello está prohibido.

En este orden de ideas, se puede afirmar que el Decreto Legislativo N° 895 se encuentra a contracorriente de los principios de la protección integral, porque no son proporcionales y no tienen una finalidad educativa.

5. Principios para el tratamiento penitenciario del adolescente infractor

En el plano de la ejecución de las sanciones impuestas a los jóvenes infractores, también están presentes los objetivos que inspiran el sistema de responsabilidad penal que nace de la protección integral. Dentro de dicho contexto, el tratamiento debe considerar los siguientes objetivos:

- El fomento del sentido de la dignidad humana;
- El fortalecimiento del sentido de respeto por los derechos y libertades fundamentales de las personas; y,
- La búsqueda de la reintegración social del infractor de manera que asuma una función constructiva en la sociedad.

de un considerable contenido educativo...". PINTO, Gimol: "La doctrina de la protección integral de los derechos del niño". En: Academia de la Magistratura y Centro de Estudios y Acción para la Paz (CEAPAZ). Separata del curso Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal. Lima, 7, 8 y 9 de mayo de 1998, pág. 6.

(62) Adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante Resolución 40/33 del 29 de noviembre de 1985.

(63) Ver Regla 17: Principios rectores de la sentencia y la resolución.

De esta manera, el tratamiento debe estar orientado a que el joven infractor sea capaz de adecuar su vida a las normas y pautas de comportamiento socialmente aceptadas.

Ahora bien, como se ha señalado líneas arriba, las normas internacionales que reconocen y promueven los derechos de los niños (y adolescentes) han establecido el principio de la excepcionalidad y alternatividad de la pena privativa de la libertad, de modo que la privación de libertad a menores de 18 años, debe estar ajustado a las necesidades concretas de rehabilitación del infractor, sin descuidar la evaluación de la gravedad de la infracción y la necesidad de proteger a la comunidad.

Al respecto, las Reglas Mínimas de Naciones Unidas sobre la Administración de Justicia de los Menores, disponen en su Regla 19.1 el carácter excepcional del confinamiento en establecimientos penitenciarios al establecer que *"El confinamiento de menores en establecimientos penitenciarios se utilizará en todo momento como último recurso y por el más breve plazo posible"*.

A partir de este principio rector, las disposiciones internacionales sobre la materia regulan la forma como debe entenderse la privación de la libertad de los menores de edad y precisan los principios que deben ser observados por los Estados, en orden a conseguir el cumplimiento de los fines de la resocialización. Estos principios y derechos son los siguientes:

5.1 Principio de garantía y respeto a los derechos humanos.- Las condiciones de privación de la libertad de las personas menores de 18 años deben ser respetuosas de los derechos fundamentales que se derivan de la dignidad humana (derechos personales o individuales, cívico-políticos y sociales, económicos y culturales). Este principio está recogido en la Convención sobre Derechos del Niño en su artículo 37° y en las Reglas de Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad⁽⁶⁴⁾, reglas 3 y 4.

5.2 Principio de orientación a la rehabilitación del infractor.- Los niños o adolescentes privados de libertad por orden judicial deben tener la oportunidad de participar en actividades y programas que les permita reincorporarse a la sociedad. Tendrán derecho a participar en actividades recreativas y a practicar ejercicios físicos al aire libre. Asimismo, las normas internacionales disponen que tendrán derecho a profesar y practicar su religión en un ambiente de libertad,

(64) Adoptadas por la Asamblea General en su resolución 45/113, de 14 de diciembre de 1990.

debiendo garantizarse el acceso de los representantes religiosos a los centros de internamiento. Este principio está recogido en la Convención sobre Derechos del Niño, artículo 40.1; en las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores, reglas 26.1 a la 26.6 y en las Reglas de Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad.

5.3 Principio de contacto permanente con la comunidad.- Este principio contenido en las Reglas de Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad (Reglas 59 a 62), establece que como parte del tratamiento justo y humanitario, los jóvenes privados de libertad deben mantener una comunicación adecuada con el mundo exterior. La aplicación práctica del principio implica que los jóvenes tienen derecho a recibir visitas de sus familiares, amigos y abogados, a salir del establecimiento por motivos educativos o profesionales, a comunicarse por teléfono con las personas de su elección, salvo que se le haya prohibido hacer uso de este derecho, así como recibir correspondencia. El principio implica, por último, que los jóvenes estén informados de los diversos acontecimientos a través de los medios de comunicación, tales como la radio, la televisión y la prensa escrita.

5.4 Derecho a recibir educación, formación profesional y trabajo.- Para la rehabilitación del joven infractor se le debe garantizar el acceso a una educación adaptada a sus necesidades y capacidades, así como recibir formación profesional que lo prepare para un empleo futuro, por ello, tendrán derecho al acceso a una biblioteca. Asimismo, las normas disponen que siempre que sea posible se les deberá dar la oportunidad de un trabajo remunerado en el ámbito de la comunidad local. Este derecho está reconocido en las Reglas 38 a 46 de las Reglas de Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad.

5.5 Especialización y capacitación del personal a cargo del tratamiento.- El personal a cargo de los jóvenes privados de libertad debe ser especializado para dispensarles un tratamiento adecuado que fomente el sentido de su dignidad y el respeto por los derechos de los otros. La exigencia de personal capacitado está regulada en las reglas 81 y 87 de las Reglas de Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad.

5.6 Principio de separación de los adultos.- Las personas menores de 18 años deben permanecer en establecimientos especiales o, en

todo caso, deben estar separados de los adultos. Este principio está regulado en la Convención sobre Derechos del Niño en su artículo 37, b); en las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de los Menores, regla 26,3 y en las Reglas de Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad, regla 29.

5.7 Derecho a conocer las reglas de vida en el establecimiento.-

Significa que todo establecimiento que alberga a personas menores de 18 años privadas de libertad, por orden de autoridad competente, deben informar al interno verbalmente y por escrito de las reglas del establecimiento, tal como lo establece la regla 24 de las Reglas de Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad.

5.8 Principio de limitación de la coerción física y del uso de la fuerza.-

Supone prohibir el uso de instrumentos de coerción así como el uso de la fuerza, salvo casos excepcionales previstos en la ley o en el reglamento disciplinario del establecimiento (principio de legalidad de las faltas y sanciones disciplinarias). Cualquier sanción debe estar informada por los principios de humanidad, proporcionalidad y estricta necesidad quedando prohibidos, en consecuencia, los tratos crueles, inhumanos o degradantes así como las sanciones desproporcionadas y arbitrarias. El personal a cargo de los jóvenes debe estar prohibido de portar armas. Este principio está regulado en las Reglas de Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad, reglas 63 a 71.

5.9 Derecho a contar con ambientes y condiciones adecuados de alojamiento.-

Los jóvenes internos deben contar con locales y servicios compatibles con la dignidad de una persona. La infraestructura de los establecimientos debe ser funcional a la rehabilitación de los jóvenes. Este derecho está regulado en las Reglas de Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad, reglas 31 al 37.

Ahora bien, el régimen penitenciario de máxima seguridad (que prescribe aislamiento celular continuo durante el primer año) establecido para los adultos, es también aplicado a los adolescentes sentenciados por el delito de terrorismo especial, hecho que vulnera prácticamente todo el conjunto de principios y derechos reconocidos por la normatividad internacional anteriormente reseñada. De manera especial, se afecta los principios relacionados con el tratamiento, la rehabilitación del infractor, del contacto

permanente con la comunidad, de especialización, separación de los adultos y capacitación del personal de custodia, así como el derecho a recibir educación, formación profesional y trabajo.

6. Adolescentes en un establecimiento penal de máxima seguridad

A mediados del mes de abril de 1999, el Programa de Asuntos Penales y Penitenciarios de la Defensoría del Pueblo tomó conocimiento que un adolescente de 17 años de edad, quien se hallaba procesado por el delito de terrorismo especial, había sido recluido en el Establecimiento Penal de Régimen Especial Miguel Castro Castro.

Por ello, se remitió un oficio al Director del citado penal, recomendando se brinde un trato especial para dicho interno, en atención a su condición de adolescente, solicitando su reubicación en un ambiente separado de los adultos. La respuesta fue adecuada pues se dispuso el cambio de ambiente a un lugar que le ofrecía mayor seguridad.

Posteriormente, la Defensoría del Pueblo realizó una visita al establecimiento penal, para entrevistarse con el adolescente e inspeccionar el ambiente donde estaba recluido. En tal ocasión se encontró dos adolescentes más detenidos por el mismo delito. Los tres señalaron no contar con abogado defensor, así como desconocer el estado del proceso que se les seguía. Respecto al régimen de vida al cual eran sometidos, señalaron que éste consistía en un encierro en sus celdas durante 23 horas al día y una sola hora de patio. Este régimen era el mismo que se aplicaba a los internos adultos por terrorismo especial, lo que constituía una situación preocupante. Por la naturaleza del delito imputado, además del Decreto Legislativo 895°, se les estaba aplicando también el régimen previsto en el Decreto Supremo N° 003-96-JUS, destinado a internos de difícil readaptación.

Ciertamente, este régimen de vida resultaba excesivo para los adolescentes (incluso para los adultos), por lo que se recomendó a las autoridades evaluar la posibilidad del trasladarlos a otro establecimiento penal. En decisión que la Defensoría del Pueblo pondera, la Dirección Regional de Lima del Instituto Nacional Penitenciario, reclasificó a los adolescentes y dispuso su traslado al Establecimiento Penal para Procesados de Lima (San Jorge). En la resolución se afirmó que la medida se adoptaba en salvaguarda de la integridad física y psicológica de los adolescentes, y en consideración a su minoría de edad. La decisión se

había adoptado a iniciativa del Consejo Técnico Penitenciario del Penal de Máxima Seguridad Miguel Castro Castro⁽⁶⁵⁾.

El traslado se realizó el 06 de julio último. Posteriormente, comisionados de la Defensoría del Pueblo volvieron a visitarlos en el penal de San Jorge, cuyo Director, nos informó que se hallaban en el Pabellón de Observación y que estaban sometidos al régimen de vida común. Para entonces, ya eran seis los adolescentes detenidos, quienes compartían dos celdas, adecuadamente implementadas. Ellos, nos expresaron su conformidad con su nuevo régimen, pues podían salir al patio y participar de las actividades deportivas, recreativas, educativas y laborales que brinda el penal.

Evidentemente, en este caso la respuesta de la autoridad penitenciaria fue adecuada. Sin embargo, se trata sólo de una solución parcial, pues el problema de fondo se mantiene, en tanto el Decreto Legislativo N° 895 no se modifique.

(65) Resolución Directoral N° 264-99 INPE/DR/DG del 11 de junio de 1999.

CAPITULO V

Comentarios iniciales sobre el sistema de investigación y juzgamiento de los delitos de tráfico ilícito de drogas

1. La creación de la Corte Antidrogas

Para el juzgamiento de los delitos de tráfico ilícito de drogas se ha implementado un sistema jurisdiccional especializado⁽⁶⁶⁾, conformado por juzgados especializados para la instrucción, una sala corporativa para el juzgamiento y una Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema para conocer los casos en última instancia.

En Lima existen cuatro juzgados penales especializados en tráfico ilícito de drogas y otros cuatro distribuidos en Huánuco, Iquitos, Tarapoto y Trujillo. Para el juzgamiento en Lima, existe una sala corporativa de competencia nacional, integrada por nueve vocales superiores que conforman tres salas ("A", "B" y "C"). Los recursos de nulidad son resueltos por la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema.

2. Afectación de derechos

El sistema corporativo de juzgamiento de competencia nacional, además de haber generado una importante concentración de procesos en Lima, implica la violación de determinados derechos, así:

2.1 Sobre el derecho al juez natural

La Constitución Política (artículo 139° inciso 3 segundo párrafo) regula el derecho de toda persona a ser juzgada por el juez predeterminado por la ley, es decir por un juez competente.

(66) Originalmente el 14 de mayo de 1996, mediante Resolución Administrativa N° 097-CME-PJ (publicada el 19 de mayo), la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial creó la Corte Superior Especializada en Casos de Tráfico Ilícito de Drogas, con la finalidad de hacerse cargo de los procesos de delitos de tráfico ilícito de drogas. La misma fue desactivada en febrero de 1997. Posteriormente el 25 de febrero de 1997 se creó la Sala Suprema Especializada para Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas (Resolución Administrativa N° 328-CME-PJ), a partir de la cual se configura el nuevo sistema judicial especializado.

Por su parte el Texto Unico Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial⁽⁶⁷⁾, señala que el único órgano jurisdiccional cuya competencia se extiende a todo el territorio nacional es la Corte Suprema (artículo 28°). En tanto para la investigación y juzgamiento de los delitos, la estructura jurisdiccional se divide en distritos judiciales, teniendo las Cortes Superiores competencia en el territorio de su distrito judicial (artículo 36°). Los juzgados penales tienen competencia en el ámbito territorial de la provincia a la que pertenecen (artículo 47°). Finalmente, el Código de Procedimientos Penales establece la competencia de los juzgados penales en base al lugar donde se cometió el delito, donde se hallaron las pruebas, donde fue detenido el inculcado o el lugar de su domicilio (artículo 19°).

Como se puede notar, en el caso de juzgamiento del delito de tráfico ilícito de drogas, no se observan las reglas de la competencia que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial. La creación de los juzgados y salas especializados de competencia nacional afecta la normatividad sobre la materia, más aún si se tiene en cuenta que el origen de las mismas es una Resolución Administrativa de la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial que no tiene rango de ley (Resolución Administrativa 328-CME-PJ).

2.2 Sobre el derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas

Este derecho es parte del debido proceso regulado en la Constitución Política del Estado (artículo 139° inciso 3° segundo párrafo) y en otros instrumentos internacionales⁽⁶⁸⁾.

La concentración de la función jurisdiccional en pocos juzgados especializados y en sólo una Sala Corporativa Nacional, origina que los procesos se tramiten lentamente por la alta concentración de carga, afectando el derecho a ser juzgado en un plazo razonable y sin dilaciones indebidas.

Al respecto, durante nuestras visitas de supervisión a los establecimientos penales del país hemos recibido múltiples quejas relacionadas con este tema, incluso de inculcados a quienes no se

(67) Decreto Legislativo N° 767.

(68) Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 14° inciso 3 literal c) y Convención Americana de Derechos Humanos (artículo 8° inciso 1).

les habría tomado su declaración instructiva en el término de ley o que están a la espera de juicio oral por más de quince meses⁽⁶⁹⁾.

De otro lado, la centralización de la Sala Corporativa origina que las impugnaciones se resuelvan en Lima, remitiéndose en muchos casos el expediente principal lo que contribuye al aplazamiento de las diligencias.

Un caso paradigmático es el del expediente N° 435-97 del Cuarto Juzgado Penal Especializado, donde el inculcado se quejó ante la Defensoría del Pueblo en mayo de 1999, por estar a la espera de juicio oral por espacio de 6 años. En el caso del expediente N° 540-99 del Cuarto Juzgado Penal Especializado, la declaración instructiva del inculcado se tomó luego de un mes de encontrarse detenido.

2.3 Sobre el derecho a la defensa

La Constitución Política (artículo 139° inciso 6) reconoce el derecho a no ser privado de la defensa en ningún estado del proceso, lo que supone poder contar con la asesoría de un abogado defensor, disponer del tiempo y los medios para preparar la defensa, así como interrogar a los testigos de cargo. En consecuencia, un aspecto básico del derecho a la defensa es garantizar el acceso a la información, lectura, etc. de su expediente en forma oportuna, situación que en la actualidad no se cumple.

En la práctica, los expedientes que permanecen en los juzgados o salas de competencia nacional, no son de fácil acceso a los abogados que patrocinan causas del interior del país, pues para ello tendrían que trasladarse hasta la sede de los juzgados, incrementando así los costos de la defensa.

De otro lado, frecuentemente se han recibido quejas de internos sobre los horarios en los que se habrían llevado a cabo algunos juzgamientos. Los internos del penal de Tacna, Ayacucho, Iquitos y Piura han coincidido en afirmar que las salas itinerantes en algunas ocasiones, habrían iniciado las audiencias a las 5:00 de la tarde, sin previo aviso, hecho que les impedía comunicarse con sus abogados. Cuando ello era posible, los letrados tenían acceso restringido a los expedientes porque estaban siendo utilizados para las diligencias judiciales. Esta situación les genera dificultad en la defensa y

(69) El mayor número de quejas provienen de los establecimientos penitenciarios de Mujeres de Pocollay en Tacna, de Iquitos, de Yanamilla en Ayacucho, de Pucallpa.

debilita su posición en el proceso. El principio de contradicción propio del proceso penal se encuentra así limitado.

Al respecto, el Comité de Derechos Humanos ha sostenido en varias decisiones que *“el derecho de una persona acusada de disponer del tiempo y de los medios adecuados para preparar su defensa es un elemento importante de la garantía de un juicio justo, y un corolario del principio de la igualdad de condiciones entre la defensa y la acusación...”* ⁽⁷⁰⁾.

En la supervisión al Establecimiento Penitenciario de Yanamilla (Ayacucho), los internos por tráfico ilícito de drogas⁽⁷¹⁾, reclamaron la necesidad de que en la ciudad de Huamanga se instale un juzgado especializado. Afirmaron que el funcionamiento de los juzgados itinerantes impedía ejercer su derecho a la defensa, pues sus abogados sólo tenían acceso al expediente durante los días en que el juzgado permanecía en esa ciudad para el juzgamiento.

2.4 Sobre el derecho a impugnar las resoluciones judiciales y la reforma de la sentencia por la Corte Suprema

La doble instancia es un principio de la función jurisdiccional del cual se desprende el derecho de impugnar las decisiones judiciales que afectan los intereses de los justiciables. La Constitución Política del Estado (artículo 139° inciso 14) y otros instrumentos internacionales⁽⁷²⁾, señalan que el fallo condenatorio y la pena impuesta puedan ser sometidos a un tribunal superior.

En la práctica el ejercicio de este derecho se encuentra en algunos casos restringido. Así, ciertos procesados no pueden ejercitar el derecho a impugnar una resolución judicial que ordenó su detención, debido a que no conocen oportunamente dicho mandato o reciben la notificación mediante facsímil, que no es entregado al interesado.

De otro lado, un recuso impugnatorio tiene por finalidad superar o remover la desventaja proveniente de una decisión jurisdiccional. Su objetivo es lograr que el superior emita nueva decisión que favorezca

(70) Citado en: Comisión Andina de Juristas: Protección de los Derechos Humanos. Definiciones Operativas. Lima, 1997, pág. 149.

(71) Que representan el 51% de la población de dicho penal. Del total de internos (695), 355 están por el citado delito.

(72) Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 14° inciso 5) y Convención Americana de Derechos Humanos (artículo 8° inciso 2 literal h).

al recurrente⁽⁷³⁾. En materia penal la apelación tiene un conjunto de principios limitadores de las atribuciones del tribunal superior⁽⁷⁴⁾. Entre estos se encuentran:

- Limitación del conocimiento del juez superior, por lo que debe estar supeditado a pronunciarse sobre las cuestiones promovidas en el recurso⁽⁷⁵⁾.
- Prohibición de pronunciarse sobre los no apelantes; es decir, el juez superior no debe resolver de oficio sobre los no recurrentes, salvo que el pronunciamiento de apelación lo favorezca.
- Prohibición de la reforma peyorativa de la sentencia. El juez superior no puede reformar la resolución impugnada en perjuicio del recurrente.

Según el Código de Procedimientos Penales (artículo 292° inciso 1) procede el recurso de nulidad contra las sentencias en los procesos ordinarios, teniendo la Corte Suprema entre sus facultades el resolver el recurso de nulidad contra una sentencia, pudiendo modificar la pena de uno o más de los condenados cuando se haya aplicado al delito, una que no le corresponde por su naturaleza o por las circunstancias de su comisión (artículo 300°). Sin embargo, la norma no precisa si esta facultad sólo está permitida cuando el Ministerio Público interpuso el recurso impugnatorio.

El Pleno Jurisdiccional de la Corte Suprema de 1995, ha considerado que ello es posible, por lo que asumieron una interpretación extensiva de las facultades para reformar las sentencias, considerando que la agravación de la pena de uno de los condenados, puede afectar también a otros sentenciados así no hayan interpuesto recurso impugnatorio.

No obstante, interpretando la norma a la luz de los principios enunciados, entendemos que la Corte Suprema sólo puede reformar la sentencia agravando la sanción en el supuesto que el recurrente sea el Ministerio Público y no cuando el recurso haya sido presentado

(73) SAN MARTIN CASTRO, César: Derecho Procesal Penal. Volumen II. Grijley. Lima, 1999, pág. 671.

(74) SAN MARTIN CASTRO, César. Op.cit., pág. 704 - 713.

(75) Adicionalmente se puede extender la competencia en los supuestos de estrecha relación, como en los casos de pluralidad de agentes o de materias. En estos casos, el juez superior puede pronunciarse, extendiendo el objeto de la pretensión impugnatoria a cuestiones no deducidas específicamente siempre que los puntos sean dependientes.

por el afectado y el Ministerio Público se encuentre conforme con la sentencia impugnada.

En consecuencia, una decisión diferente implica una reforma peyorativa de la sentencia, que afecta aspectos básicos del proceso penal. En primer lugar, una limitación al derecho de defensa por la posibilidad de que se resuelva el recurso sin que pueda formular argumentos contra aspectos que lo perjudiquen. En segundo lugar, si el Ministerio Público no apeló la sentencia expresando su conformidad, en tanto titular de la acción penal, la Corte no podría asumir de facto un estado de impugnación de la sentencia. Finalmente, la interposición del recurso debe limitar a la Corte a conocer sólo aspectos materia de la impugnación.

En los casos de pluralidad de agentes, los no apelantes no pueden ser afectados con la decisión de la Corte Suprema cuando uno de los sentenciados deduzca el recurso impugnatorio, salvo que la sentencia que resuelve la impugnación sea favorable.

Los internos del Penal de Ayacucho, Tacna e Iquitos señalaron haber sido objeto de incremento de sus condenas luego de una apelación y que en otros casos la reforma de la sentencia habría afectado a los no apelantes, pese a haber expresado su conformidad con la resolución de la sala penal.

2.5 Aplicación de beneficios penitenciarios

Se han presentado algunas hipótesis de indebida aplicación en el tiempo de la ley penal. Es el caso de un interno del Establecimiento Penitenciario de Pucallpa, que solicitó el beneficio de semilibertad ante el Quinto Juzgado Transitorio (Exp. 66690-97-02), luego de haber sido condenado por un delito cometido en 1988. El juzgado declaró improcedente el beneficio argumentando que era de aplicación la Ley N° 26320, cuyo artículo 4° prohíbe el acceso del beneficio penitenciario para determinados supuestos de este delito. Sin embargo, la citada ley entró en vigencia el 02 de junio de 1994, por lo que el órgano jurisdiccional aplicó indebidamente la ley, pues la norma invocada para denegar el beneficio no estuvo vigente al momento de la comisión del delito⁽⁷⁶⁾.

(76) Para determinar la temporalidad de la ley, debe tenerse en cuenta que el Decreto Ley N° 22095 (21 de febrero de 1978), modificado por el Decreto Legislativo N° 122 (15 de junio de 1981), en su artículo 64° restringía el acceso a los beneficios de libertad provisional, condena condicional, conmutación o indulto para los procesados o sentenciados por el delito de tráfico ilícito de drogas.

3. La concentración de procesos ha ocasionado sobrepoblación en algunos penales

La creación de este sistema de juzgamiento ha causado efectos en el sistema penitenciario nacional. Debe tenerse presente que el delito de tráfico ilícito de drogas representa el 25.58% de la población penal nacional; es decir se trata del segundo delito con mayor incidencia en nuestro país que compromete a 7,004 internos.

En ocasiones, la implementación del sistema ha originado un incremento desmesurado de internos en determinados penales, como el caso de mujeres Chorrillos en nuestra capital. Lo mismo ocurrió con la Resolución Administrativa N° 032-STP-TID, que fijó la ciudad de Trujillo como sede de funcionamiento de un juzgado especializado cuya competencia alcanzaba a los distritos judiciales de Tumbes y Piura, Lambayeque, La Libertad, Santa-Chimbote, Amazonas y Cajamarca, ordenando además que los internos procesados por este delito debían ser trasladados para su juzgamiento al Establecimiento Penitenciario El Milagro de Trujillo, hecho que produjo un incremento notable de la población.

Dicha norma fue modificada por la Ley N° 23689 (21 de octubre de 1983) y el Decreto Ley N° 24388 (03 de diciembre de 1985), vigente hasta el 26 de abril de 1991, cuando entró en vigencia el Código de Ejecución Penal, Decreto Legislativo N° 654. Ninguna de estas normas restringía el acceso a los beneficios penitenciarios de semilibertad y redención de la pena por el trabajo y estudio.

CAPITULO VI

La Reducción del Uso de la Cárcel

En la medida que la cárcel constituye la reacción penal por excelencia frente a la comisión de un delito, consideramos importante fortalecer las acciones destinadas a hacer un uso cada vez menor de ésta sanción institucionalizada. Así como el derecho penal debe ser una medida de *última ratio*; del mismo modo, la pena privativa de libertad debe ser la respuesta final sólo para casos que afecten bienes jurídicos trascendentes y siempre que no existan otras medidas posibles a aplicar.

Estimamos que esta política puede ser implementada en dos momentos: la primera, en el corto plazo, haciendo uso de los mecanismos legales existentes; y, otra, de mediano plazo, que requiere de determinadas modificaciones legislativas.

1. PROPUESTAS DE CORTO PLAZO

1.1 La gracia presidencial

Las atribuciones otorgadas al Presidente de la República en su condición de Jefe de Estado, implican una renuncia del Estado a su pretensión punitiva o a la ejecución de la misma. Creemos que el empleo racional de estos mecanismos, puede constituirse en una valiosa herramienta político-criminal tanto para implementar medidas de despoblación, como para efectuar correctivos en casos de aplicación inadecuada de la ley o errores judiciales evidentes.

Las gracias presidenciales, están previstas en el artículo 118° inciso 21 de la Constitución Política del Estado, que permiten al Presidente de la República conceder indultos, derechos de gracia y conmutaciones de pena.

- **Indulto.-** Suprime la pena impuesta, perdonando la parte que aún no se ha cumplido, permitiendo la libertad inmediata del interno.

- **Conmutación de pena.-** Permite la remisión parcial de la condena, que puede expresarse en la sustitución de la pena privativa de libertad por una de menor duración o por otra de naturaleza distinta.
- **Derecho de gracia.-** La naturaleza jurídica, de ésta novísima institución constitucional corresponde al de una causa de extinción de la acción penal, mediante la cual se puede conceder a los internos procesados cuya instrucción haya excedido el doble del plazo legal más su ampliatoria. Para el caso de los internos sujetos a procesos ordinarios, el plazo de la instrucción es de 4 meses (120 días), que puede ser ampliado por un término máximo de 60 días, según lo indica el artículo 202° del Código de Procedimientos Penales. Por lo tanto, el procesado podrá solicitar el derecho de gracia luego de transcurridos 300 días de iniciada su instrucción, sin que haya culminado.

En los procesos sumarios, el plazo de instrucción es de 60 días, que puede ser ampliado por un máximo de 30, conforme el artículo 3° del Decreto Legislativo N° 124. En consecuencia, un procesado podrá solicitar el derecho de gracia cuando su instrucción tenga una duración mínima de 150 días.

Aun cuando el Presidente de la República puede conceder las gracias sin instancias previas, ordinariamente se otorgan luego de una evaluación individual del beneficiario, labor que es realizada por las instancias regulares del Ministerio de Justicia, como la Comisión Permanente de Calificación de Indultos, la Comisión de Alto Nivel para la Concesión del Derechos de Gracia y a partir de enero del 2000, también por su Comisión Nacional de Derechos Humanos.

1.2 Libertad por exceso de detención procesal

El artículo 137° del Código Procesal Penal, establece que luego de transcurrido el plazo de ley sin que se haya dictado sentencia, corresponde la libertad inmediata del procesado privado de libertad, debiendo el juez penal señalar las medidas necesarias para asegurar su asistencia a las diligencias judiciales.

Según el artículo 3° del Decreto Ley N° 25824, en los procesos ordinarios el plazo es de 15 meses y en los sumarios de 9 meses. Los plazos se duplican en los delitos de tráfico ilícito de drogas, terrorismo y espionaje o en los procesos complejos, que son aquellos que se siguen contra 10 o más imputados o en agravio de igual número de personas.

Adicionalmente, el juez penal podrá ampliar el plazo por uno igual, cuando concurran circunstancias de especial dificultad o una especial prolongación de la investigación y que el inculpado pudiera substraerse a la acción de la justicia.

1.3 Personas que podrían ser beneficiadas.

A. Internos en situación de vulnerabilidad.

La población penal está integrada por internos de características diversas. Unos son más vulnerables que otros, atendiendo a razones de salud, edad, tiempo de permanencia en el penal e incluso su situación jurídica. Además, en algunos casos, la permanencia de un interno en un penal puede implicar una mayor afectación a su situación personal, por lo que la privación de libertad carece de objeto y todo intento de resocialización resulta insostenible. En tal situación, creemos que impulsar políticas de excarcelación con dichos internos no generará alarma social.

Dentro de este grupo podemos considerarse a:

- **Los enfermos graves.** En la población penal existen internos que presentan enfermedades como el VIH/SIDA, insuficiencia renal (diálisis), TBC en fase avanzada, cáncer y otras que por su gravedad requieren de atención médica especializada y permanente, que la administración penitenciaria no puede brindarles dentro del establecimiento penal.

Si bien no existe información exacta del número de internos en tales situaciones, respecto a la variable de salud, una muestra está expresada en el estudio realizado por Médicos Sin Fronteras en el establecimiento penitenciario de Lurigancho en 1999. De una población

penal de 6,633, entre 1994 y 1997 se diagnosticó un total de 92 internos infectados por VIH, de los cuales el 60% presentaba una asociación de VIH y TBC. Este porcentaje de coinfección presenta mayores índices con relación a los que se encuentran en la población no privada de libertad. Entre enero a setiembre de 1999, se habían detectado 29 casos de VIH positivo.

- **Los internos mayores de 60 años.-** Las difíciles condiciones de vida en una cárcel y la carencia de servicios adecuados, afectan tanto la calidad como la esperanza de vida de toda persona privada de libertad. Los niveles de afectación, se acentúan particularmente en los internos mayores de 60 años, pues regularmente presentan afecciones de salud propias de su edad, tienen disminuida su capacidad física y mental, dificultades para desarrollar actividades laborales cotidianas en una prisión y que por ello tienen dificultades para auto sostenerse. En tales situaciones, la estadía de un adulto mayor de 60 años en un penal, implica generalmente mayor afectación a su salud física y mental.

Tampoco se cuenta con información precisa sobre el universo de este segmento de internos. Una referencia aproximada la encontramos en el Informe Estadístico del Instituto Nacional Penitenciario de noviembre de 1999, que registró 1,131 internos mayores de 50 años.

- **Los enfermos psiquiátricos**

En teoría, una persona que presenta trastornos psiquiátricos, no debería encontrarse en un establecimiento penal. Lamentablemente, la realidad nos indica lo contrario, pues en las cárceles de nuestro país existen decenas de internos psiquiátricos, algunos de ellos desde hace más de 25 años.

Si bien no se conoce con precisión el número de estos internos, sabemos que en el penal de Lurigancho a febrero de 1999, existían 30 internos psiquiátricos. Para un interno psiquiátrico, la cárcel significa un lugar de

mayor deterioro de su salud, donde la pena o medida de seguridad no cumple ninguna finalidad válida.

B. Internos procesados

A noviembre de 1999, el 62% (17,406 internos) de la población penal se encontraba conformada por internos procesados, lo que evidencia la existencia de un retraso en la administración de justicia. Si bien las causas son múltiples, principalmente están relacionados con el inadecuado funcionamiento del sistema penal y la política criminal vigente en nuestro país. Específicamente, la alta carga procesal, el número insuficiente de magistrados, la falta de recursos y apoyo técnico, los sistemas de juzgamiento a través de salas corporativas de competencia nacional, particularmente el caso de tráfico ilícito de drogas, la sobrecriminalización, los supuestos de detención obligatoria, etc.

C. Internos sentenciados a pena privativa de libertad efectiva de corta duración.

De acuerdo a información estadística del INPE, a noviembre de 1999 se habían registrado 1,437 internos condenados entre 2 días a 3 años de pena privativa de libertad y 1,259 entre 3 a 5 años. Esto significa que 2,696 personas tenían penas privativas de libertad de corta duración, muchos de los cuales podrían haber sido objeto de otro tipo de sanciones penales.

Por la pena impuesta, debemos suponer que los delitos que cometieron tales personas o las circunstancias que acompañaron los hechos, no fueron de gravedad. Muchos de ellos quizá, podrían haber sido objeto de otro tipo de sanciones penales, como la prestación de servicios a la comunidad y limitación de días libres (artículo 31° del Código penal), multa (artículo 41°) o la suspensión de la ejecución de la pena (artículos 57° y 58°).

D. Internos condenados a pena privativa de libertad efectiva

El 38% (10,675 internos) de la población penal tiene la condición de sentenciados. Si de dicho universo reducimos los

2,696 internos condenados a penas menores de 5 años cuya atención nos parece prioritaria, tendremos 7,979 internos sobre los cuales también se pueden aplicar selectivamente mecanismos de despoblación. Por ejemplo, la concesión del indulto para los internos que hayan cumplido un tercio de su pena en un establecimiento penal y la reducción de la condena a través de la conmutación de pena, hasta un tercio o la mitad de la misma, en atención a las condiciones personales del interno, la naturaleza del delito cometido, grado de participación y reparación del perjuicio ocasionado.

2. PROPUESTAS DE MEDIANO PLAZO

Una política despenalizadora sólo puede tener sustento en el tiempo si se adoptan medidas que garanticen el equilibrio entre la seguridad ciudadana, el uso racional de la pena privativa de libertad y el nivel de la población penal.

Para ello, debe ampliarse las posibilidades de aplicación de instituciones sustantivas y procesales contenidas en nuestra legislación, que modificadas adecuadamente podrían permitir la imposición en un mayor número de casos, de sanciones penales distintas a la privativa de libertad, cuando no se afecten bienes jurídicos trascendentes. Así, se optaría por la pena privativa de libertad sólo cuando los delitos revistan gravedad.

En la legislación nacional existen diversas opciones con tal finalidad. Unos, permiten que en determinados casos se decida por no iniciar el proceso penal; otros, una vez iniciado el mismo, el juzgador pueda optar por medidas alternativas a la prisión. Entre estas se encuentran:

2.1 Instituciones penales que evitan el proceso penal o la privación de la libertad como pena.

A. Principio de Oportunidad

Previsto en el artículo 2° del Código Procesal Penal, que permite al Ministerio Público abstenerse de ejercitar la acción penal o solicitar el sobreseimiento de un proceso ya iniciado. Para ello, se requiere el consentimiento expreso del imputado y sólo será posible en las siguientes hipótesis:

- Cuando el agente haya sido afectado directa y gravemente por las consecuencias de su delito y la pena resulte inapropiada;
- Cuando se trate de delitos que por su insignificancia o su poca frecuencia no afecten gravemente el interés público, salvo cuando la pena mínima supere los dos años de pena privativa de libertad o hubiere sido cometido por un funcionario público en ejercicio de su cargo; y,
- Cuando la culpabilidad del agente en la comisión del delito o su contribución a la perpetración del mismo sean mínimas, salvo que se trate de un hecho delictuoso cometido por un funcionario público en ejercicio de su cargo.

En estos dos últimos supuestos será necesario que el autor haya reparado el daño.

En la actualidad, la aplicación de esta figura es limitada, fundamentalmente porque sólo se puede aplicar a los delitos cuya pena mínima no supere los dos años. Si bien cuando se promulgó el Código Penal en 1991, los casos que podían ser beneficiados eran diversos, ello ha variado sistemáticamente pues la mayoría de los delitos han sufrido notables incrementos de penas. Por ello, en la actualidad son pocos los casos a los que la figura se puede aplicar, por lo que sería conveniente modificar el artículo 2° del Código Procesal Penal ampliando la pena mínima a los cuatro años, de tal manera que posibilite una mayor aplicación.

B. Reserva del Fallo Condenatorio

Previsto en el artículo 62° al 67° del Código Penal y permite al juez emitir una sentencia, absteniéndose de dictar la parte resolutive en la que tendría que establecer la pena, limitándose a fijar reglas de conducta por un período y la responsabilidad civil correspondiente. Se puede aplicar cuando la naturaleza, modalidad del hecho punible y personalidad del agente hagan prever que la medida impedirá la comisión de un nuevo delito, tal como lo exige el artículo 62° del Código Penal. Si el

régimen de prueba no fuera revocado, será considerado extinguido al cumplirse el plazo fijado y el juzgamiento como no efectuado.

De acuerdo a la norma vigente, su aplicación procede cuando:

- El delito esté sancionado con pena privativa de libertad no mayor de tres años o con multa;
- La pena a imponerse no supere las noventa jornadas de prestación de servicios a la comunidad o de limitaciones de días libres; o,
- La pena a imponerse no supere los dos años de inhabilitación.

La Reserva de Fallo Condenatorio introducida en el Código Penal de 1991 tiene en la actualidad limitada aplicación. Consideramos necesario ampliar su alcance para los delitos que estén sancionados con pena privativa de libertad no mayor de 4 años.

C. Exención de la Pena

Regulada en el artículo 68° del Código Penal, autoriza al juez a eximir la pena a la persona que ha delinquido, en tanto su responsabilidad sea mínima y el delito tenga una pena privativa de libertad menor a 2 años o una pena limitativa de derechos o multa. Se trata de una medida poco utilizada por los magistrados, pues el incremento de penas ha reducido sustantivamente las posibilidades de su aplicación, por lo que es necesario ampliar su parámetro cuantitativo. Para ello, será necesario ampliar su ámbito de aplicación a los delitos que tengan una pena privativa de libertad no menor de 4 años.

D. Suspensión de la Ejecución de la Pena

Regulado en el artículo 57° al 61° del Código Penal, que autoriza al juez a suspender el cumplimiento de la pena privativa de libertad (en tanto no sea mayor de cuatro años y se aprecie que ello impedirá que la persona vuelva a delinquir). Establece reglas de conducta para el sentenciado, que en caso

de incumplirlas producirá la reversión de la suspensión, haciéndose efectivo el cumplimiento de la pena. Se trata sin duda de la alternativa a la privativa de libertad más utilizada por los magistrados, cuyo control del cumplimiento de las reglas de conducta debe mejorar para no deslegitimar tan importante institución.

2.2. Medidas alternativas a la privación de la libertad

A partir de la crisis del sistema penitenciario, se viene impulsado el uso de penas alternativas a la privativa de libertad, con la finalidad de evitar los efectos negativos de la cárcel⁽⁷⁷⁾ y contribuir con la solución al hacinamiento de las cárceles⁽⁷⁸⁾.

Se trata de la aplicación de sanciones penales de naturaleza diferente a la privativa de libertad, que han sido concebidas como respuestas a la crisis del sistema penitenciario, al hacinamiento de las prisiones y a la reducción de los efectos negativos de la cárcel. Nuestra legislación prevé la pena de prestación de servicios a la comunidad y la limitación de días libres.

A. Prestación de servicios a la comunidad

Que obliga al condenado a realizar trabajos gratuitos en entidades asistenciales, hospitalarias, escuelas, orfanatos y otras instituciones similares, así como en obras públicas. Los servicios que prestarán los condenados tendrán relación con

(77) No son solamente propios de realidades como la peruana o latinoamericana, si se observa un informe sobre las medidas alternativas a la privación de libertad del Instituto de Helsinki de las Naciones Unidas: *“Todos los gobiernos europeos consideran que la privación de la libertad es una sanción que tiene efectos negativos graves para el detenido y su situación social. También es una sanción costosa de aplicar. Solamente por estas razones no debería aplicarse a los delincuentes con los cuales una sanción alternativa daría mejores resultados”*. *No-Custodial Alternatives in Europe*, Norman Bishop, Helsinki 1988, p. 1. Citado en STER, Vivien: “Las alternativas a la privación de la libertad en Gran Bretaña”. En: *Acerca de la cárcel*. Cuadernos de Análisis Jurídico. Serie Seminarios N° 24. Escuela de Derecho Universidad Diego Portales. Santiago de Chile, 1993, pág. 31.

(78) Para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es una forma de solucionar el problema del hacinamiento, en tanto no basta la construcción de más cárceles. POCHAK, Andre: “El alcance que el sistema interamericano de Derechos Humanos le reconoce a los derechos de los presos”. En: *Materiales de Lectura del Segundo Taller Regional Norte, Centro y Sur: Justicia y Derechos Humanos*. Comisión Episcopal de Acción Social. Lima, 1998, pág. 122. Citando el Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos de Brasil de 1997.

sus aptitudes personales y se deberán cumplir en jornadas de diez horas semanales entre los días sábados y domingos, de modo que no se perjudique la jornada normal de su trabajo habitual (artículo 34° del Código Penal).

B. Limitación de días libres

Que establece la obligación al penado a permanecer los días sábados, domingos y feriados, por un mínimo de diez y un máximo de dieciséis horas en total por cada fin de semana, en un establecimiento organizado con fines educativos, que no debe tener las características de un centro penitenciario. En este período el condenado recibirá orientaciones tendientes a su rehabilitación (artículo 35° del Código Penal).

Estas penas pueden ser aplicadas de manera autónoma (si el tipo penal expresamente lo señala) o como sustitutivas de la pena privativa de libertad. En este último caso, funciona como medida alternativa, siempre que la pena no sea superior a los cuatro años (artículo 32°)⁽⁷⁹⁾.

Lamentablemente, el incremento de la penalidad de los delitos, la falta de reglamentación adecuada y el desconocimiento de sus posibilidades han hecho que su aplicación sea restringida. Por ello, estas penas no han logrado consolidarse aún como alternativas reales a la privativa de libertad⁽⁸⁰⁾ e incluso, en muchas ocasiones se les ha negado la categoría de penas, considerándolas sólo como formas de clemencia o indulgencia⁽⁸¹⁾. Evidentemente, se trata de un criterio errado, por cuanto la prestación de servicios a la

(79) Originalmente el límite era de tres años, pero fue modificado acertadamente mediante Ley N° 27186 del 20 de octubre de 1999.

(80) En el caso de Europa, según una investigación del Instituto de Helsinki de las Naciones Unidas: *“La evidencia estadística ... demuestra claramente que las alternativas a la privación de libertad se usan mucho menos de lo que se podrían usar, o cuando son usadas, substituyen a otras alternativas y no a la prisión”*. *No-Custodial Alternatives in Europe*, Norman Bishop, Helsinki 1988, p. 14. Citado en STER, Vivien: Op.cit., pág. 33.

(81) Un Informe del gobierno de Gran Bretaña al describir las penas señala: “parece haber una presunción de que la prisión es la única pena “real”. Esto a veces se refuerza por alusiones desconcertantes a otras penas como “alternativas a la prisión”. Ninguna otra pena puede restringir la libertad de la misma forma que una pena de encarcelamiento; si pudiera, sería de otra forma de privación de libertad. Por esto en realidad no puede haber una “alternativa” a la prisión, sino solamente otras formas de castigar”. *Crime. Justice and Protecting the Public*, Ministerio del Interior, Londres 1990, párrafo 4.1. Citado en STER, Vivien: Op.cit., pág. 32.

comunidad y la limitación de días libres, son también sanciones penales al igual que la privativa de libertad.

La escasa aplicación de esta pena fue atribuida a dos factores. Primero, la limitación de sus parámetros cuantitativos, en tanto sólo era posible su imposición en delitos cuyas penas no superen los tres años. Sin embargo, ello fue superado con la modificación introducida por la Ley N° 27186 del 20 de octubre de 1999, que amplió los supuestos de aplicación hasta los cuatro años. Segundo, por la falta de una reglamentación adecuada, que garantice una correcta ejecución de la pena, que está pendiente de reelaborar.

De otro lado, en América Latina, resulta interesante la experiencia chilena donde la aplicación de estas penas han sido exitosas. Según información del Ministerio de Justicia de dicho país⁽⁸²⁾, a marzo de 1999, el 50.1% de personas sentenciadas por los tribunales penales, fueron a medidas alternativas a la privación de libertad.

Consideramos que en nuestro país, se debe iniciar una promoción agresiva de los beneficios del uso de estas penas. Para ello, no sólo es necesario un nuevo reglamento, sino una adecuada implementación de sus mecanismos de ejecución penal. Por ejemplo, en el caso de la pena de prestación de servicios a la comunidad, es necesario un registro de instituciones públicas y privadas receptoras, que garanticen la ejecución de las actividades laborales del condenado. En este sentido, la Defensoría del Pueblo está dispuesta a constituirse en una entidad receptora para dichos fines.

3. OTRAS MEDIDAS

3.1 Limitación de la detención preventiva

Uno de los aspectos más relevantes de la problemática carcelaria, es la existencia de un alto porcentaje de internos que tienen la condición de procesados⁽⁸³⁾. El uso indiscriminado de la medida de

(82) Ministerio de Justicia de Chile: Nueva Política Penitenciaria de Chile. Discurso de la Ministra de Justicia de Chile, señora María Soledad Alvear Valenzuela, en el 2° Encuentro de Ministros de Justicia de la Organización de Estados Americanos. Lima, marzo de 1998.

(83) A quienes se denomina también “*presos sin condena*”, en expresión utilizada desde el ya clásico trabajo de CARRANZA, Elias; HOUED, Mario; MORA, Luis Paulino; y, ZAFFARONI, Eugenio: El preso sin condena en América Latina y el Caribe: Estudio comparativo estadístico y legal de treinta países y propuestas para reducir el fenómeno. ILANUD. San José, 1988.

detención, además de ser un acto arbitrario, significa desconocer el principio de presunción de inocencia. Por ello, la detención preventiva sólo debe proceder cuando existan suficientes elementos probatorios de la responsabilidad del inculcado⁽⁸⁴⁾; cuando haya peligro procesal, es decir, cuando el inculcado obstaculice la investigación o interfiera en la determinación de la verdad, alterando o falsificando medios probatorios, amenazando testigos o a la víctima, etc.⁽⁸⁵⁾ o cuando pueda fugar⁽⁸⁶⁾, criterios que además deben ser interpretados de manera restrictiva⁽⁸⁷⁾. En rigor, ambos requisitos están ya previstos en el artículo 135° del Código Procesal Penal que además exige que la pena a aplicarse sea superior a cuatro años de privativa de libertad.

Los límites a la prisión preventiva son:

A. Principio de Excepcionalidad.- El derecho de la persona a la libertad prohíbe aplicar una pena antes de que exista una

-
- (84) Elementos de convicción que permitan al juzgador sostener razonablemente que el inculcado es probablemente el responsable del delito. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos define los indicios razonables como «la existencia de hechos o de informaciones que convencerían a un observador objetivo de que dicha persona puede haber cometido el delito». Caso Fox, Campbell y Hartley, decisión del 30 de agosto de 1990. Citado en el Centro de Derechos Humanos, Derechos humanos y prisión preventiva pág. 12. En: BOVINO, Alberto: Problemas del Proceso Penal Contemporáneo. Editores del Puerto s.r.l. Buenos Aires, 1998.
- (85) Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no es aceptable argumentar este peligro sobre la base de hechos que dependen no de la voluntad del inculcado sino de funcionarios estatales. Informe N° 12/96, párrafo 84.
- (86) La Comisión señala que; *“En vista de que la detención preventiva representa la privación de la libertad de una persona que todavía goza de la presunción de inocencia, debe basarse exclusivamente en la probabilidad de que el acusado abuse de la libertad condicional y proceda a la fuga, y en el hecho de que la libertad condicional de un acusado pueda llegar a convertirse en un riesgo significativo ...”*. Informe N° 12/96, párrafo 89.
- (87) Incluso, hay quienes postulan una postura más restrictiva, al afirmar que el único supuesto válido para la detención es el peligro de fuga y no la obstaculización de la investigación. Binder afirma la necesidad del respeto de la dignidad humana y el hecho que el Estado no puede argumentar el posible entorpecimiento, ya que cuenta con medios para evitarlo. BINDER, Alberto: Introducción al Derecho Procesal Penal. Ad Hoc, Buenos Aires, 1993; pág. 199.

sentencia, por lo que la libertad debe ser la regla⁽⁸⁸⁾, debiendo usarse medidas cautelares alternas a la privación de libertad⁽⁸⁹⁾.

- B. Principio de proporcionalidad y prohibición de exceso de la detención⁽⁹⁰⁾.**- La detención no debe ser desproporcional a la gravedad de la pena que se espera. Caso contrario un inocente podría sufrir una pena mayor a la de un culpable⁽⁹¹⁾. Este principio, es un correctivo a un mandato de detención debidamente justificado, pero que debido al transcurso de un tiempo prudencial de detención, se debe posibilitar la libertad del detenido. Por ello, siempre es conveniente establecer un plazo razonable de detención, más allá del cual, la medida sería ilegítima. El artículo 137° del Código Procesal Penal (modificado por Decreto Ley N° 25824 del 6 de noviembre de 1992), es una expresión de este principio, aunque debe aplicarse con mayor rigurosidad.
- C. Principio de provisionalidad de la detención.**- En caso de desaparecer uno de los presupuestos de la detención, la medida pierde sentido y se convierte en una detención arbitraria⁽⁹²⁾. Ello posibilita que el tribunal revise la legitimidad de la detención a

(88) Así lo reconoce la Comisión Interamericana en el Informe N° 12/96. Argentina, en el párrafo 72: *“El interés del Estado en resolver presuntos casos penales no puede contravenir la restricción razonable de los derechos fundamentales de una persona ... En este sentido, es esencial tomar nota de que la detención preventiva se aplica sólo en casos excepcionales ...”*.

Por su parte el párrafo 84 señala que: *“Se trata de una medida necesariamente excepcional en vista del derecho preminente a la libertad personal y el riesgo que presenta la detención preventiva en lo que se refiere al derecho a la presunción de inocencia y las garantías del debido proceso legal, incluido el derecho a la defensa”*.

(89) Como la detención domiciliaria, otras forma de custodia o control en libertad, la prohibición de salida del país, pago de una caución, etc. Según el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 9° inciso 3); las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad (regla 6.1); y, el Conjunto de Principios para la Protección de todas las Personas sometidas a cualquier forma de Detención o Prisión (principios 36 segundo párrafo y 39).

(90) Que se relaciona directamente con la exigencia de un plazo razonable del juzgamiento. La Comisión Interamericana indica que de otro modo el Estado estaría asumiendo que juzga a personas culpables y por ello es irrelevante el tiempo utilizado para probar su culpabilidad. Informe N° 12/96, párrafo 78.

(91) MAIER, Op. cit., pág. 528.

(92) Principio reconocido en instrumentos internacionales como las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad (regla 6.1) y el Conjunto de Principios para la Protección de todas las Personas sometidas a cualquier forma de Detención o Prisión (principio 39).

pedido del detenido. Tal es el caso de la libertad provisional prevista en el artículo 182° del Código Procesal Penal.

3.2 Beneficios penitenciarios

El uso de beneficios penitenciarios para acortar períodos de permanencia en un establecimiento penal ha resultado siempre un gran atractivo para el interno. Sin embargo, pese a la suposición generalizada, el número de internos que pueden acceder a los beneficios es realmente reducido. Así, no gozan de los beneficios extramuros⁽⁹³⁾, el alto porcentaje de presos sin condena (62.84%) y muchos de los internos vinculados a delitos de alta incidencia en la población penal, como los patrimoniales (37.46%), tráfico ilícito de drogas (25.54%), terrorismo y traición a la Patria (11.96%), etc. Es decir, del 37.16% de sentenciados que en abstracto podrían acceder a un beneficio, se debe reducir aquellos condenados por delitos que tienen prohibido o limitado los beneficios, con lo cual el universo de internos aptos para su acceso es realmente reducido. Con todo, junto a la necesidad ya expresada de reponer beneficios penitenciarios para todos los delitos sin excepción, nos parece importante fortalecer su aplicación⁽⁹⁴⁾.

Desde nuestra perspectiva, la prohibición o limitación de beneficios penitenciarios, no sólo afecta la finalidad atribuida al sistema de ejecución penal en el inciso 22 del artículo 139° de la Constitución Política del Estado, sino además resulta contraproducente para la seguridad de un penal, pues muchos internos condenados a penas elevadas sin posibilidad de acceder a un beneficio penitenciario, pierden interés de vivir observando las normas internas del penal y son propensos a realizar actos de alteración del orden, pues como señalan, *"no tienen nada que perder"*. Creemos que bajo cualquier circunstancia la posibilidad de acceder a un beneficio penitenciario, constituye un importante estímulo para el interno. Por ello, estimamos conveniente reponer los beneficios penitenciarios para todos los delitos sin excepción, pudiendo establecerse diferencias según la gravedad o el tipo de delito cometido.

(93) Como la semi libertad y la liberación condicional.

(94) Para una visión de la problemática de los beneficios penitenciarios, ver PEDRAZA SIERRA, Wilfredo: Op.cit., 1998, pág. 51 y ss.

3.3 Facultad de la Corte Suprema para reformar las sentencias impugnadas

La doble instancia es un principio de la función jurisdiccional, del cual se desprende el derecho de la persona a impugnar una decisión judicial que considera afecta sus intereses. La Constitución Política del Estado (artículo 139° inciso 14°) y otros instrumentos internacionales, señalan que el fallo condenatorio y la pena pueden ser sometidos a un tribunal superior.

A través de un recurso impugnatorio el procesado busca modificar una decisión jurisdiccional desfavorable, de manera que el tribunal superior emita nueva decisión que lo favorezca.

Tal como la mejor doctrina lo reconoce, el tribunal superior en esta materia debería tener algunas limitaciones: en primer lugar, sólo debería conocer sobre las cuestiones promovidas en el recurso y no pronunciarse de oficio sobre aquellos procesados no recurrentes, salvo que la nueva decisión lo favorezca. De otro lado, no debería realizar una reforma peyorativa de la sentencia, pues un recurso impugnatorio tiene el propósito de mejorar la situación procesal de quien recurre; por ello, la forma como se resuelve el recurso nunca debería perjudicarlo más que la propia sentencia cuestionada. Obviamente, esta limitación no rige para los casos en los que el Ministerio Público fue quien impugnó la sentencia.

El Código de Procedimientos Penales en su artículo 292° inciso 1°, establece que procede el recurso de nulidad contra las sentencias emitidas en los procesos ordinarios, siendo la Corte Suprema la llamada a resolverlo. Está facultada a modificar la pena de uno o más condenados, cuando se haya aplicado al delito una que no le corresponde por su naturaleza o por las circunstancias de su comisión (artículo 300°). Es claro que esta facultad puede ser ejercida cuando el Ministerio Público interpone el recurso impugnatorio; sin embargo, resulta controversial las opciones que tienen para resolver cuando es el sentenciado quien impugna, buscando mejorar su situación o cuando expresando su consentimiento, se eleva el expediente por acción de uno de sus coacusados.

Ha sido el Pleno Jurisdiccional de la Corte Suprema de 1995, que interpretando extensivamente el artículo 300° del Código de

Procedimientos Penales, ha considerado que es posible agravar la pena de un sentenciado aún cuando sea él quien interpuso el recurso de nulidad, buscando mejorar su situación e incluso que pueden agravar la pena de aquellos que expresaron su consentimiento con los extremos de la sentencia y que por ello no la impugnaron.

Esta interpretación afecta aspectos básicos del proceso penal, pues limita el derecho de defensa. En el esquema actual del proceso, es posible que el recurso se resuelva sin que se pueda argumentar contra aspectos que lo perjudiquen, porque no existe posibilidad de debate en esa instancia. De otro lado, es evidente que si el Ministerio Público no apela la sentencia es que se encuentra conforme con la pena, y siendo el titular de la acción penal, creemos que la Corte Suprema no puede asumir de facto su labor. Finalmente, si el sentenciado recurre ante la instancia superior alegando inocencia o solicitando disminución de la pena, la Corte no debería condenar o incrementar la pena, porque no es ese el propósito de la impugnación. Por extensión, estas limitaciones se deberían aplicar a las salas penales de la cortes superiores, que conocen los recursos de apelación en los procesos sumarios.

Por las razones antes señaladas y porque la reforma peyorativa de la sentencia ha sido en el último año una fuente permanente de malestar entre los internos, estimamos necesario precisar las facultades de la Corte Suprema y las cortes superiores en los términos sugeridos.

TERCERA PARTE

Algunas intervenciones defensoriales

CAPITULO VII

Atención de Casos

El Programa de Asuntos Penales y Penitenciarios -como todas las áreas de la Defensoría del Pueblo- participa en la atención de quejas, petitorios, consultas y realiza intervenciones de oficio, con la finalidad de proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos. En este caso concreto, de las personas privadas de libertad.

En términos generales, una petición cualquiera fuera su naturaleza puede ser formulada directamente por el interno, sus familiares, terceros interesados o cualquier institución pública o privada. La acción defensorial podrá ser entonces una respuesta al pedido del interesado o a una intervención de oficio. En este último caso, atendiendo a situaciones planteadas o difundidas por medios de comunicación social o los conocidos durante nuestra labor de supervisión de los establecimientos penitenciarios del país.

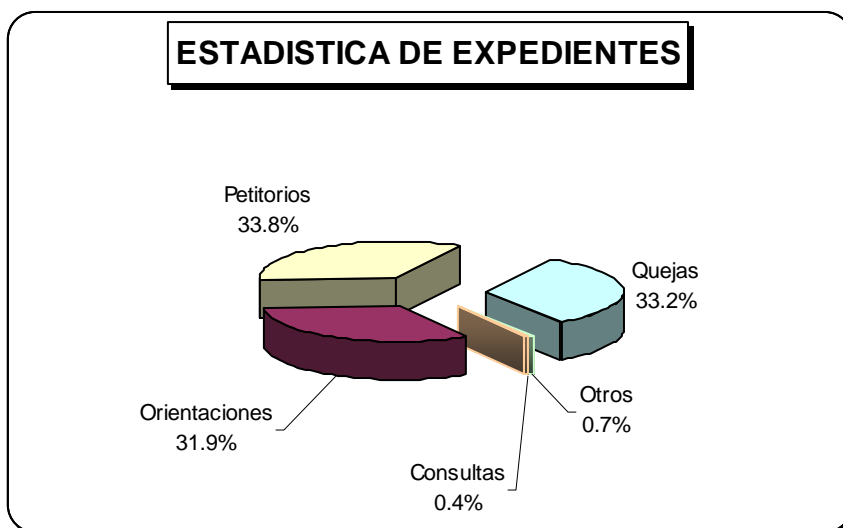
La Defensoría del Pueblo no exige formalidad alguna para recepcionar una queja. De hecho, no se requiere firma de letrado ni que sea formulado por escrito. Si bien, generalmente se presentan a manuscrito, las quejas verbales son también cotidianas y se reciben directamente en los establecimientos penitenciarios o a través del teléfono.

1. Atención al público

EXPEDIENTES INGRESADOS

(Al 30 de junio de 2000)

AREAS DE TRABAJO	NUMERO	PORCENTAJE
Consultas	4	0.4%
Orientaciones	322	31.9%
Petitorios	341	33.8%
Quejas	335	33.2%
Otros	7	0.7%
Total	1009	100 %



Como se puede observar en el cuadro que antecede, el Programa de Asuntos Penales y Penitenciarios, había recibido 1,009 solicitudes de atención al 30 de junio de 2000. De ellas, 341 (33.8%) se calificaron como peticiones; es decir, documentos en los que el recurrente no denunciaba la vulneración de derecho alguno, sino que solicitaba nuestra intervención ante las autoridades a fin de lograr la atención de un determinado servicio o el acceso a información.

335 expedientes (33.2%) fueron calificadas como quejas en sentido estricto; es decir, denuncias presentadas por los internos o sus familiares respecto a presuntas vulneraciones de sus derechos. Las quejas fueron formuladas contra funcionarios de las instituciones estatales involucradas en el sistema de justicia penal o de ejecución penal como el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú y el Instituto Nacional Penitenciario.

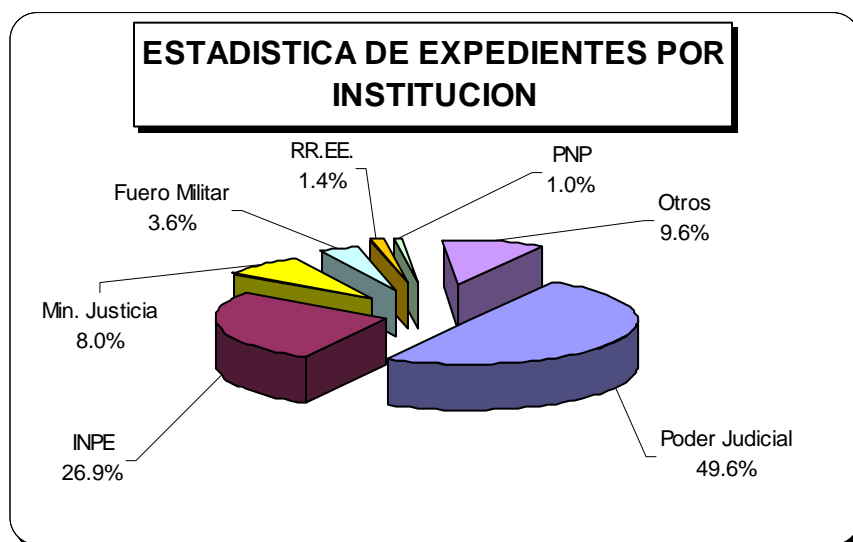
Luego, tenemos las solicitudes que fueron calificadas como casos de orientación, que son aquellas en las que los recurrentes formularon petitorios que no se podían atender desde la Defensoría del Pueblo, por cuanto salían del marco de nuestras atribuciones. En este caso, nuestra actividad se circunscribió a brindar una amplia explicación al solicitante sobre las posibles acciones que podría realizar para cautelar sus derechos ante la autoridad que corresponda. Las orientaciones fueron 322, que representaron el 31.9% de las solicitudes.

Finalmente, las consultas que formularon internos o instituciones sobre aspectos relacionados con el sistema penal, que en este período fueron 4 (0.4%).

2. Instituciones quejadas y recurridas

INSTITUCIONES QUEJADAS Y RECURRIDAS (Al 30 junio de 1999)

Instituciones Quejadas y Recurridas	Numero	Porcentaje
1. Poder Judicial	500	49.6%
2. Instituto Nacional Penitenciario	271	26.9%
3. Ministerio de Justicia	81	8.0%
4. Fuero Privativa Militar	36	3.6%
5. Ministerio de RR.EE. (Dirección de Protección al ciudadano)	14	1.4%
6. Policía Nacional del Perú	10	1.0%
7. Otros	97	9.6%
TOTAL	414	100%



El Poder Judicial es la institución estatal contra la cual los internos han formulado el mayor número de quejas con el 49.6% (500 casos), lo que indica que una de las principales preocupaciones de las personas privadas de libertad es la determinación de su situación jurídica.

Dentro de esta institución, los juzgados y salas penales especializadas para el juzgamiento del delito de tráfico ilícito de drogas fueron las entidades que registraron el mayor número de quejas, con el 22% del total.

La segunda institución más quejada es el Instituto Nacional Penitenciario con el 26.9% (271 casos) del total.

En tercer lugar, el Ministerio de Justicia con el 8% (81 casos) del total de solicitudes recibidas, básicamente relacionados con los servicios de defensa legal.

En cuarto lugar, el Fuero Privativo Militar con el 3.6% (36 casos) del total, básicamente en asuntos relacionados con la ampliación de su competencia para el juzgamiento de civiles.

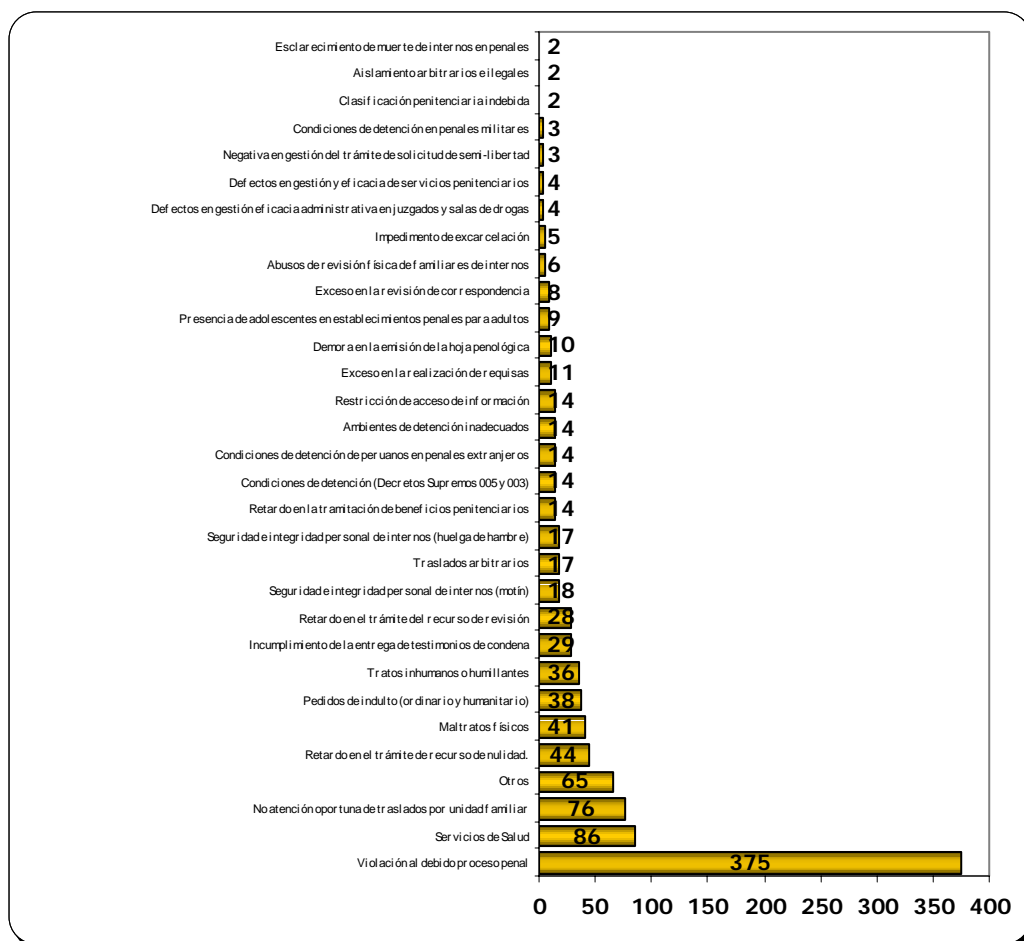
En quinto lugar, la Policía Nacional del Perú con el 1.0% (10 casos). Luego el Ministerio de Relaciones Exteriores (Dirección de Apoyo al ciudadano) con 1.4% (14 casos) y Finalmente, el rubro denominado "otros" con el 9.6% (97 casos), en temas variados como por ejemplo la Comisión Ad-Hoc, Cruz Roja Internacional, organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, entre otros.

3. Tipología de las quejas

TIPOLOGIA DE LAS QUEJAS POR HECHO VIOLATORIO (Al 30 de setiembre de 1999)

	Hecho Violatorio	Numero	Porcentaje
1.	Violación al debido proceso penal (Dilación indebida, violación al derecho de defensa, indebida aplicación de la ley, violación del derecho al juez natural, aplicación inadecuada del tipo penal, acceso a la justicia, violación al principio <i>non bis idem</i> , violación de principio de presunción de inocencia, y detención arbitraria)	375	37.1%
2.	Retardo en el trámite de recurso de nulidad.	44	4.36%
3.	No atención oportuna de traslados por unidad familiar	76	7.53%
4.	Servicios de Salud	86	8.52%

5.	Retardo en la tramitación de beneficios penitenciarios	14	1.38%
6.	Tratos inhumanos o humillantes	36	3.56%
7.	Incumplimiento de la entrega de testimonios de condena	29	2.87%
8.	Demora en la emisión de la hoja penológica	10	0.99%
9.	Impedimento de excarcelación	5	0,49%
10.	Seguridad e integridad personal de internos (motín)	18	1,78%
11.	Condiciones de detención (Decretos Supremos 005 y 003)	14	1,38%
12.	Defectos en gestión eficacia administrativa en juzgados y salas de drogas	4	0,39%
13.	Abusos de revisión física de familiares de internos	6	0,59
14.	Pedidos de indulto (ordinario y humanitario)	38	3,76%
15.	Condiciones de detención de peruanos en penales extranjeros	14	1,38%
16.	Defectos en gestión y eficacia de servicios penitenciarios	4	0,39%
17.	Retardo en el trámite del recurso de revisión	28	2,77%
18.	Negativa en gestión del trámite de solicitud de semi-libertad	3	0,29%
19.	Ambientes de detención inadecuados	14	1,38%
20.	Maltratos físicos	41	4,06%
21.	Clasificación penitenciaria indebida	2	0.19%
22.	Presencia de adolescentes en establecimientos penales para adultos	9	0,89%
23.	Aislamiento arbitrarios e ilegales	2	0,19%
24.	Traslados arbitrarios	17	1,68%
25.	Seguridad e integridad personal de internos (huelga de hambre)	17	1,68%
26.	Exceso en la realización de requisas	11	1,09%
27.	Exceso en la revisión de correspondencia	8	0,79%
28.	Restricción de acceso de información	14	1,38%
29.	Condiciones de detención en penales militares	3	0,29%
30.	Esclarecimiento de muerte de internos en penales	2	0.19%
31.	Otros	65	6.44%
	TOTAL	1009	100.00%



Como se puede observar, los aspectos relacionados con el proceso penal y en particular con la aplicación de los principios del debido proceso, representan el mayor número de preocupaciones de los internos. Los hechos violatorios mencionados entre los puntos 1 al 9 del cuadro anterior, que representan el 60.5% del total (180 casos) así lo demuestran. Los principales temas están relacionados con la violación al derecho de defensa con el 17.1%, dilación indebida del proceso con el 16.5%, aplicación indebida de la ley penal 8.1%, violación del derecho a ser juzgado por un juez competente 7.1 %, entre otros.

Los puntos 10 al 21, están referidos a temas penitenciarios y representan al 30.5% del total. En este segmento, sobresalen temas como la no atención oportuna de traslados por unidad familiar con el 5.4%; ausencia de servicio de salud con el 4.7%; presencia de adolescentes en establecimientos penales para adultos con el 4.4%; tratos inhumanos o

humillantes 4.3%; retardo en la tramitación de beneficios penitenciarios con el 3.4%; detención arbitraria 2.7%; incumplimiento de la entrega de testimonios de condena con el 2.7%; y, demora en la emisión de la hoja penalógica con el 2.4%, etc.

4. Comentarios a los hechos violatorios de mayor incidencia

4.1 Vulneración al debido proceso

Por las cifras referidas anteriormente, es evidente que la población penal recurre a la Defensoría del Pueblo para plantear problemas relacionados con la administración de la justicia penal. Tal situación puede explicarse por varias razones. En primer lugar, por la actuación jurisdiccional, relacionada con el juzgamiento de internos en un plazo razonable (62.84% de procesados), por el uso exagerado de la detención preventiva, por la inadecuada aplicación de la ley penal y la violación al principio de no ser juzgado dos veces por la misma causa.

En segundo lugar, por los efectos de la política criminal vigente, básicamente en los aspectos relacionados con la sobrecriminalización, inicios de procesos con mandato de detención obligatoria, ampliación de la jurisdicción militar y la prohibición de beneficios penitenciarios.

La aplicación de la legislación penal de emergencia y los sistemas de juzgamiento a través de salas corporativas de competencia nacional, han sido fuentes permanentes de quejas, por la afectación al derecho de defensa, la violación de la presunción de inocencia y a ser juzgado por un juez competente.

4.2 Condiciones carcelarias de detención

La mayoría de las quejas formuladas contra la administración penitenciaria, están relacionadas con las deficiencias en la prestación de los servicios penitenciarios, especialmente en temas de salud por la falta de medicamentos o de atención médica especializada.

Las condiciones de detención y la inadecuada infraestructura penitenciaria han generado también múltiples quejas. Si bien en muchos casos ha existido disposición de resolver algunos de los

problemas planteados, la falta de recursos ha constituido uno de los principales obstáculos para implementar soluciones definitivas.

4.3 La política de traslados

Una importante fuente de quejas son los traslados del interno de un penal a otro. Su desplazamiento a un penal alejado de su lugar de origen, no sólo implica la pérdida del respaldo familiar (afectivo y material), sino la afectación del derecho a la defensa, pues habitualmente el interno pierde contacto con su abogado.

Si bien se aduce repetidamente que los traslados obedecen motivos de seguridad, es frecuente que en muchos casos no exista una explicación razonable del fundamento de seguridad, por lo que en tales hipótesis se trataría de traslados arbitrarios. Por ello, las quejas por denegatoria de traslados por unidad familiar o por salud son significativas. Los cambios de actitud de la autoridad penitenciaria observados hasta hoy en esta materia han sido insuficientes.

4.4 Retardo en la concesión de beneficios penitenciarios

Otro tema recurrente es la dilación en la concesión de los beneficios penitenciarios. Las demoras en la formación del expediente en el área administrativa, se debe principalmente a la tardía expedición de la hoja penológica. En el plano jurisdiccional, al incumplimiento de los magistrados de la entrega de los testimonios de condena luego de emitir una sentencia.

En esta materia -debemos reconocerlo- la respuesta de la administración penitenciaria, especialmente de la Dirección Nacional de Registro Penitenciario ha sido positiva. Lamentablemente, la carga de trabajo, el sistema mecanizado de procesamiento de información y la inexistencia de medios informáticos hacen difícil su tarea.

4.5 Afectación a la integridad del interno

Se han denunciado 4 casos de tortura y 13 por tratos inhumanos o humillantes. Estas cifras son suficientes para llamar la atención sobre esta problemática. Si bien, en muchos penales la relación autoridad-interno ha mejorado substantivamente, es evidente que la información real sobre maltratos en las prisiones constituye una cifra negra. La población penal generalmente tiene temor de formular

denuncias de esa naturaleza por las represalias del que podrían ser objeto luego.

En el último año, el caso más notorio ha sido la golpiza y posterior muerte del interno Pedro Pascual Espinoza Lome en el penal de Yanamilla de Ayacucho, por cuyo hecho se ha condenado a un agente penitenciario a 12 años de pena privativa de libertad por delito de tortura. Si bien, en primera instancia las autoridades penitenciarias tuvieron un claro propósito de encubrir tal hecho, pretendiendo incluso limitar la acción defensorial durante su investigación no jurisdiccional posterior se observó un cambio de actitud.

CONCLUSIONES

SOBRE LA REALIDAD DEL SISTEMA PENITENCIARIO

1. **Población Penitenciaria.**- Al 30 de junio de 1999, la población penal ascendía a 27,428 internos, distribuida en 86 establecimientos penitenciarios de todo el país. La Policía Nacional tiene bajo su administración interna y externa 68 establecimientos penales y el Instituto Nacional Penitenciario 18.

La Dirección Regional Lima del Instituto Nacional Penitenciario tiene el más alto índice de internos con 13,892, que representan el 50.65% del total de la población penal nacional. El penal de Lurigancho, es el establecimiento con mayor población en el país, pues alberga a 6,633 internos, es decir, el 47.75% de la población penal de la Región Lima y el 24.18% de la población penal nacional.

La supervisión de establecimientos penales materia del presente informe ha comprendido a 42 establecimientos, que en conjunto albergaban al 80.93% de la población penal nacional, esto es, a 22,197 internos.

2. **Situación jurídica.**- El 62.84% de la población penal nacional tiene la condición jurídica de procesado y el 37.16% la de sentenciado. La Dirección Regional Lima del INPE tiene el 73.35% de presos sin condena (10,190 internos) y el 26.65% (3,702 internos) de sentenciados. En el otro extremo, la Dirección Regional Altiplano Puno tiene el 70.27% (695 internos) de sentenciados y el 29.73% de procesados (294 internos). Estas cifras proporcionadas por la administración penitenciaria, no han sido contrastadas porque no existe información disponible emitida desde otras instituciones.

El alto número de presos sin condena no es responsabilidad de la administración penitenciaria. Responde al inadecuado funcionamiento de nuestro sistema de administración de justicia y a la política criminal vigente en nuestro país.

3. **Población penal por tipo de delito.**- Los delitos contra el patrimonio representan el 37.46% de la población penal nacional (10,275). Los delitos de tráfico ilícito de drogas el 24.07% (6,602), los delitos de

terrorismo y traición a la Patria 10.67% (2,927) y los delitos contra la vida el cuerpo y la salud el 10.21% (2,799). Otros delitos el 17.59% (4,825). Las cuatro principales familias de delitos representan el 82.41% de incidencia delictiva en los internos de nuestro país.

4. **Población penal por sexo.-** La población penal masculina constituye el 91.42% de los internos del país y la femenina el 8.58%. Si bien la incidencia delictiva femenina es reducida con relación al género masculino, su crecimiento en las dos últimas décadas ha sido notable. En 1978 representaban al 3.66%, en 1988 el 6.5% y a junio de 1999 ascendían ya al 8.58%.

El 60.26% de la población penal femenina a nivel nacional se encontraba procesada o condenada por delito de tráfico ilícito de drogas, particularmente en la modalidad de micro comercialización. El 16.89% por delitos de terrorismo y traición a la Patria y el 10.84% por otros delitos.

5. **Población penal por edad.-** La población penal nacional está compuesta básicamente por jóvenes. El segmento más criminalizado se encuentra en el grupo etario integrado por personas que tienen entre 18 a 29 años de edad, que representan al 49.17% del total de los internos.
6. **Población penal por tiempo de reclusión.-** El 48.51% (13,304) de internos tienen como promedio de permanencia en un establecimiento penal de 2 días a un año; el 26.98% (7,401) entre uno a dos años; 10% (2,743) entre dos a tres años; 5.33% (1,464) entre tres a cinco años; el 1.75% (482) entre cinco a diez años; el 1.07% (294) entre diez a treinta años; el 0.05% (13) entre treinta a más años; y, el 6.30% (1,727) no especifican. Esto significa que el 85.49% de los internos tiene un promedio de permanencia entre dos días a tres años, lo que implica que en nuestro país los penales son básicamente centros de detención transitorios.

Tal situación tiene diversas explicaciones, como el uso inadecuado de las facultades jurisdiccionales para ordenar la detención a partir de una errada interpretación de los supuestos establecidos en el artículo 135° del Código Procesal Penal; el incremento de la dosimetría penal en los principales delitos que ha limitado las posibilidades de dictar mandatos de comparecencia, condena condicional o la aplicación de penas que no sean privativas de libertad; y, finalmente, la existencia en ciertos delitos de la obligación legal del inicio de la instrucción con mandato de

detención. En cualquier caso, existe la necesidad de revisar los criterios que se vienen aplicando para dictar la detención.

7. **Población penal por tiempo de sentencia.-** A junio de 1999, la administración penitenciaria había registrado a 10,192 internos en calidad de sentenciados. De ellos, el 26.34% habían sido condenados entre cinco a diez años de pena privativa de libertad, el 17.54% entre diez a quince años, el 12.21% entre tres a cinco años, el 10.69% entre quince a veinte años, 9.96% entre uno a tres años, 5.76% entre dos días a un año, 4.44% entre 20 a 25 años, 3.67% a cadena perpetua, 0.55% entre 25 a 35 años y el 8.84% no especifica.

Como se puede observar, existe un 15.62% de internos condenados entre dos días a tres años de pena privativa de libertad efectiva; y, en el otro extremo, un 8.66% de internos sentenciados entre veinte años a cadena perpetua. En el primer caso, se trata de la aplicación de penas privativas de libertad efectivas de corta duración, que a juzgar por la pena impuesta podemos suponer que los sentenciados estuvieron involucrados en delitos de mediana o mínima trascendencia, por lo que, podrían haber sido objeto de otro tipo de penas o de medidas alternativas a la prisión. En el segundo caso, se trata de los primeros resultados de la política de sobrecriminalización.

8. **Infraestructura.-** En la construcción de los establecimientos penitenciarios de la presente década se ha priorizado el criterio de seguridad (celdas unipersonales y bipersonales de reducidos espacios, ingreso limitado de ventilación y luz natural) en perjuicio de otros aspectos relacionados con el tratamiento como las áreas destinadas al trabajo y la educación.

De los 42 penales supervisados por la Defensoría del Pueblo, se estimó que 22 (50%) se encontraban en mal estado, 14 (32%) en regular estado y sólo 8 (18%) en buenas condiciones. La evaluación de la administración penitenciaria sobre los 86 penales a nivel nacional, ha estimado que 43 (50%) se encuentran en mal estado, 25 (29.07%) en regular estado y 18 (20.93%) en buen estado. Ello significa que pese a la construcción de nuevos penales, en términos globales la infraestructura penitenciaria continúa siendo crítica.

9. **Capacidad de albergue.-** Los 86 establecimientos penales del país tienen una capacidad de albergue de 19,974 personas. Teniendo en consideración que la población penal a junio de 1999 ascendía a 27,428

internos, es evidente que existe una sobrepoblación promedio nacional del 37.32%.

La Dirección Regional Lima presenta el índice más alto de sobrepoblación con el 82.74%. Es particularmente preocupante la situación del penal de Lurigancho que tiene una sobrepoblación del 265.45%, pues teniendo una capacidad de albergue para 1,500 internos, tiene una población real de 6,633 personas. Igualmente, el penal de Mujeres de Chorrillos Comunes que fue construido para 250 internas, tiene una población de 854 personas lo que significa un exceso del 241.6%.

Los 42 establecimientos penales que fueron comprendidos en la supervisión defensorial, presentaban un índice de sobrepoblación promedio del 59.28%.

10. **Alimentación.-** El presupuesto diario por interno es de S/. 2.50, a excepción del penal de Challapalca que tiene asignado S/. 3.50 debido a las difíciles condiciones de vida a causa de su distante ubicación y el clima. En general, se puede afirmar que el presupuesto resulta insuficiente para una adecuada alimentación de los internos. En algunos casos, el déficit calorífico es cubierto por el aporte de ellos mismos, sus familiares o instituciones humanitarias. La orientación nutricional en los establecimientos penitenciarios es limitada, pues de los 42 establecimientos supervisados, sólo 14 contaban con este servicio.

La adecuada administración y el manejo responsable del presupuesto para alimentación, constituyen dos ingredientes fundamentales para garantizar un mínimo de calidad del servicio. Es notable la mejora de la alimentación en los penales donde los internos participan en la programación, elaboración y distribución de los alimentos.

11. **Servicio legal.-** Para los 86 establecimientos penitenciarios existentes, la administración penitenciaria cuenta sólo con 55 abogados. La supervisión nos ha permitido constatar que la mayoría de la población penal se encuentra en estado de indefensión legal. De hecho, los requerimientos de defensa o de asesoría legal es tal, que no se puede cubrir con los abogados de la administración penitenciaria ni con los que proporciona el sistema de defensa legal gratuita del Ministerio de Justicia.
12. **Servicio de salud.-** La administración penitenciaria cuenta con 44 médicos y 80 enfermeros. 44 penales carecen de todo servicio de salud, 20 cuentan con médicos y enfermeros, 18 sólo con enfermeros y 4 sólo con médicos. Las enfermedades de mayor incidencia son las digestivas,

bronquiales, venéreas y pulmonares. No existe información de infectados por VIH a nivel nacional, salvo la referencia de 92 casos confirmados en el penal de Lurigancho de Lima.

Existe un generalizado desabastecimiento de medicamentos en todo el país. Esta carencia es suplida en alguna medida por donaciones que realiza el Comité Internacional de la Cruz Roja, las instituciones eclesiásticas, las organizaciones no gubernamentales o por los propios internos y sus familiares.

Los ambientes destinados a la prestación del servicio de salud, se encuentran en su mayoría en malas condiciones y no cuentan con los instrumentos suficientes para brindar una adecuada atención.

13. **Servicio social.-** Para los 86 establecimientos penitenciarios en el ámbito nacional, la administración penitenciaria sólo cuenta con 81 asistentes sociales. Si bien el área social es el servicio más legitimado desde la perspectiva de los internos, el número de profesionales no hace posible una adecuada atención a los requerimientos de la población penitenciaria, pese al reconocido esfuerzo de gran parte de este personal.
14. **Servicio psicológico.-** Para la atención de este servicio, el Instituto Nacional Penitenciario cuenta con 84 profesionales en todo el país. La carencia de un mayor número de profesionales, limita este servicio básicamente a la atención de las solicitudes de beneficios penitenciarios y a algunas terapias grupales.

La mayoría de estos profesionales no cuentan con material, ambientes especiales o instrumentos clínicos adecuados, por lo que en muchos casos se limitan a repartir la hoja de protocolo restringiendo así las potencialidades del servicio.

La demanda de este servicio es mayor en los internos clasificados en los regímenes especiales, pues están sujetos a largos períodos de encierro y poco contacto social.

15. **Servicio religioso.-** El culto religioso es una actividad importante en los establecimientos penales, pues mitiga los efectos de la prisión. La presencia de la iglesia católica, evangélica y otras instituciones religiosas es permanente, no sólo en labores carismáticas sino también en la ejecución de acciones asistenciales.

La actividad de los agentes pastorales tiene mucha importancia, no sólo porque trabajan directamente con el interno, sino porque contribuyen de manera eficaz a mantener la tranquilidad de un establecimiento penal.

En los penales de máxima seguridad, particularmente en el de Chorrillos de Mujeres de Lima y en Yanamayo de Puno, existen algunas restricciones para el desarrollo del trabajo pastoral.

16. **El trabajo y la educación penitenciaria.-** El 49.54% de la población penitenciaria realiza alguna actividad laboral. Los trabajos en tejido, arte, carpintería y juguetería son las principales ocupaciones de los internos.

De los 22,197 internos comprendidos en la supervisión, el 52.16% (11,578) desarrolla alguna actividad laboral. De ellos, el 63.34% redime pena por trabajo y el 36.66% lo hace sin fines de redención. La actividad educativa ocupa a 6,043 internos supervisados, de los cuales el 81.43% lo hace con la finalidad de redimir la pena y el 18.57% por otra opción personal.

En nuestros establecimientos penales, los ambientes dedicados para el trabajo y la educación son limitados y no están adecuadamente implementados.

17. **Régimen de visitas.-** El sistema de visitas para una persona privada de libertad tiene directa relación con el régimen penitenciario en el que se encuentra. La alta movilidad de internos y el cumplimiento de sentencias en establecimientos penales distintos a su lugar de origen, dificultan un adecuado sistema de visitas, especialmente a los internos sujetos a regímenes especiales, quienes teniendo derecho a una visita semanal, en la práctica por razones económicas, reciben a sus familiares sólo una o dos veces al año.

Las visitas a través de locutorios impiden un adecuado fortalecimiento del vínculo familiar del interno. Los excesos en el control de productos que los familiares llevan al interno, constituyen fuente de permanente conflicto. También las revisiones corporales a las visitas de sexo femenino, especialmente las de tipo vaginal que se practica en personas adultas e incluso en niñas. Este tipo de actos resulta arbitrario cuando se efectúa como mecanismo de control rutinario, pues deben estar limitados exclusivamente para casos en los que exista fundada sospecha de comportamiento ilícito y practicados por personal médico con presencia del Ministerio Público.

18. **Visita íntima.-** La mayoría de penales no cuentan con ambientes especiales para la visita íntima. En otros casos, como el penal Miguel Castro Castro de Lima, el venustero se utiliza como celdas transitorias. Durante 1998 y 1999, se ha puesto en funcionamiento ambientes para visita íntima en algunos penales de mujeres (adonisterios), como en el de Máxima Seguridad de Chorrillos de Lima y Socabaya de Mujeres de Arequipa. Si bien, alcanza a pocas internas, constituye un avance importante.
19. **La política de traslados.-** Los traslados dispuestos por la autoridad penitenciaria pueden responder a criterios de seguridad, medida disciplinaria, descongestión o juzgamiento. Un traslado a pedido del interno puede ser por unidad familiar o por salud. En los últimos años, el traslado de internos de un penal a otro ha sido permanente. En unos casos, como estrategia de la lucha contra la subversión, en otros como mecanismo de redistribución de la población penal a los nuevos penales o más frecuentemente como medida disciplinaria.

Una política indiscriminada de traslados afecta al binomio interno-familia, particularmente cuando se efectúan intempestivamente. Para el interno, un traslado no sólo significa un cambio físico de penal, sino la pérdida o deterioro de sus relaciones familiares, el apoyo que en alimentos, medicamentos o materiales de trabajo venía recibiendo, por lo que su aplicación debe ser limitado a casos exclusivamente necesarios.

20. **Estado de la situación penitenciaria.-** Si bien en los últimos años se ha restituido el principio de autoridad en los penales y se ha mejorado la infraestructura penitenciaria, la prestación de los servicios básicos son deficitarios. Al crecimiento sistemático de la población penal, no se ha acompañado la correspondiente ampliación de los servicios básicos, por lo que en la actualidad se encuentran desbordados.

SOBRE LA POLITICA CRIMINAL Y EL SISTEMA PENITENCIARIO

21. La Constitución Política del Estado y el Código de Ejecución Penal han establecido el principio de que el régimen penitenciario tiene por objeto la resocialización del interno. Sin embargo, el constante incremento de las penas para los delitos de más alta incidencia, la legislación antiterrorista y de Seguridad Nacional, hacen suponer que ahora la pena tiene más bien una finalidad retributiva y de inocuización del interno.
22. La política penal de emergencia está presente en muchos ámbitos del derecho penal y procesal penal, habiendo irrumpido también en la

ejecución penitenciaria. La cultura de la emergencia o de la excepcionalidad que se concibió como un mecanismo para combatir a los movimientos terroristas se ha venido extendiendo paulatinamente a otros delitos.

En lo sustantivo, la política criminal de emergencia se expresa en tipos penales abiertos, en la sobrecriminalización de delitos de mediana y mayor gravedad y en el uso de mecanismos del derecho premial. En lo procesal, en el incremento de la capacidad de actuación de la Policía y por consiguiente en el mayor valor de prueba de los resultados de su investigación, en la ampliación de la detención preventiva y en la eliminación de algunos beneficios procesales. En lo penitenciario, en rigurosas condiciones de detención, vigilancia permanente, aislamiento celular durante el primer año de detención, largas horas de encierro en las celdas, visitas a través de locutorios, limitado acceso a información, penales de máxima seguridad, etc.

La existencia de regímenes especiales particularmente severos y restrictivos de derechos, no son entonces, expresiones aisladas de la política carcelaria. Responden a criterios de una política criminal de emergencia.

23. En nuestro país existen dos regímenes especiales para internos por terrorismo y traición a la patria. Uno, para los reclusos en bases militares regulado por el Decreto Ley N° 24795, Decreto Ley N° 25744 y la Resolución Suprema N° 114-92-JUS, sistema que rige para los internos de la Base Naval del Callao. Otro, para quienes se encuentran en los demás establecimientos penales del país, regulado por el Decreto Supremo N° 005-97-JUS que aprobó el Reglamento de Régimen de Vida y Progresividad del Tratamiento para Internos Procesados y/o Sentenciados por Delito de Terrorismo y Traición a la Patria.
24. El régimen para internos de "Difícil Readaptación", está regulado por el Decreto Supremo N° 003-96-JUS, que expresa la expansión de la política criminal de emergencia para internos comunes, por cuanto prácticamente ha reproducido la legislación antiterrorista sobre la materia.
25. La política criminal de emergencia ha tenido efectos directos en el sistema penitenciario. No sólo por los regímenes especiales antes referidos, sino por el incremento de la población penal y la consiguiente saturación de los principales servicios penitenciarios. Además, los internos condenados a penas privativas de libertad de larga duración, sin acceso a beneficios

penitenciarios o a cadena perpetua, están en crecimiento permanente generando altos niveles de tensión en la población penitenciaria.

26. La permanencia de adolescentes vinculados al delito de terrorismo especial en establecimientos penales de adultos, constituye una violación a la Convención Internacional sobre Derechos del Niño y al principio del interés superior del niño. El Decreto Legislativo N° 895 en su texto primigenio, violentó el sentido tuitivo de una legislación para adolescentes al habilitar la justicia privativa militar para su juzgamiento. Ignora además, la situación de vulnerabilidad en que el adolescente se encuentra en un establecimiento penal de adultos. Finalmente, vulnera también las disposiciones nacionales e internacionales que establecen que la privación de libertad de las personas menores de edad debe ser una medida breve y de último recurso.
27. La creación de jurisdicciones corporativas de competencia nacional, particularmente para el juzgamiento del delito de tráfico ilícito de drogas, afecta diversos principios del debido proceso, como el de juez natural, ser juzgado en tiempo oportuno, limitación al derecho a la defensa y restricción al principio del contradictorio en el proceso penal. Múltiples han sido las quejas de los internos sobre el sistema de juzgamiento de los jueces itinerantes, relacionados con el horario de las audiencias y la valoración de la prueba.
28. Es necesario agotar los esfuerzos para reducir la aplicación de la pena privativa de libertad a través del empleo de otras instituciones que nuestra legislación prevé, como el principio de oportunidad, suspensión de la ejecución de la pena, reserva del fallo condenatorio, exención de la pena, prestación de servicios a la comunidad y la pena de limitación de días libres. Asimismo, el uso limitado de la detención preventiva y la concesión oportuna de beneficios penitenciarios.

Si bien, la sobrecriminalización de los principales delitos limitan el empleo de instituciones que impiden el inicio de la acción penal o la aplicación de medidas alternativas, es evidente que las medidas de detención preventivas y las condenas a pena privativa de libertad de corta duración efectiva mantienen niveles elevados. Ciertamente, la formación del magistrado y su concepción sobre el fin de la pena juega un rol preponderante.

RECOMENDACIONES

1. **RECOMENDAR** a la Comisión de Justicia, Comisión de Derechos Humanos y de Pacificación y Reforma de Códigos del Congreso de la República, de conformidad con el artículo 34° y el inciso a) del artículo 35° del Congreso de la República:
 - a) Revisen las modificaciones introducidas al sistema de penas del Código Penal de 1991, con especial atención a los principios de legalidad, proporcionalidad y humanidad de las penas.
 - b) Eliminen los mecanismos especiales para la investigación y el juzgamiento de los delitos de tráfico ilícito de drogas, terrorismo, traición a la Patria y terrorismo especial.
 - c) Dispongan la puesta en vigencia del Código Procesal Penal.
 - d) Revisen la competencia otorgada a la jurisdicción militar para el juzgamiento de civiles.
 - e) Restituyan las facultades del juez de iniciar un proceso penal con mandato de detención o de comparecencia, así como conceder libertad provisional sobre la base de una evaluación del material probatorio en los delitos de terrorismo y traición a la Patria, terrorismo especial y los denominados delitos agravados previstos en el Decreto Legislativo N° 896.
 - f) Restituyan los beneficios penitenciarios previstos en el artículo 42° del Código de Ejecución Penal para todos los delitos sin excepción, pudiendo establecerse diferencias según la gravedad o el tipo de delito cometido.
 - g) Restablezcan al juez de ejecución penal a fin de introducir el control judicial en la ejecución de la pena.
 - h) Amplíen los parámetros de aplicación del Principio de Oportunidad previsto en el inciso 2° del artículo 2° del Código Procesal Penal, de manera que pueda aplicarse en delitos cuya pena mínima sea de cuatro años.

- i) Amplíen los parámetros de aplicación de la Reserva del Fallo Condenatorio y de la Exención de Pena reguladas en los artículos del 62° al 67° y 68° del Código Penal, de manera que pueda aplicarse en los delitos sancionados con pena privativa de libertad no mayor de cuatro años.
 - j) Modificar el artículo 300° del Código de Procedimientos Penales y el artículo 8° del Decreto Legislativo N° 124, prohibiéndose la reforma peyorativa de la sentencia condenatoria impugnada en los casos en los que el Ministerio Público no haya interpuesto Recurso de Nulidad o de Apelación respectivamente.
2. **RECOMENDAR** al Ministro de Justicia para que, de conformidad con el artículo 8° del Decreto Ley N° 25993, Ley Orgánica del Sector Justicia:
- a) Revise los lineamientos de la política criminal vigente a fin de que éstos se adecuen a las garantías previstas en la Constitución Política del Estado y en los diversos instrumentos internacionales.
 - b) Reoriente la política penitenciaria para lograr la resocialización del interno, teniendo como principal fundamento el respeto de sus derechos fundamentales. En tal contexto, abandone la concepción de la pena como simple castigo, así como los regímenes de ejecución basados sólo en criterios de seguridad, otorgando un tratamiento diferenciado entre procesados y sentenciados, no aplicando a los primeros restricciones o regímenes que corresponden sólo a las personas condenadas. Además, en el caso de los sentenciados limite únicamente los derechos expresamente señalados en la sentencia.
 - c) Revise el Decreto Supremo N° 003-96-JUS, Reglamento del Régimen de Vida y Progresividad del Tratamiento para Internos de Difícil Readaptación, Procesados y/o Sentenciados por Delitos Comunes; y, el Decreto Supremo N° 005-97-JUS, Reglamento del Régimen de Vida y Progresividad del Tratamiento para Internos de Procesados y/o Sentenciados por Delitos de Terrorismo y Traición a la Patria; a efectos de modificar su contenido y adecuarlo a las normas constitucionales que reconocen el derecho de las personas privadas de libertad a ocupar establecimientos adecuados y al principio de que el régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, la rehabilitación y la reincorporación del penado a la sociedad de conformidad al inciso 21° y 22° del artículo 139° de la Constitución Política del Estado.

La modificación del Decreto Supremo N° 003-96-JUS y Decreto Supremo N° 005-97-JUS, se podría efectuar considerando:

- La eliminación de la etapa de aislamiento celular continuo durante el primer año.
 - El acceso al patio de cuatro horas mínimo en las etapas de máxima seguridad y mediana seguridad especial.
 - La ampliación del horario de visita hasta tres horas mínimo en la etapa de máxima seguridad, la eliminación del sistema de locutorios para las visitas, así como autorizar la visita de familiares dentro del cuarto grado de consanguinidad y tercero de afinidad.
 - La concesión del beneficio de la visita íntima para todas las etapas sin excepción.
 - El derecho de los internos a un mayor acceso a los medios de información como diarios, revistas, radio y televisión.
 - La progresividad en el tratamiento penitenciario para los internos que se encuentren en la etapa de mínima seguridad especial, de manera que accedan al régimen interno ordinario.
 - La implementación de programas de educación directa o a distancia de nivel escolar, técnico o universitario.
- d) Realice las acciones necesarias a efectos de ampliar el número de abogados del Sistema Nacional de Defensa de Oficio del Ministerio de Justicia con el fin de atender la gran demanda de asistencia y de defensa legal de la población penal nacional.
- e) Promueva el uso de los diversos mecanismos para el ejercicio de la gracia presidencial como el indulto, la conmutación de la pena y el derecho de gracia, a través de la Comisión Permanente de Calificación de Indultos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión de Alto Nivel para la Concesión del Derecho de Gracia, a fin de excarcelar a internos cuya permanencia en prisión les signifique una mayor afectación a su situación personal:
- Los enfermos en grave estado
 - Los enfermos psiquiátricos
 - Los mayores de 65 años

- Los condenados a penas privativas de libertad efectiva no mayor de cuatro años
3. **EXHORTAR** al Ministro de Justicia como titular del pliego presupuestal del Sector, conforme al artículo 8° del Decreto Ley N° 25993, Ley Orgánica del Sector Justicia, a solicitar con la urgencia del caso ante el Ministerio de Economía y Finanzas, el incremento del presupuesto asignado a los establecimientos penales del país para mejorar las condiciones de vida de los internos, especialmente aquellas vinculadas a la alimentación y a los servicios de salud.
 4. **EXHORTAR** al Ministro de Justicia como titular del pliego presupuestal del Sector, conforme al artículo 8° del Decreto Ley N° 25993, Ley Orgánica del Sector Justicia, y como encargado de la supervisión del cabal cumplimiento del Servicio Civil de Graduandos SECIGRA DERECHO, conforme lo señala el artículo 6° del Decreto Ley N° 26113, para que realice las gestiones necesarias a fin de elevar el estipendio otorgado a los miembros del SECIGRA DERECHO que efectúan prácticas en los establecimientos penitenciarios del país, con la finalidad de incentivarlos y permitirles cubrir los gastos que demande visitar un establecimiento penal, generalmente ubicado fuera del perímetro urbano de la ciudad.
 5. **INSTAR** al Ministro de Economía y Finanzas para que, de conformidad con el artículo 6° del Decreto Legislativo N° 183, Ley Orgánica del Ministerio de Economía y Finanzas, realice los estudios y adopte las medidas necesarias que permitan, gradualmente y en función de la disponibilidad de recursos fiscales, el incremento del presupuesto destinado a los establecimientos penales del país.
 6. **EXHORTAR** al Ministro de Salud de conformidad con el artículo 2° del Decreto Legislativo N° 584, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, para que dicte las directivas necesarias a fin de que los hospitales del sector público, brinden una adecuada atención a las personas privadas de libertad que son transferidas desde un establecimiento penal a un hospital público en busca de atención especializada o de emergencia. Asimismo, incluya a los internos de los establecimientos penitenciarios de todo el país en las campañas nacionales de salud.
 7. **RECOMENDAR** al Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la República y Presidente de la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial promueva:

- a) La aplicación adecuada del artículo 135° del Código Procesal Penal a fin de que el mandato de detención se restrinja a situaciones necesarias, según criterios de prueba idónea, proporcionalidad y efectivo peligro procesal.
 - b) La aplicación más frecuente de penas alternativas a la privativa de la libertad contempladas en la legislación vigente, tales como la prestación de servicios a la comunidad, limitación de días libres, inhabilitación y la multa, previstos en los artículos 31° al 44° del Código Penal. Igualmente, el uso de figuras jurídicas como la suspensión de la ejecución de la pena, la reserva del fallo condenatorio y la exención de la pena en los casos que la ley lo permita.
 - c) El cumplimiento de la Ley N° 25824 que modifica el artículo 137° del Código Procesal Penal, a fin de que la detención preventiva no dure más de nueve meses en el caso del proceso sumario, ni más de quince meses en el proceso ordinario, debiendo otorgarse la inmediata libertad a los internos sin sentencia que hayan sobrepasado tales límites.
 - d) La evaluación del funcionamiento de los juzgados y salas superiores, encargados de conocer los delitos de tráfico ilícito de drogas, robo agravado y otros delitos en banda, delitos tributarios y terrorismo, así como de la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia especializada en el delito de tráfico ilícito de drogas, a efectos de medir el cumplimiento de los plazos procesales y el respeto a los principios del debido proceso.
 - e) La observancia de las reglas de aplicación temporal de la ley penal y el principio de retroactividad benigna en la concesión de los beneficios penitenciarios, de modo que se otorguen de acuerdo al criterio jurisdiccional a los sentenciados que fueron condenados en períodos en los cuales no existían restricciones.
8. **RECOMENDAR** a la Fiscal de la Nación y Presidenta de la Comisión Ejecutiva del Ministerio Público, promueva una mayor aplicación del principio de oportunidad previsto en el artículo 2° del Código Procesal Penal y garantice las visitas de los fiscales provinciales de turno a los establecimientos penitenciarios como mecanismo de protección de los derechos del interno.
9. **RECOMENDAR** al Presidente del Consejo de Coordinación Judicial, de conformidad con la Ley N° 26623, promueva la conformación de una mesa de trabajo en la que participen representantes del Poder Judicial, del

Ministerio Público, del Instituto Nacional Penitenciario, de la Policía Nacional y de la Defensoría del Pueblo, que tenga por objetivo la búsqueda de mecanismos adecuados para la adopción de medidas necesarias para atender la problemática de las personas privadas de libertad, así como formular recomendaciones destinadas a combatir la criminalidad dentro del marco del respeto irrestricto de los derechos humanos.

10. **RECOMENDAR** al Director General de la Policía Nacional del Perú, conforme al artículo 12° de la Ley N° 27238, Ley Orgánica de la Policía Nacional del Perú, para que en la designación del personal policial que realice funciones penitenciarias, considere su nivel de formación, experiencia de trabajo en cárceles y equilibrio emocional.
11. **RECOMENDAR** al Presidente Ejecutivo del Seguro Social de Salud (ESSALUD), conforme al artículo 8° de la Ley N° 27056, Ley de Creación de ESSALUD, para que:
 - a) Implemente un mecanismo adecuado de atención para las personas privadas de libertad que tengan derecho a la prestación de salud en su condición de asegurados.
 - b) Promueva el acceso de los internos de todo el país a los servicios de ESSALUD en las mismas condiciones de quienes se encuentran en libertad.
12. **RECOMENDAR** al Presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), de conformidad con el artículo 138° del Decreto Legislativo N° 654, Código de Ejecución Penal, y el inciso a) del artículo 9° de la Resolución Ministerial N° 199-98-JUS, Reglamento de Organización y Funciones del INPE, para que:
 - a) En la construcción de establecimientos penales para mujeres, introduzca criterios relacionados con el sexo de la población destinataria, de manera tal que el diseño de un establecimiento penitenciario para mujeres, no sea el mismo que se utiliza para la construcción de uno de varones.
 - b) Evalúe la ampliación de la permanencia de los hijos de las internas en un establecimiento penitenciario hasta los cinco años de edad, así como autorizar una visita semanal de los menores a sus padres privados de libertad.

- c) Coordine las acciones necesarias con las correspondientes instituciones públicas o privadas, a fin de asegurar un complemento alimenticio para la población penal más vulnerable, tales como los enfermos de tuberculosis, las madres lactantes y/o gestantes, los niños, los enfermos del Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida (SIDA) y los internos psiquiátricos, entre otros.
- d) Adopte medidas de emergencia destinadas a superar la grave problemática de salud de los establecimientos penitenciarios del país, fortaleciendo los niveles de coordinación con el Ministerio de Salud, EsSALUD, y otras instituciones públicas y privadas, de manera que amplíe la cobertura del servicio y mejore el abastecimiento de medicamentos.
- e) Implemente medidas de emergencia a fin de reducir el déficit de profesionales existente en los establecimientos penitenciarios, fortaleciendo los canales de coordinación con instituciones del Estado y organizaciones de la sociedad civil, particularmente con los programas del Servicio Civil de Graduandos (SECIGRA) y del Servicio Médico Rural (SERUM) para el servicio legal y de salud, respectivamente.
- e) Implemente ambientes en los establecimientos penales de mujeres destinados a la visita íntima, de manera que el beneficio alcance a un número mayor de internas.
- f) Elabore un nuevo reglamento de ejecución de penas limitativas de derechos que establezca criterios claros de aplicación. En el caso de la prestación de servicios a la comunidad será necesario ampliar el padrón de instituciones públicas y privadas receptoras de internos.
- g) Elabore una cartilla de derechos y obligaciones del interno sobre la base de las normas contenidas en el Código de Ejecución Penal y las normas internacionales sobre la materia, en cumplimiento del artículo 9° del Código de Ejecución Penal.
- h) Elabore un reglamento de aplicación de sanciones administrativas al interno, que contenga los principios del debido proceso, como el derecho a la defensa, doble instancia, principio de legalidad, entre otras.
- i) Elabore un nuevo reglamento de traslados de internos, que precise taxativamente los supuestos en que resulte procedente la medida, la obligación de informar al interno su nuevo destino, el derecho de llevar

consigo todas sus pertenencias, el respeto a su integridad física y moral y le permita una comunicación con sus familiares o abogado defensor antes del traslado. Establezca además como principio rector, que los traslados se realicen bajo criterios de estricta necesidad y en consideración a la condición jurídica del interno y al nivel de afectación del binomio interno-familia.

- j) Evalúe la posibilidad de implementar una política de traslados de internos a sus lugares de origen o penal más cercano, por razones de unidad familiar o salud, entre otras. En esta medida, se podría priorizar a los internos por delito de terrorismo y traición a la Patria que se acogieron al Decreto Ley N° 25499 Ley de Arrepentimiento, así como a los llamados "independientes", previa constatación de su desvinculación de los grupos subversivos.
- k) Disponga que el sistema de control de visitas y el registro corporal, se efectúen respetando la integridad moral, psíquica y física de las personas en cumplimiento de lo dispuesto en el inciso 1° del artículo 2° de la Constitución Política del Estado. Que, la revisión de tipo vaginal no constituya un mecanismo de control ordinario de la visita y ante la necesidad excepcional de su práctica, debe ser efectuada por personal profesional de salud y sólo cuando las circunstancias permitan suponer razonablemente un comportamiento ilícito de la persona, debiendo prohibirse su práctica en menores de edad.
- l) Autorice a los internos su matrícula y participación en cursos de educación a distancia, así como promueva la celebración de un mayor número de convenios con instituciones de educación técnica y superior a fin de que los internos puedan acceder a tales servicios.
- m) Brinde mayores facilidades a los religiosos y agentes pastorales que realizan labores asistenciales y humanitarias en los establecimientos penitenciarios, particularmente en los penales de máxima seguridad.
- n) Fortalezca los servicios post penitenciarios, promoviendo la participación de entidades estatales y organismos privados que puedan brindar servicios y oportunidades de trabajo a quienes hayan sido liberados.
- o) Realice acciones de sensibilización en las facultades de derecho de las universidades nacionales y privadas a efectos de promover las prácticas profesionales en los establecimientos penales de todo el país.

13. **RECOMENDAR** a los Directores Regionales del Instituto Nacional Penitenciario y a los Directores de los Establecimientos Penitenciarios, de conformidad con el artículo 107° del Decreto Legislativo N° 654, Código de Ejecución Penal, realicen las coordinaciones necesarias con instituciones públicas y privadas a fin de garantizar la presencia de profesionales en nutrición en los establecimientos penitenciarios que brinden asesoría en la programación y elaboración de alimentos destinados a la población penal, a las madres gestantes y lactantes, los niños, los enfermos de SIDA y de tuberculosis.
14. **EXHORTAR** a todos los funcionarios públicos citados en las recomendaciones precedentes, conforme al artículo 44° y a los incisos 21) y 22) del artículo 139° de la Constitución Política del Estado, para que cumplan con su deber de garantizar la plena vigencia de los derechos humanos y pongan en práctica las recomendaciones que en el presente documento se formulan y nos informen de sus resultados en un plazo de treinta días. Concluido el mismo, la Defensoría del Pueblo evaluará las medidas adoptadas por los funcionarios responsables y emitirá una resolución defensorial al respecto.
15. **ENCARGAR** el seguimiento del presente informe a la Adjuntía para los Derechos Humanos y las Personas con Discapacidad y a su Programa de Asuntos Penales y Penitenciarios.
16. **REMITIR** el presente Informe Defensorial, para los fines correspondientes, al Señor Presidente de la República; a los Señores Ministros de Justicia, de Economía y Finanzas y de Salud; a los Presidentes de las Comisiones de Derechos Humanos y Pacificación, Justicia y Abuso de Autoridad del Congreso de la República; a la Fiscal de la Nación y Presidenta de la Comisión Ejecutiva del Ministerio Público; al Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la República y Presidente de la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial; al Director General de la Policía Nacional del Perú y al Director de la Dirección Nacional de Apoyo a Justicia de la Policía Nacional del Perú; al Presidente Ejecutivo del Seguro Social de Salud; al Presidente del Instituto Nacional Penitenciario, a los Directores Regionales del INPE y a los Directores de los Establecimientos Penitenciarios del país.

B I B L I O G R A F I A

AMBOS, Kai: Terrorismo y ley. Análisis comparativo: República Federal Alemana, Gran Bretaña, Perú y Colombia. Comisión Andina de Juristas, Lima, 1988.

ARNAU OLIVÉ, Marina – SABATÉ SALES, Anna: “Del suplicio a la reeducación: La finalidad resocializadora de la pena”. En: Tratamiento penitenciario y Derechos Humanos. Jornadas penitenciarias organizadas por la Associació Catalana de Juristes Demòcrates. Iñaki Rivera Beiras (coordinador). José María Bosch Editor S. A., Barcelona, 1994.

AUTORES VARIOS: Abolicionismo penal. Traducción del inglés por Mariano Alberto Ciafardini y Mirta Lilián Bondanza. EDIAR, Buenos Aires, 1989.

AUTORES VARIOS: Jornadas sobre sistema penitenciario y derechos humanos. Editorial del Puerto s.r.l., Buenos Aires, 1997.

BALAGUER SANTAMARIA, Javier: “Derechos Humanos y privación de libertad: En particular, dignidad, derecho a la vida y prohibición de torturas”. En: Cárcel y Derechos Humanos. Un enfoque relativo a la defensa de los derechos fundamentales de los reclusos. Iñaki Rivera Beiras (coordinador). José María Bosch Editor S. A., Barcelona, 1992.

BECCARIA, Cesare: De los delitos y de las penas. Segunda edición. Estudio preliminar de Nódier Agudelo B. Temis, Bogotá, 1990.

BENTHAM Jeremy: El panóptico. Prologo de Michael Foucault. Premio editores, México D. F., 1989.

BARATTA, Alessandro: Resocialización o control social. Por un concepto crítico de “reintegración social” del condenado. Universidad del Saarland, República Federal de Alemania, 1993.

BERGALLI, Roberto: Control social punitivo. Sistema penal e instancias de aplicación (policía, jurisdicción y cárcel). Editorial María Jesús Bosch S.L., Barcelona, 1996.

BINDER, Alberto: Introducción al Derecho Procesal Penal. Ad Hoc, Buenos Aires, 1993.

BOVINO, Alberto: Problemas del proceso penal contemporáneo. Editores del Puerto s.r.l., Buenos Aires, 1998.

BOVINO, Alberto: "La justicia militar y el juzgamiento de civiles". En: Justicia Militar y Estado de Derecho. Jorge Mera Figueroa (Editor). Cuaderno de Análisis Jurídico. Serie Seminarios N° 40. Escuela de Derecho Universidad Diego Portales. Santiago de Chile, 1998.

BUSTOS RAMIREZ, Juan: "Función de la pena y la teoría del delito en el Estado Social y Democrático de Derecho". En: Política criminal y reforma del derecho penal. Editorial Temis S.A., Bogotá, 1982.

BUSTOS RAMIREZ, Juan: Control social y sistema penal. PPU, Barcelona, 1987.

BUSTOS RAMIREZ, Juan: "La crisis de las penas privativas de libertad y de la institución penitencia en general". En: Acerca de la cárcel. Cuadernos de Análisis Jurídico. Serie Seminarios 24, marzo de 1993. Escuela de Derecho de la Universidad Diego Portales, Santiago de Chile, 1993.

BUSTOS RAMIREZ, Juan: Introducción al derecho penal. Segunda edición. Temis, Bogotá, 1994.

CAFERATTA NORES, José I.: "La prueba en el proceso penal". En: Valoración de la Prueba. Fundación Myrna Mack. Ciudad de Guatemala, 1996.

CALVET BAROT, Gemma: "La cárcel y el derecho a la salud: El diseño y la legitimación de una vulneración permanente". En: Tratamiento penitenciario y Derechos Humanos. Jornadas penitenciarias organizadas por la Associació Catalana de Juristes Demòcrates. Iñaki Rivera Beiras (coordinador). José María Bosch Editor S. A., Barcelona, 1994.

CALVET BAROT, Gemma; GARCIA-BORES I ESPI, Josep; RIVERA BEIRAS, Iñaki; RODRIGUEZ SAEZ, José A.: Cárcel e indefensión social: Recursos jurídicos y sociales. José María Bosch Editor S. A., Barcelona, 1995.

CARRANZA, Elias; HOUED, Mario; MORA, Luis Paulino; ZAFFARONI, Eugenio: El preso sin condena en América Latina y el Caribe: Estudio comparativo estadístico y legal de treinta país y propuestas para reducir el fenómeno. ILANUD, San José de Costa Rica, 1988.

CARRANZA, Elias: "Presente y futuro de la política penitenciaria en Latinoamérica y el Caribe". En: La experiencia del penitenciarismo contemporáneo. Aportes y expectativas. Comisión Nacional de Derechos Humanos, México D.F., 1995.

CID MOLINE, José; LARRAURI PIJOAN, Elena (Coordinadores): Penas alternativas a la prisión. Bosh Casa Editorial S.A., Barcelona, 1997

Comisión Andina de Juristas: Protección de los Derechos Humanos. Definiciones operativas. Comisión Andina de Juristas, Lima, 1997.

Comisión Nacional de Derechos Humanos: Manual de Derechos Humanos del interno en el sistema penitenciario mexicano. Comisión Nacional de Derechos Humanos, México D.F., 1995.

DE TIENDA GARCÍA, Jordi: "¿Dónde está el tratamiento?". En: Tratamiento penitenciario y Derechos Humanos. Jornadas penitenciarias organizadas por la Associació Catalana de Juristes Demòcrates. Iñaki Rivera Beiras (coordinador). José María Bosch Editor S. A., Barcelona, 1994.

Defensoria del Pueblo: Derechos Humanos y Sistema Penitenciario. Supervisión de Derechos Humanos de personas privadas de libertad 1997. Elaborado por la Adjuntía de Derechos Humanos - Programa de Asuntos Penales y Penitenciarios. Serie Informes Defensoriales, Informe N° 11, Lima, 1998.

Defensoria del Pueblo: Análisis de los Decretos Legislativos sobre Seguridad Nacional Dictados al Amparo de la Ley N° 26955, Lima, 1998.

Defensoria del Pueblo: Lineamientos para la reforma de la Justicia Militar en el Perú. Serie Informes Defensoriales, Informe N° 6, Lima, 1998.

DOBÓN, Juan; RIVERA BEIRAS, Iñaki (Coordinadores): Secuestro institucionales y derechos humanos: La cárcel y el manicomio como laberintos de obediencias fingidas. María Jesús Bosch S. L., Barcelona, 1996.

DEL TORO MARZAL, Alejandro: "La doctrina del tratamiento penitenciario". En Materiales de Lectura del VII Taller Nacional sobre Justicia y Derechos Humanos. Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS), Lima 12 al 17 de julio de 1993.

DOMINGO HERNANDO, Lluís – SANCHEZ MASIP, Alicia: "Función de los Juzgados de Vigilancia: Su necesidad (breve referencia a otros países)". En: Tratamiento penitenciario y Derechos Humanos. Jornadas penitenciarias organizadas por la Associació Catalana de Juristes Demòcrates. Iñaki Rivera Beiras (coordinador). José María Bosch Editor S. A., Barcelona, 1994.

DUCE JULIO, Mauricio; MERA FIGUEROA, Jorge: Introducción al sistema penal. Textos de docencia universitaria. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Universidad Diego Portales, Santiago de Chile, 1996.

FERNANDEZ GARCIA, Julio: "La prevención especial: implementación a través de los permisos penitenciarios mantenimiento o reforma". En Justicia penal y sociedad. Revista Guatemalteca de Ciencias Penales. Año 4 - Nº 6, abril de 1997.

FERRAJOLI, Luigi: Derecho y razón. Teoría del garantismo penal. Prologo de Norberto Bobbio. Editorial Trotta S. A., Madrid, 1995.

FOUCAULT, Michel: Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión. 17ª. Edición. Siglo XXI, Buenos Aires, 1989.

FRANCIA SANCHEZ, Luis Enrique: "Tribunal Independiente e Imparcial y Justicia Militar ¿Diferencias o incompatibilidades?". En: Justicia Militar y Estado de Derecho. Jorge Mera Figueroa (Editor). Cuaderno de Análisis Jurídico. Serie Seminarios Nº 40. Escuela de Derecho Universidad Diego Portales. Santiago de Chile, 1998.

GARCIA-BORES ESPI, Josep Ma.: "El pronóstico: La necesidad de un autoconvencimiento". En: Tratamiento penitenciario y Derechos Humanos. Jornadas penitenciarias organizadas por la Associació Catalana de Juristes Demòcrates. Iñaki Rivera Beiras (coordinador). José María Bosch Editor S. A., Barcelona, 1994.

GARCIA-PABLOS DE MOLINA, Antonio: Criminología. Una introducción a sus fundamentos teóricos para juristas. 3ra. Edición corregida y aumentada. Tirant lo Blanch, Valencia, 1996.

GARCIA VALDES, Carlos: Estudios de derecho penitenciario. Tecnos, Madrid. 1982.

GARCIA VALDES, Carlos (Director): Historia de la prisión. Teorías economicistas. Crítica (cursos de doctorado). EDISOFER S.L., Madrid, 1997.

GAVIRIA LONDOÑO, Vicente: "La parte civil y protección de las víctimas en el proceso penal". En: Derecho penal y criminología. Revista del Instituto de Ciencias Penales y Crimológicas. Volumen XX, número 62, mayo/agosto 1997. Universidad Externado de Colombia.

GIMÉNEZ-SALINAS i COLOMER, Esther: La situación penitenciaria en España. Teoría y práctica, s/f.

GUTIERREZ, Massimo; LLOR, José: "Reflexiones sobre la tortura y el maltrato penitenciario". En Materiales de Lectura del VII Taller Nacional sobre Justicia y Derechos Humanos. Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS), Lima 12 al 17 de julio de 1993.

HASSEMER, Winfried: Fundamentos de derecho penal. Editorial Bosch S.A., Barcelona, 1984.

HOLFER, María Eugenia: "Comentario a la ponencia de María Inés Horvitz". En: Acerca de la cárcel. Cuadernos de Análisis Jurídico. Serie Seminarios 24, marzo de 1993. Escuela de Derecho de la Universidad Diego Portales, Santiago de Chile.

HORVITZ LENNON, María Inés: "Las medidas alternativas de la prisión. Su no inserción en sistema penitenciario chileno y presupuestos para su profundización en Chile". En: Acerca de la cárcel. Cuadernos de Análisis Jurídico. Serie Seminarios 24, marzo de 1993. Escuela de Derecho de la Universidad Diego Portales, Santiago de Chile.

IBAÑEZ GUZMAN, Augusto: "Instrumentos del sistema penal y de política criminal ante la víctima". En: Derecho penal y criminología. Revista del Instituto de Ciencias Penales y Crimológicas. Volumen XX, número 62, mayo/agosto 1997. Universidad Externado de Colombia.

JIMENEZ A. María Angélica: "Sistema penal y medidas alternativas". En: Acerca de la cárcel. Cuadernos de Análisis Jurídico. Serie Seminarios 24, marzo de 1993. Escuela de Derecho de la Universidad Diego Portales, Santiago de Chile.

JIMENEZ A. María Angélica: El proceso penal chileno y los derechos humanos. Volumen II. Estudios Empíricos. Cuadernos de Análisis Jurídico. Serie Publicaciones Especiales. Escuela de Derecho de la Universidad Diego Portales, Santiago, 1994.

KIRCHHIMER, Otto; RUSCHE, Georg: Pena y estructura social. Traducción de Emilio García Méndez. Colección Pensamiento Jurídico Contemporáneo. Editorial TEMIS, Bogotá, 1984.

MAIER, Julio B. J.: Derecho Procesal Penal. Tomo I. Fundamentos. Segunda edición. Editores del Puerto s.r.l., Buenos Aires, 1996.

MANZANOS BILBAO, César: "Reproducción de lo carcelario: El caso de las ideologías resocializadoras". En: Tratamiento penitenciario y Derechos Humanos. Jornadas penitenciarias organizadas por la Associació Catalana de Juristes Demòcrates. Iñaki Rivera Beiras (coordinador). José María Bosch Editor S. A., Barcelona, 1994.

MAPELLI CAFFARENA, Borja: Principios Fundamentales del Sistema Penitenciario Español. Bosch, Casa Editorial S. A., Barcelona, 1983.

MAPELLI CAFFARENA, Borja: "El sistema penitenciario, los derechos humanos y la jurisdicción constitucional". En: Tratamiento penitenciario y Derechos Humanos. Jornadas penitenciarias organizadas por la Associació Catalana de Juristes Demòcrates. Iñaki Rivera Beiras (coordinador). José María Bosch Editor S. A., Barcelona, 1994.

MELOSSI, Dario; PAVARINI, Massimo: Cárcel y fabrica: Los orígenes del sistema penitenciario, siglos XVI-XIX. Tercera edición. Siglo XXI, México D.F., 1984.

MERA FIGUEROA, Jorge: "Adecuación del derecho penal chileno a las exigencias de los derechos humanos". En: Sistema Jurídico y Derechos Humanos. El derecho nacional y las obligaciones internacionales de Chile en materia de Derechos Humanos. Editores Cecilia Medina y Jorge Mera. Escuela de Derecho Universidad Diego Portales. Serie Publicaciones Especiales 6. Santiago de Chile, 1996.

MIR PUIG, Santiago: Derecho Penal. Parte general. 4ª. Edición corregida y puesta al día con arreglo al Código Penal de 1995. Barcelona, 1996.

MOSCONO, Giuseppe: "Paradojas y antinomias del concepto tratamiento". En: Tratamiento penitenciario y Derechos Humanos. Jornadas penitenciarias organizadas por la Associació Catalana de Juristes Demòcrates. Iñaki Rivera Beiras (coordinador). José María Bosch Editor, S. A., Barcelona, 1994.

MOSQUERA RIAL, Ana: Derechos Fundamentales y Privación de Libertad - Control de la Ejecución de la Pena, en Revista Jurídica del Perú, Año XLVII- Nro.13 -Oct-Dic, 1997.

MUÑOZ CONDE, Francisco; GARCIA ARAN, Mercedes: Derecho penal. Parte general. 2a. edición, revisada y puesta al día conforme al Código Penal de 1995. Tirant lo Blanch, 1996.

O'DONNELL, Daniel: Protección Internacional de los Derechos Humanos. Comisión Andina de Juristas, Lima, 1989

OLARIETA ALBERDI, Juan Manuel: "La intervención de las comunicaciones del abogado defensor". En: Tratamiento penitenciario y Derechos Humanos. Jornadas penitenciarias organizadas por la Associació Catalana de Juristes Demòcrates. Iñaki Rivera Beiras (coordinador). José María Bosch Editor S. A., Barcelona, 1994.

PAVARINI, Massimo: Control y dominación. Teorías criminológicas burguesas y proyecto hegemónico. Segunda edición en español. Traducción de Ignacio Muñagorri, Epílogo de Roberto Bergalli. Siglo XXI Editores, México D.F., 1988.

PAVARINI, Massimo: "¿Menos cárcel y mas medidas alternativas?. La vía italiana a la limitación de la cárcel reconsiderada sobre la base de la experiencia histórica y comparada". En: Acerca de la cárcel. Cuadernos de Análisis Jurídico. Serie Seminarios 24, marzo de 1993. Escuela de Derecho de la Universidad Diego Portales, Santiago de Chile, 1993

PEDRAZA SIERRA, Wilfredo: "Áreas Comunes en el Ambito de Ejecución Penal y el Sub Sistema Judicial Penal". En: Situación Actual de la Ejecutoria Penal en el Perú. Cuadernos de Debate Judicial. Investigaciones volumen 3. Consejo de Coordinación Judicial. Lima, 1998.

PEREZ PINZON, Alvaro Orlando: "Las víctimas del sistema penal". En: Derecho penal y criminología. Revista del Instituto de Ciencias Penales y Crimológicas. Volumen XX, número 62, mayo/agosto 1997. Universidad Externado de Colombia, 1997.

POCHAT, Andre: "El alcance que el sistema interamericano de derechos humanos le reconoce a los derechos de los presos". En Materiales de Lectura del 2do Taller Regional Norte, Centro y Sur Justicia y Derechos Humanos. Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS), Lima, 1998

PRADO SALDARRIAGA, Víctor: Comentarios al Código Penal de 1991. Editorial Alternativas, Lima, 1993.

RIVERA BEIRAS, Iñaki (Coordinador): Cárcel y Derechos Humanos. Un enfoque relativo a la defensa de los derechos fundamentales de los reclusos. José María Bosch Editor, S. A., Barcelona, 1992.

RIVERA BEIRAS, Iñaki (Coordinador): Tratamiento penitenciario y Derechos Humanos. Jornadas penitenciarias organizadas por la Associació Catalana de Juristes Demòcrates. José María Bosch Editor S. A., Barcelona, 1994.

RIVERA BEIRAS, Iñaki (Coordinador): La cárcel en el sistema penal (un análisis estructural). María Jesús Bosch S. L. Barcelona, 1996.

RIVERA BEIRAS, Iñaki: "Los derechos fundamentales en la privación de la libertad (análisis socio jurídico de la normatividad internacional)". En: Cárcel y Derechos Humanos. Un enfoque relativo a la defensa de los derechos fundamentales de los reclusos. Iñaki Rivera Beiras (coordinador). José María Bosch Editor, S. A., Barcelona, 1992.

RIVERA BEIRAS, Iñaki: "La «devaluación» de los derechos fundamentales de los reclusos". En: Tratamiento Penitenciario y Derechos Humanos. Jornadas penitenciarias organizadas por la Associació Catalana de Juristes Demòcrates. Iñaki Rivera Beiras (coordinador). José María Bosch Editor S. A., Barcelona, 1994.

RIVERA BEIRAS, Iñaki: La Devaluación de los Derechos Fundamentales de los Reclusos. La Construcción Jurídica de un Ciudadano de Segunda Categoría. Biblioteca de Derecho Penal. José María Bosch Editor. Barcelona, 1997.

RIVERA BEIRAS, Iñaki: El problema de los fundamentos de la intervención jurídico-penal. Las teorías de la pena. Editorial-Gráficas Signo, S.A. Barcelona, 1998.

RIVERA BEIRAS, Iñaki: Lineamientos garantistas para una transformación radical y reduccionista de la cárcel. Ponencia presentada en el Seminario organizado por la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS). Lima, julio de 1999.

RODRIGUEZ SAEZ, José A.: "Derechos fundamentales en la cárcel: Referencia al derecho de defensa". En: Tratamiento penitenciario y Derechos Humanos. Jornadas penitenciarias organizadas por la Associació Catalana de

Juristes Demócrates. Iñaki Rivera Beiras (coordinador). José María Bosch Editor, S. A., Barcelona, 1994.

ROXIN, Claus: Problemas básicos de derecho penal. Reus S. A., Madrid, 1976.

SALT, Marcos: "La racionalidad en el uso de la cárcel: un paso entre la legitimidad y el abolicionismo". En Materiales de Lectura del VIII Taller Nacional sobre Justicia y Derechos Humanos. Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS), Lima 20 al 24 de junio de 1994.

SALT, Marcos: "Líneas básicas para una reforma progresista del derecho penitenciario en América Latina". En: Materiales de Lectura del 1er Taller Regional Norte, Centro y Sur Justicia y Derechos Humanos. Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS), Lima, 1997.

SAN MARTIN CASTRO, César: Derecho procesal penal. Volumen II. Grijley, Lima, 1999.

STER, Vivien: "Las alternativas a la privación de la libertad en Gran Bretaña". En: Acerca de la cárcel. Cuadernos de Análisis Jurídico. Serie Seminarios 24, marzo de 1993. Escuela de Derecho de la Universidad Diego Portales, Santiago de Chile, 1993.

VILLAVICENCIO TERREROS, Felipe: Introducción a la criminología. Grijley. Lima, 1997.

VILLAVICENCIO TERREROS, Felipe: Código Penal. 2da. Edición. Grijley. Lima, 1997

ZAFFARONI, Raúl Eugenio: Manual de Derecho Penal. Parte General. Ediciones Jurídicas, Lima, 1990

ZAFFARONI, Raúl Eugenio: En busca de las penas perdidas. Deslegitimación y dogmática jurídico-penal. Segunda edición. Temis, Bogotá, 1993.

A N E X O S

Anexo N° 1
POBLACION PENAL
EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS

DIRECCION REGIONAL LIMA

ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	POBLACION	%
Sentenciados de Huaraz	336	1.23%
Procesados de Chimbote	454	1.66%
Sentenciados de Ica	595	2.17%
Procesados de Tambo de Mora	362	1.32%
Callao	1,119	4.08%
Mujeres de Chorrillos	854	3.11%
Reg. Cerr. Esp. Mujeres de Chorrillos	287	1.05%
Reg. Cerr. Ord. Lurigancho	6,633	24.18%
Reg. Cerr. Esp. Miguel Castro Castro	1,539	5.61%
Procesados Primarios Lima	403	1.47%
Procesados de Canta	1	0.00%
Procesados Carquin Huacho	650	2.37%
Procesados de Yauyos	3	0.01%
Nuevo Imperial Cañete	656	2.39%
Lucanas Puquio	0	0.00%
San Isaias Coracora	0	0.00%
TOTAL	13,892	50.65%

DIRECCION REGIONAL NORTE CHICLAYO

ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	POBLACION PENAL	%
Huacariz - Cajamarca	411	1.50%
Procesados de Cajabamba	12	0.04%
Procesados de Celendin	10	0.04%
Chota	54	0.20%
Procesados de Bambamarca	14	0.05%
Procesados de San Ignacio	37	0.13%
Procesados de Santa Cruz	26	0.09%
Procesados de Jaen	148	0.54%
Sentenciados de Trujillo	1,135	4.14%
Mujeres de Trujillo	94	0.34%
Procesados San Pedro de Lloc	64	0.23%
Procesados de Santiago de Chuco	20	0.07%
Sentenciados de Picsi Chiclayo	978	3.57%
Mujeres de Chiclayo	56	0.20%
Maxima Seguridad Picsi	142	0.52%
Sentenciados de Castilla Piura (Rio Seco)	1,195	4.36%
Procesados de Ayabaca	21	0.08%
Huancabamba	15	0.05%
Mujeres de Sullana	111	0.40%
Tumbes	22	0.08%
TOTAL	4,565	16.64%

DIRECCION REGIONAL ORIENTE PUCALLPA

ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	POBLACION	%
Sentenciados de Huanuco	1,242	4.53%
Procesados de la Unión	22	0.08%
Sentenciados de Pucallpa	689	2.51%
procesados de Cerro de Pasco	58	0.21%
TOTAL	2,011	7.33%

Anexo Nº 1
POBLACION PENAL
EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS

DIRECCION REGIONAL CENTRO HUANCAYO

ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	POBLACION	%
Procesados de Oxapampa	28	0.10%
Sentenciados de Huamancaca	620	2.26%
Procesados de La Merced	191	0.70%
Procesados de Jauja	31	0.11%
Procesados de Satipo	36	0.13%
Procesados de Tarma	31	0.11%
Procesados La Oroya - Yauli	46	0.17%
Proc. Mujeres de Concepción	77	0.28%
Sentenciados de Huancavelica	59	0.22%
Procesados de Pampas Tayacaja	5	0.02%
Procesados de Huanta	21	0.08%
Max. Seg. Yanamilla Ayacucho	729	2.66%
TOTAL	1,874	6.83%

DIRECCION REGIONAL NOR ORIENTE SAN MARTIN

ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	POBLACION	%
Procesados de Juanjui Mariscal Caceres	123	0.45%
Sentenciados de Moyobamba	309	1.13%
Procesados de Tarapoto	357	1.30%
Sentenciados de Iquitos	564	2.06%
Procesados de Yurimaguas	74	0.27%
Anexo Sentenciados de Iquitos	69	0.25%
Sentenciados de Chachapoyas	143	0.52%
Procesados de Bagua Grande	231	0.84%
TOTAL	1,870	6.82%

DIRECCION REGIONAL SUR ORIENTE CUSCO

ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	POBLACION	%
Sentenciados de Abancay	141	0.51%
Procesados de Andahuaylas	26	0.09%
Procesados de Cotabambas	9	0.03%
Chincheros	10	0.04%
Sentenciados de Quencoro	656	2.39%
Procesados de Sicuani	46	0.17%
Procesados de Chumbivilcas	18	0.07%
Procesados de Yauri	21	0.08%
Procesados de Quillabamba	57	0.21%
Procesados de Paucartambo	4	0.01%
Procesados de Urcos - Quispicanchis	8	0.03%
Mujeres de Quencoro	59	0.22%
Procesados de Tambopata	79	0.29%
TOTAL	1,134	4.13%

Anexo Nº 1
POBLACION PENAL
EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS

DIRECCION REGIONAL SUR AREQUIPA

ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	POBLACION	%
Sentenciados de Socabaya	627	2.29%
Procesados de Camana	34	0.12%
Procesados de Chivay Caylloma	8	0.03%
Procesados de Mollendo - Islay	14	0.05%
Mujeres de Socabaya	64	0.23%
Procesados de Moquegua	19	0.07%
Sentenciados de Pocollay	327	1.19%
TOTAL	1,093	3.98%

DIRECCION REGIONAL ALTIPLANO PUNO

ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	POBLACION	%
Sentenciados de Yanamayo	375	1.37%
Procesados de Azángaro	4	0.01%
Procesados de Macusani Carabaya	1	0.00%
Procesados de Huancane	21	0.08%
Régimen Especial Challapalca	138	0.50%
Max. Seg. La Capilla Juliaca	450	1.64%
TOTAL	989	3.61%

TOTAL GENERAL	27,428	100.00%
---------------	--------	---------

Anexo Nº 2
SITUACION JURIDICA DE LA POBLACION PENAL

DIRECCION REGIONAL LIMA

ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	POBLACION	PROCESADOS		SENTENCIADOS	
Sentenciados de Huaraz	336	174	51.79%	162	48.21%
Procesados de Chimbote	454	166	36.56%	288	63.44%
Sentenciados de Ica	595	234	39.33%	361	60.67%
Procesados de Tambo de Mora	362	66	18.23%	296	81.77%
Callao	1,119	740	66.13%	379	33.87%
Mujeres de Chorrillos	854	607	71.08%	247	28.92%
Reg. Cerr. Esp. Mujeres de Chorrillos	287	49	17.07%	238	82.93%
Reg. Cerr. Ord. Lurigancho	6,633	6,479	97.68%	154	2.32%
Reg. Cerr. Esp. Miguel Castro Castro	1,539	828	53.80%	711	46.20%
Procesados Primarios Lima	403	347	86.10%	56	13.90%
Procesados de Canta	1	1	100.00%	0	0.00%
Procesados Carquin Huacho	650	295	45.38%	355	54.62%
Procesados de Yauyos	3	1	33.33%	2	66.67%
Nuevo Imperial Cañete	656	203	30.95%	453	69.05%
Lucanas Puquio	0	0	0.00%	0	0.00%
San Isaias Coracora	0	0	0.00%	0	0.00%
TOTAL	13,892	10,190	73.35%	3,702	26.65%

DIRECCION REGIONAL NORTE CHICLAYO

ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	POBLACION	PROCESADOS		SENTENCIADOS	
Huacariz - Cajamarca	411	124	30.17%	287	69.83%
Procesados de Cajabamba	12	9	75.00%	3	25.00%
Procesados de Celendín	10	9	90.00%	1	10.00%
Chota	54	32	59.26%	22	40.74%
Procesados de Bambamarca	14	6	42.86%	8	57.14%
Procesados de Jaen	148	82	55.41%	66	44.59%
Procesados de San Ignacio	37	25	67.57%	12	32.43%
Procesados de Santa Cruz	26	20	76.92%	6	23.08%
Sentenciados de Trujillo	1,135	864	76.12%	271	23.88%
Mujeres de Trujillo	94	48	51.06%	46	48.94%
Procesados San Pedro de Lloc	64	58	90.63%	6	9.38%
Procesados de Santiago de Chuco	20	20	100.00%	0	0.00%
Sentenciados de Picsi Chiclayo	978	481	49.18%	497	50.82%
Mujeres de Chiclayo	56	27	48.21%	29	51.79%
Maxima Seguridad Picsi	142	14	9.86%	128	90.14%
Sentenciados de Castilla Piura (Rio Seco)	1,195	631	52.80%	564	47.20%
Procesados de Ayabaca	21	11	52.38%	10	47.62%
Huancabamba	15	4	26.67%	11	73.33%
Mujeres de Sullana	111	36	32.43%	75	67.57%
Tumbes (Func. Como carceleta	22	21	95.45%	1	4.55%
TOTAL	4,565	2,522	55.25%	2,043	44.75%

DIRECCION REGIONAL ORIENTE PUCALLPA

ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	POBLACION	PROCESADOS		SENTENCIADOS	
Sentenciados de Huanuco	1,242	1,038	83.57%	204	16.43%
Procesados de la Unión	22	16	72.73%	6	27.27%
procesados de Cerro de Pasco	58	56	96.55%	2	3.45%
Sentenciados de Pucallpa	689	419	60.81%	270	39.19%
TOTAL	2,011	1,529	76.03%	482	23.97%

Anexo Nº 2
SITUACION JURIDICA DE LA POBLACION PENAL

DIRECCION REGIONAL CENTRO HUANCAYO

ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	POBLACION	PROCESADOS		SENTENCIADOS	
Procesados de Oxapampa	28	15	53.57%	13	46.43%
Sentenciados de Huamancaca	620	314	50.65%	306	49.35%
Procesados de La Merced	191	62	32.46%	129	67.54%
Procesados de Jauja	31	30	96.77%	1	3.23%
Procesados de Satipo	36	27	75.00%	9	25.00%
Procesados de Tarma	31	21	67.74%	10	32.26%
Procesados La Oroya - Yauli	46	22	47.83%	24	52.17%
Proc. Mujeres de Concepción	77	58	75.32%	19	24.68%
Sentenciados de Huancavelica	59	28	47.46%	31	52.54%
Procesados de Pampas Tayacaja	5	5	100.00%	0	0.00%
Procesados de Huanta	21	9	42.86%	12	57.14%
Max. Seg. Yanamilla Ayacucho	729	270	37.04%	459	62.96%
TOTAL	1,874	861	45.94%	1,013	54.06%

DIRECCION REGIONAL NOR ORIENTE SAN MARIN

ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	POBLACION	PROCESADOS		SENTENCIADOS	
Sentenciados de Moyobamba	309	95	30.74%	214	69.26%
Procesados Juanjui	123	42	34.15%	81	65.85%
Procesados Tarapoto	357	163	45.66%	194	54.34%
Sentenciados Iquitos	564	300	53.19%	264	46.81%
Procesados Yurimaguas	74	52	70.27%	22	29.73%
Sentenciados de Iquitos	69	19	27.54%	50	72.46%
Sentenciados de Chachapoyas	143	78	54.55%	65	45.45%
Procesados de Bagua	231	117	50.65%	114	49.35%
TOTAL	1,870	866	46.31%	1004	53.69%

DIRECCION REGIONAL SUR ORIENTE CUSCO

ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	POBLACION	PROCESADOS		SENTENCIADOS	
Sentenciados de Abancay	141	49	34.75%	92	65.25%
Procesados de Andahuaylas	26	18	69.23%	8	30.77%
Procesados de Cotabambas	9	8	88.89%	1	11.11%
Chincheros	10	10	100.00%	0	0.00%
Sentenciados de Quencoro	656	223	33.99%	433	66.01%
Sicuani Canchis	46	22	47.83%	24	52.17%
Procesados de Chumbivilcas	18	17	94.44%	1	5.56%
Procesados de Yauri	21	18	85.71%	3	14.29%
Procesados de Quillabamba	57	49	85.96%	8	14.04%
Procesados de Paucartambo	4	4	100.00%	0	0.00%
Procesados de Urcos Quispicanchis	8	8	100.00%	0	0.00%
Mujeres de Quencoro	59	32	54.24%	27	45.76%
Procesados de Tambopata	79	56	70.89%	23	29.11%
TOTAL	1,134	514	45.33%	620	54.67%

Anexo Nº 2
SITUACION JURIDICA DE LA POBLACION PENAL

DIRECCION REGIONAL SUR AREQUIPA

ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	POBLACION	PROCESADOS		SENTENCIADOS	
Sentenciados de Socabaya	627	216	34.45%	411	65.55%
Procesados de Camana	34	28	82.35%	6	17.65%
Procesados de Chivay Caylloma	8	7	87.50%	1	12.50%
Procesados de Mollendo - Islay	14	13	92.86%	1	7.14%
Mujeres de Socabaya	64	23	35.94%	41	64.06%
Procesados de Moquegua	19	14	73.68%	5	26.32%
Sentenciados de Pocollay	327	159	48.62%	168	51.38%
TOTAL	1,093	460	42.09%	633	57.91%

DIRECCION REGIONAL ALTIPLANO PUNO

ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	POBLACION	PROCESADOS		SENTENCIADOS	
Sentenciados de Yanamayo	375	24	6.40%	351	93.60%
Procesados de Azangaro	4	3	75.00%	1	25.00%
Procesados Macusani	1	1	100.00%	0	0.00%
Procesados de Huancane	21	13	61.90%	8	38.10%
Maxima Seguridad La Capilla Juliaca	450	225	50.00%	225	50.00%
Regimen Especial Challapalca	138	28	20.29%	110	79.71%
TOTAL	989	294	29.73%	695	70.27%

TOTAL GENERAL	27,428	17,236	62.84%	10,192	37.16%
----------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Anexo N° 3
POBLACION PENAL POR SEXO

DIRECCION REGIONAL LIMA

ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	POBLACION	HOMBRES	%	MUJERES	%
Sentenciados de Huaraz	336	318	94.64%	18	5.36%
Procesados de Chimbote	454	433	95.37%	21	4.63%
Sentenciados de Ica	595	549	92.27%	46	7.73%
Procesados de Tambo de Mora	362	342	94.48%	20	5.52%
Callao	1,119	1,119	100.00%	0	0.00%
Mujeres de Chorrillos	854	0	0.00%	854	100.00%
Reg. Cerr. Esp. Mujeres de Chorrillos	287	0	0.00%	287	100.00%
Reg. Cerr. Ord. Lurigancho	6,633	6,633	100.00%	0	0.00%
Reg. Cerr. Esp. Miguel Castro Castro	1,539	1,539	100.00%	0	0.00%
Procesados Primarios Lima	403	403	100.00%	0	0.00%
Procesados de Canta	1	1	100.00%	0	0.00%
Procesados Carquin Huacho	650	624	96.00%	26	4.00%
Procesados de Yauyos	3	3	100.00%	0	0.00%
Nuevo Imperial Cañete	656	656	100.00%	0	0.00%
Lucanas Puquio	0	0	0.00%	0	0.00%
San Isaias Coracora	0	0	0.00%	0	0.00%
TOTAL	13,892	12,620	90.84%	1,272	9.16%

DIRECCION REGIONAL NORTE CHICLAYO

ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	POBLACION	HOMBRES	%	MUJERES	%
Huacariz - Cajamarca	411	373	90.75%	38	9.25%
Procesados de Cajabamba	12	12	100.00%	0	0.00%
Procesados de Celendín	10	9	90.00%	1	10.00%
Chota	54	44	81.48%	10	18.52%
Procesados de Bambamarca	14	14	100.00%	0	0.00%
Procesados de San Ignacio	37	34	91.89%	3	8.11%
Procesados de Santa Cruz	26	26	100.00%	0	0.00%
Procesados de Jaen	148	144	97.30%	4	2.70%
Sentenciados de Trujillo	1,135	1,135	100.00%	0	0.00%
Mujeres de Trujillo	94	0	0.00%	94	100.00%
Procesados San Pedro de Lloc	64	59	92.19%	5	7.81%
Procesados de Santiago de Chuco	20	20	100.00%	0	0.00%
Sentenciados de Picsí Chiclayo	978	978	100.00%	0	0.00%
Mujeres de Chiclayo	56	0	0.00%	56	100.00%
Maxima Seguridad Picsi	142	142	100.00%	0	0.00%
Sentenciados de Castilla Piura (Rio Seco)	1,195	1,195	100.00%	0	0.00%
Procesados de Ayabaca	21	21	100.00%	0	0.00%
Huancabamba	15	15	100.00%	0	0.00%
Mujeres de Sullana	111	0	0.00%	111	100.00%
Tumbes	22	22	100.00%	0	0.00%
TOTAL	4,565	4,243	92.95%	322	7.05%

DIRECCION REGIONAL ORIENTE PUCALLPA

ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	POBLACION	HOMBRES	%	MUJERES	%
Sentenciados de Huanuco	1,242	1,087	87.52%	155	12.48%
Procesados de la Unión	22	22	100.00%	0	0.00%
Sentenciados de Pucallpa	689	647	93.90%	42	6.10%
procesados de Cerro de Pasco	58	54	93.10%	4	6.90%
TOTAL	2,011	1,810	90.00%	201	10.00%

Anexo N° 3
POBLACION PENAL POR SEXO

DIRECCION REGIONAL CENTRO HUANCAYO

ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	POBLACION	HOMBRES	%	MUJERES	%
Procesados de Oxapampa	28	27	96.43%	1	3.57%
Sentenciados de Huamancaca	620	620	100.00%	0	0.00%
Procesados de La Merced	191	184	96.34%	7	3.66%
Procesados de Jauja	31	31	100.00%	0	0.00%
Procesados de Satipo	36	34	94.44%	2	5.56%
Procesados de Tarma	31	29	93.55%	2	6.45%
Procesados La Oroya - Yauli	46	32	69.57%	14	30.43%
Proc. Mujeres de Concepción	77	0	0.00%	77	100.00%
Sentenciados de Huancavelica	59	58	98.31%	1	1.69%
Procesados de Pampas Tayacaja	5	4	80.00%	1	20.00%
Procesados de Huanta	21	20	95.24%	1	4.76%
Max. Seg. Yanamilla Ayacucho	729	657	90.12%	72	9.88%
TOTAL	1,874	1,696	90.50%	178	9.50%

DIRECCION REGIONAL NOR ORIENTE SAN MARTIN

ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	POBLACION	HOMBRES	%	MUJERES	%
Procesados de Juanjui Mariscal Caceres	123	120	97.56%	3	2.44%
Sentenciados de Moyobamba	309	297	96.12%	12	3.88%
Procesados de Tarapoto	357	340	95.24%	17	4.76%
Sentenciados de Iquitos	564	506	89.72%	58	10.28%
Procesados de Yurimaguas	74	71	95.95%	3	4.05%
Anexo Sentenciados de Iquitos	69	69	100.00%	0	0.00%
Sentenciados de Chachapoyas	143	137	95.80%	6	4.20%
Procesados de Bagua Grande	231	224	96.97%	7	3.03%
TOTAL	1,870	1,764	94.33%	106	5.67%

DIRECCION REGIONAL SUR ORIENTE CUSCO

ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	POBLACION	HOMBRES	%	MUJERES	%
Sentenciados de Abancay	141	136	96.45%	5	3.55%
Procesados de Andahuaylas	26	23	88.46%	3	11.54%
Procesados de Cotabambas	9	9	100.00%	0	0.00%
Chincheros	10	9	90.00%	1	10.00%
Sentenciados de Quencoro	656	656	100.00%	0	0.00%
Procesados de Sicuani	46	43	93.48%	3	6.52%
Procesados de Chumbivilcas	18	16	88.89%	2	11.11%
Procesados de Yauri	21	20	95.24%	1	4.76%
Procesados de Quillabamba	57	53	92.98%	4	7.02%
Procesados de Paucartambo	4	4	100.00%	0	0.00%
Procesados de Urcos - Quispicanchis	8	7	87.50%	1	12.50%
Mujeres de Quencoro	59	0	0.00%	59	100.00%
Procesados de Tambopata	79	79	100.00%	0	0.00%
TOTAL	1,134	1,055	93.03%	79	6.97%

Anexo N° 3
POBLACION PENAL POR SEXO

DIRECCION REGIONAL SUR AREQUIPA

ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	POBLACION	HOMBRES	%	MUJERES	%
Sentenciados de Socabaya	627	627	100.00%	0	0.00%
Procesados de Camana	34	33	97.06%	1	2.94%
Procesados de Chivay Caylloma	8	8	100.00%	0	0.00%
Procesados de Mollendo - Islay	14	12	85.71%	2	14.29%
Mujeres de Socabaya	64	0	0.00%	64	100.00%
Procesados de Moquegua	19	18	94.74%	1	5.26%
Sentenciados de Pocollay	327	260	79.51%	67	20.49%
TOTAL	1,093	958	87.65%	135	12.35%

DIRECCION REGIONAL ALTIPLANO PUNO

ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	POBLACION	HOMBRES	%	MUJERES	%
Sentenciados de Yanamayo	375	344	91.73%	31	8.27%
Procesados de Azángaro	4	4	100.00%	0	0.00%
Procesados Macusani	1	1	100.00%	0	0.00%
Procesados de Huancane	21	20	95.24%	1	4.76%
Regimen Especial Challapalca	138	138	100.00%	0	0.00%
Max. Seg. La Capilla Juliaca	450	422	93.78%	28	6.22%
TOTAL	989	929	93.93%	60	6.07%

TOTAL GENERAL	27,428	25,075	91.42%	2,353	8.58%
----------------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------

Anexo N° 4
POBLACION PENAL SUPERVISADA

DIRECCION REGIONAL LIMA

ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	POBLACION PENAL	%
Sentenciados de Huaraz	336	1.51%
Procesados de Chimbote	454	2.05%
Callao	1,119	5.04%
Mujeres de Chorrillos	854	3.85%
Reg. Cerr. Esp. Mujeres de Chorrillos	287	1.29%
Reg. Cerr. Ord. Lurigancho	6,633	29.88%
Reg. Cerr. Esp. Miguel Castro Castro	1,539	6.93%
Procesados Carquin Huacho	650	2.93%
Nuevo Imperial Cañete	656	2.96%
Procesados de Tambo de Mora	362	1.63%
TOTAL	12,890	58.07%

DIRECCION REGIONAL NORTE CHICLAYO

ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	POBLACION PENAL	%
Sentenciados de Castilla Piura (Rio Seco)	1,195	5.38%
Procesados de Ayabaca	21	0.09%
Mujeres de Sullana	111	0.50%
Sentenciados de Trujillo	1,135	5.11%
Procesados San Pedro de Lloc	64	0.29%
Huacarez - Cajamarca	411	1.85%
Procesados de Jaen	148	0.67%
TOTAL	3,085	13.90%

DIRECCION REGIONAL ORIENTE PUCALLPA

ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	POBLACION PENAL	%
Sentenciados de Huanuco	1,242	5.60%
Procesados de Cerro de Pasco	58	0.26%
TOTAL	1,300	5.86%

DIRECCION REGIONAL CENTRO HUANCAYO

ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	POBLACION PENAL	%
Procesados de Oxapampa	28	0.13%
Procesados de Satipo	36	0.16%
Procesados de Tarma	31	0.14%
Procesados La Oroya - Yauli	46	0.21%
Proc. Mujeres de Concepción	77	0.35%
Procesados de Huanta	21	0.09%
Max. Seg. Yanamilla Ayacucho	729	3.28%
TOTAL	968	4.36%

Anexo N° 4
POBLACION PENAL SUPERVISADA

DIRECCION REGIONAL NOR ORIENTE SAN MARTIN

ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	POBLACION PENAL	%
Sentenciados de Chachapoyas	143	0.64%
Procesados de Bagua Grande	231	1.04%
Procesados de Juanjui Mariscal Caceres	123	0.55%
Sentenciados de Iquitos	564	2.54%
Anexo Sentenciados de Iquitos	69	0.31%
Procesados de Yurimaguas	74	0.33%
TOTAL	1,204	5.46%

DIRECCION REGIONAL SUR ORIENTE CUSCO

ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	POBLACION PENAL	%
Procesados de Sicuani	46	0.21%
Sentenciados de Quencoro	656	2.96%
Mujeres de Quencoro	59	0.27%
Procesados de Tambopata	79	0.36%
TOTAL	840	3.78%

DIRECCION REGIONAL SUR AREQUIPA

ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	POBLACION PENAL	%
Sentenciados de Socabaya	627	2.82%
Procesados de Camana	34	0.15%
Procesados de Mollendo - Islay	14	0.06%
Mujeres de Socabaya	64	0.29%
Procesados de Moquegua	19	0.09%
Sentenciados de Pocollay	327	1.47%
TOTAL	1,085	4.89%

DIRECCION REGIONAL ALTIPLANO PUNO

ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	POBLACION PENAL	%
Sentenciados de Yanamayo	375	1.69%
Max. Seg. La Capilla Juliaca	450	2.03%
TOTAL	825	3.74%

TOTAL GENERAL	22,197	100.00%
----------------------	---------------	----------------

Anexo N° 5
ESTADO DE INFRAESTRUCTURA DE LOS
ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS SUPERVISADOS

DIRECCION REGIONAL LIMA

ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	POBLACION	BUENO	REGULAR	MALO
Sentenciados de Huaraz	336	1		
Procesados de Chimbote	454	1		
Callao	1,119		1	
Mujeres de Chorrillos	854		1	
Reg. Cerr. Esp. Mujeres de Chorrillos	287	1		
Reg. Cerr. Ord. Lurigancho	6,633			1
Reg. Cerr. Esp. Miguel Castro Castro	1,539		1	
Procesados Carquin Huacho	650	1		
Nuevo Imperial Cañete	656	1		
Procesados de Tambo de Mora	362	1		
TOTAL	12,890	6	3	1

DIRECCION REGIONAL NORTE CHICLAYO

ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	POBLACION	BUENO	REGULAR	MALO
Sentenciados de Castilla Piura (Rio Seco)	1,195		1	
Procesados de Ayabaca	21			1
Mujeres de Sullana	111			1
Sentenciados de Trujillo	1,135		1	
Procesados San Pedro de Lloc	64			1
Huacarez - Cajamarca	411	1		
Procesados de Jaen	148			1
TOTAL	3,085	1	2	4

DIRECCION REGIONAL ORIENTE PUCALLPA

ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	POBLACION	BUENO	REGULAR	MALO
Sentenciados de Huanuco	1,242		1	
procesados de Cerro de Pasco	58			1
TOTAL	1,300		1	1

DIRECCION REGIONAL CENTRO HUANCAYO

ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	POBLACION	BUENO	REGULAR	MALO
Procesados de Oxapampa	28			1
Procesados de Satipo	36			1
Procesados de Tarma	31			1
Procesados La Oroya - Yauli	46			1
Proc. Mujeres de Concepción	77		1	
Procesados de Huanta	21			1
Max. Seg. Yanamilla Ayacucho	729	1		
TOTAL	968	1	1	5

Anexo N° 5
ESTADO DE INFRAESTRUCTURA DE LOS
ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS SUPERVISADOS

DIRECCION REGIONAL NOR ORIENTE SAN MARTIN

ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	POBLACION	BUENO	REGULAR	MALO
Procesados de Juanjui Mariscal Caceres	123			1
Sentenciados de Iquitos	564			1
Anexo Sentenciados de Iquitos	69		1	
Procesados de Yurimaguas	74			1
Sentenciados de Chachapoyas	143			1
Procesados de Bagua Grande	231			1
TOTAL	1,204		1	5

DIRECCION REGIONAL SUR ORIENTE CUSCO

ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	POBLACION	BUENO	REGULAR	MALO
Procesados de Sicuani	46			1
Mujeres de Quencoro	59		1	
Sentenciados de Quencoro	656		1	
Procesados de Tambopata	79			1
TOTAL	840		2	2

DIRECCION REGIONAL SUR AREQUIPA

ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	POBLACION	BUENO	REGULAR	MALO
Sentenciados de Socabaya	627		1	
Procesados de Camana	34			1
Procesados de Mollendo - Islay	14			1
Mujeres de Socabaya	64		1	
Procesados de Moquegua	19			1
Sentenciados de Pocollay	327			1
TOTAL	1,085		2	4

DIRECCION REGIONAL ALTIPLANO PUNO

ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	POBLACION	BUENO	REGULAR	MALO
Sentenciados de Yanamayo	375		1	
Max. Seg. La Capilla Juliaca	450		1	
TOTAL	825		2	

TOTAL GENERAL	22,197	8	14	22
----------------------	---------------	----------	-----------	-----------

Anexo N° 6
CAPACIDAD DE ALBERGUE Y POBLACION REAL
DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS

DIRECCION REGIONAL LIMA

ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	POBLACION	CAPACIDAD ALBERGUE	SOBREPOBLACION
Sentenciados de Huaraz	336	350	-4.00%
Procesados de Chimbote	454	500	-9.20%
Sentenciados de Ica	595	450	32.22%
Procesados de Tambo de Mora	362	264	37.12%
Callao	1,119	572	95.63%
Mujeres de Chorrillos	854	250	241.60%
Reg. Cerr. Esp. Mujeres de Chorrillos	287	288	-0.35%
Reg. Cerr. Ord. Lurigancho	6,633	1,815	265.45%
Reg. Cerr. Esp. Miguel Castro Castro	1,539	1,142	34.76%
Procesados Primarios Lima	403	800	-49.63%
Procesados de Canta	1	40	-97.50%
Procesados Carquin Huacho	650	452	43.81%
Procesados de Yauyos	3	50	-94.00%
Nuevo Imperial Cañete	656	574	14.29%
Lucanas Puquio	0	25	-100.00%
San Isaias Coracora	0	30	-100.00%
TOTAL	13,892	7,602	82.74%

DIRECCION REGIONAL NORTE CHICLAYO

ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	POBLACION	CAPACIDAD ALBERGUE	SOBREPOBLACION
Huacariz - Cajamarca	411	432	-4.86%
Procesados de Cajabamba	12	75	-84.00%
Procesados de Celendin	10	80	-87.50%
Chota	54	65	-16.92%
Procesados de Bambamarca	14	60	-76.67%
Procesados de San Ignacio	37	150	-75.33%
Procesados de Santa Cruz	26	80	-67.50%
Procesados de Jaen	148	50	196.00%
Sentenciados de Trujillo	1,135	750	51.33%
Mujeres de Trujillo	94	160	-41.25%
Procesados San Pedro de Lloc	64	100	-36.00%
Procesados de Santiago de Chuco	20	20	0.00%
Sentenciados de Pisci Chiclayo	978	793	23.33%
Mujeres de Chiclayo	56	250	-77.60%
Maxima Seguridad Pisci	142	150	-5.33%
Sent. Castilla Piura (Rio Seco)	1,195	586	103.92%
Procesados de Ayabaca	21	40	-47.50%
Huancabamba	15	70	-78.57%
Tumbes	22	60	-63.33%
Mujeres de Sullana	111	50	122.00%
TOTAL	4,565	4,021	13.53%

DIRECCION REGIONAL ORIENTE PUCALLPA

ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	POBLACION	CAPACIDAD ALBERGUE	SOBREPOBLACION
Sentenciados de Huanuco	1,242	532	133.46%
Procesados de la Unión	22	100	-78.00%
Sentenciados de Pucallpa	689	424	62.50%
Procesados de Cerro de Pasco	58	50	16.00%
TOTAL	2,011	1,106	81.83%

Anexo N° 6
CAPACIDAD DE ALBERGUE Y POBLACION REAL
DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS

DIRECCION REGIONAL CENTRO HUANCAYO

ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	POBLACION	CAPACIDAD ALBERGUE	SOBREPOBLACION
Procesados de Oxapampa	28	60	-53.33%
Sentenciados de Huamancaca	620	645	-3.88%
Procesados de La Merced	191	298	-35.91%
Procesados de Jauja	31	55	-43.64%
Procesados de Satipo	36	40	-10.00%
Procesados de Tarma	31	64	-51.56%
Procesados La Oroya - Yauli	46	100	-54.00%
Proc. Mujeres de Concepción	77	100	-23.00%
Sentenciados de Huancavelica	59	88	-32.95%
Procesados de Pampas Tayacaja	5	50	-90.00%
Procesados de Huanta	21	36	-41.67%
Max. Seg. Yanamilla Ayacucho	729	644	13.20%
TOTAL	1,874	2,180	-14.04%

DIRECCION REGIONAL NOR ORIENTE SAN MARTIN

ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	POBLACION	CAPACIDAD ALBERGUE	SOBREPOBLACION
Procesados de Juanjui	123	60	105.00%
Sentenciados de Moyobamba	309	180	71.67%
Procesados de Tarapoto	357	110	224.55%
Sentenciados de Iquitos	564	400	41.00%
Procesados de Yurimaguas	74	50	48.00%
Anexo Sentenciados de Iquitos	69	68	1.47%
Sentenciados de Chachapoyas	143	100	43.00%
Procesados de Bagua Grande	231	60	285.00%
TOTAL	1,870	1,028	81.91%

DIRECCION REGIONAL SUR ORIENTE CUSCO

ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	POBLACION	CAPACIDAD ALBERGUE	SOBREPOBLACION
Sentenciados de Abancay	141	90	56.67%
Procesados de Andahuaylas	26	20	30.00%
Procesados de Cotabambas	9	30	-70.00%
Chincheros	10	20	-50.00%
Sentenciados de Quencoro	656	1,200	-45.33%
Procesados de Sicuani	46	60	-23.33%
Procesados de Chumbivilcas	18	40	-55.00%
Procesados de Yauri	21	60	-65.00%
Procesados de Quillabamba	57	80	-28.75%
Procesados de Paucartambo	4	40	-90.00%
Procesados de Urcos - Quispicanchis	8	50	-84.00%
Mujeres de Quencoro	59	120	-50.83%
Procesados de Tambopata	79	80	-1.25%
TOTAL	1,134	1,890	-40.00%

Anexo 6
CAPACIDAD DE ALBERGUE Y POBLACION REAL
DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS

DIRECCION REGIONAL SUR AREQUIPA

ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	POBLACION	CAPACIDAD ALBERGUE	SOBREPOBLACION
Sentenciados de Socabaya	627	600	4.50%
Procesados de Camana	34	20	70.00%
Procesados de Chivay Caylloma	8	20	-60.00%
Procesados de Mollendo - Islay	14	30	-53.33%
Mujeres de Socabaya	64	100	-36.00%
Procesados de Moquegua	19	45	-57.78%
Sentenciados de Pocollay	327	120	172.50%
TOTAL	1,093	935	16.90%

DIRECCION REGIONAL ALTIPLANO PUNO

ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	POBLACION	CAPACIDAD ALBERGUE	SOBREPOBLACION
Sentenciados de Yanamayo	375	492	-23.78%
Procesados de Azangaro	4	20	-80.00%
Procesados Macusani	1	30	-96.67%
Procesados de Huancane	21	30	-30.00%
Regimen Especial Challapalca	138	150	-8.00%
Max. Seg. La Capilla Juliaca	450	490	-8.16%
TOTAL	989	1212	-18.40%

TOTAL GENERAL	27428	19974	37.32%
----------------------	--------------	--------------	---------------

Anexo N° 7
SERVICIO LEGAL
EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS

DIRECCION REGIONAL LIMA

ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	POBLACION	ABOGADOS
Sentenciados de Huaraz	336	1
Procesados de Chimbote	454	1
Sentenciados de Ica	595	1
E.T.P. Callao	1,119	3
Mujeres de Chorrillos	854	5
Reg. Cerr. Esp. Mujeres de Chorrillos	287	0
Reg. Cerr. Ord. Lurigancho	6,633	5
Reg. Cerr. Esp. Miguel Castro Castro	1,539	1
Procesados Primarios Lima	403	3
Procesados de Canta	1	0
Procesados Carquin Huacho	650	2
Nuevo Imperial Cañete	656	2
Procesados de Yauyos	3	0
Procesados de Tambo de Mora	362	2
TOTAL	13,892	26

DIRECCION REGIONAL NORTE CHICLAYO

ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	POBLACION	ABOGADOS
Sentenciados de Castilla Piura (Rio Seco)	1,195	0
Procesados de Ayabaca	21	0
Mujeres de Sullana	111	0
Sentenciados de Trujillo	1,135	1
Procesados San Pedro de Lloc	64	0
Huacariz - Cajamarca	411	1
Procesados de Jaen	148	1
Procesados de Cajabamba	12	0
Procesados de Celendin	10	0
E.P. Chota	54	0
Procesados de Bambamarca	14	0
Procesados de San Ignacio	37	0
Procesados de Santa Cruz	26	0
Mujeres de Trujillo	94	0
Procesados de Santiago de Chuco	20	0
E.P. Pisci Chiclayo	978	1
E.P. Mujeres de Chiclayo	56	1
Maxima Seguridad Pisci	142	1
Huancabamba	15	0
E.P. Tumbes (Func. Como carceletera)	22	0
TOTAL	4,565	6

DIRECCION REGIONAL ORIENTE PUCALLPA

ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	POBLACION	ABOGADOS
Sentenciados de Huanuco	1,242	1
Procesados de la Unión	22	0
Sentenciados de Pucallpa	689	1
procesados de Cerro de Pasco	58	0
TOTAL	2,011	2

Anexo N° 7
SERVICIO LEGAL
EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS

DIRECCION REGIONAL CENTRO HUANCAYO

ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	POBLACION	ABOGADOS
Procesados de Oxapampa	28	0
Sentenciados de Huamancaca	620	2
Procesados de La Merced	191	1
Procesados de Jauja	31	0
Procesados de Satipo	36	1
Procesados de Tarma	31	0
Procesados La Oroya - Yauli	46	0
Proc. Mujeres de Concepción	77	0
Sentenciados de Huancavelica	59	0
Procesados de Pampas Tayacaja	5	0
Procesados de Huanta	21	0
Max. Seg. Yanamilla Ayacucho	729	2
TOTAL	1,874	6

DIRECCION REGIONAL NOR ORIENTE SAN MARTIN

ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	POBLACION	ABOGADOS
Procesados de Juanjui Mariscal Caceres	123	0
Sentenciados de Moyobamba	309	1
Procesados de Tarapoto	357	0
Sentenciados de Iquitos	564	0
Anexo Sentenciados de Iquitos	69	0
Procesados de Yurimaguas	74	0
Sentenciados de Chachapoyas	143	1
Procesados de Bagua Grande	231	0
TOTAL	1,870	2

DIRECCION REGIONAL SUR ORIENTE CUSCO

ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	POBLACION	ABOGADOS
Procesados de Sicuani	46	0
Sentenciados de Abancay	141	0
Procesados de Andahuaylas	26	0
Procesados de Cotabambas	9	0
E.P. Chincheros	10	0
Procesados de Chumbivilcas	18	0
Procesados de Yauri	21	0
Procesados de Quillabamba	57	1
Procesados de Paucartambo	4	0
Procesados de Urcos - Quispicanchis	8	0
Mujeres de Quencoro	59	0
Sentenciados de Quencoro	656	3
Procesados de Tambopata	79	1
TOTAL	1,134	5

Anexo N° 7
SERVICIO LEGAL
EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS

DIRECCION REGIONAL SUR AREQUIPA

ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	POBLACION	ABOGADOS
Sentenciados de Socabaya	627	3
Procesados de Camana	34	0
Procesados de Chivay Caylloma	8	0
Procesados de Mollendo - Islay	14	0
Mujeres de Socabaya	64	1
Procesados de Moquegua	19	0
Sentenciados de Pocollay	327	2
TOTAL	1,093	6

DIRECCION REGIONAL ALTIPLANO PUNO

ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	POBLACION	ABOGADOS
Sentenciados de Yanamayo	375	0
Procesados de Azangaro	4	0
Procesados Macusani	1	0
Procesados de Huancane	21	0
Regimen Especial Challapalca	138	1
Max. Seg. La Capilla Juliaca	450	1
TOTAL	989	2

TOTAL GENERAL	27,428	55
----------------------	---------------	-----------

Anexo N° 8
SERVICIO DE SALUD
EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS

DIRECCION REGIONAL LIMA

ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	POBLACION	MEDICOS	ENFERMEROS
Sentenciados de Huaraz	336	0	1
Procesados de Chimbote	454	0	1
Sentenciados de Ica	595	1	1
Callao	1,119	3	8
Mujeres de Chorrillos	854	4	8
Reg. Cerr. Esp. Mujeres de Chorrillos	287	2	12
Reg. Cerr. Ord. Lurigancho	6,633	8	2
Reg. Cerr. Esp. Miguel Castro Castro	1,539	6	1
Procesados Primarios Lima	403	2	1
Procesados de Canta	1	0	1
Procesados Carquin Huacho	650	0	2
Nuevo Imperial Cañete	656	1	5
Procesados de Yauyos	3	0	1
Procesados de Tambo de Mora	362	1	2
TOTAL	13,892	28	46

DIRECCION REGIONAL NORTE CHICLAYO

ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	POBLACION	MEDICOS	ENFERMEROS
Sentenciados de Castilla Piura (Rio Seco)	1,195	0	2
Procesados de Ayabaca	21	0	0
Mujeres de Sullana	111	0	1
Sentenciados de Trujillo	1,135	1	1
Procesados San Pedro de Lloc	64	0	1
Huacarez - Cajamarca	411	1	1
Procesados de Jaen	148	0	1
Procesados de Cajabamba	12	0	0
Procesados de Celendin	10	0	0
Chota	54	0	0
Procesados de Bambamarca	14	0	0
Procesados de San Ignacio	37	0	1
Procesados de Santa Cruz	26	0	0
Mujeres de Trujillo	94	0	0
Procesados de Santiago de Chuco	20	0	0
Sentenciados de Pícsi Chiclayo	978	2	3
Mujeres de Chiclayo	56	0	1
Maxima Seguridad Pícsi	142	0	1
Huancabamba	15	0	0
Tumbes	22	0	0
TOTAL	4,565	4	13

DIRECCION REGIONAL ORIENTE PUCALLPA

ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	POBLACION	MEDICOS	ENFERMEROS
Sentenciados de Huanuco	1,242	1	2
Procesados de la Unión	22	0	0
Sentenciados de Pucallpa	689	0	1
procesados de Cerro de Pasco	58	0	0
TOTAL	2,011	1	3

Anexo N° 8
SERVICIO DE SALUD
EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS

DIRECCION REGIONAL CENTRO HUANCAYO

ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	POBLACION	MEDICOS	ENFERMEROS
Procesados de Oxapampa	28	0	0
Sentenciados de Huamancaca	620	0	0
Procesados de La Merced	191	0	0
Procesados de Jauja	31	0	0
Procesados de Satipo	36	0	0
Procesados de Tarma	31	0	0
Procesados La Oroya - Yauli	46	0	0
Proc. Mujeres de Concepción	77	1	0
Sentenciados de Huancavelica	59	0	0
Procesados de Pampas Tayacaja	5	0	0
Procesados de Huanta	21	0	0
Max. Seg. Yanamilla Ayacucho	729	1	3
TOTAL	1,874	2	3

DIRECCION REGIONAL NOR ORIENTE SAN MARTIN

ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	POBLACION	MEDICOS	ENFERMEROS
Procesados de Juanjui Mariscal Caceres	123	0	0
Sentenciados de Moyobamba	309	0	0
Procesados de Tarapoto	357	0	0
Sentenciados de Iquitos	564	1	0
Anexo Sentenciados de Iquitos	69	0	0
Procesados de Yurimaguas	74	0	0
Sentenciados de Chachapoyas	143	0	1
Procesados de Bagua Grande	231	0	1
TOTAL	1,870	1	2

DIRECCION REGIONAL SUR ORIENTE CUSCO

ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	POBLACION	MEDICOS	ENFERMEROS
Procesados de Sicuani	46	0	0
Sentenciados de Abancay	141	0	0
Procesados de Andahuaylas	26	0	0
Procesados de Cotabambas	9	0	0
Chincheros	10	0	0
Procesados de Chumbivilcas	18	0	0
Procesados de Yauri	21	0	0
Procesados de Quillabamba	57	0	0
Procesados de Paucartambo	4	0	0
Procesados de Urcos - Quispicanchis	8	0	0
Mujeres de Quencoro	59	0	0
Sentenciados de Quencoro	656	2	3
Procesados de Tambopata	79	0	0
TOTAL	1,134	2	3

Anexo N° 8
SERVICIO DE SALUD
EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS

DIRECCION REGIONAL SUR AREQUIPA

ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	POBLACION	MEDICOS	ENFERMEROS
Sentenciados de Socabaya	627	2	1
Procesados de Camana	34	0	0
Procesados de Chivay Caylloma	8	0	0
Procesados de Mollendo - Islay	14	0	0
Mujeres de Socabaya	64	0	1
Procesados de Moquegua	19	0	0
Sentenciados de Pocollay	327	1	2
TOTAL	1,093	3	4

DIRECCION REGIONAL ALTIPLANO PUNO

ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	POBLACION	MEDICOS	ENFERMEROS
Sentenciados de Yanamayo	375	1	4
Procesados de Azangaro	4	0	0
Procesados Macusani	1	0	0
Procesados de Huancane	21	0	0
Regimen Especial Challapalca	138	0	0
Max. Seg. La Capilla Juliaca	450	2	2
TOTAL	989	3	6
TOTAL GENERAL	27,428	44	80

Anexo N° 9
ASISTENTES SOCIALES
EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS

DIRECCION REGIONAL LIMA

ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	POBLACION	ASISTENTES SOCIALES
Sentenciados de Huaraz	336	1
Procesados de Chimbote	454	3
Sentenciados de Ica	595	2
E.T.P. Callao	1,119	5
Mujeres de Chorrillos	854	3
Reg. Cerr. Esp. Mujeres de Chorrillos	287	2
Reg. Cerr. Ord. Lurigancho	6,633	15
Reg. Cerr. Esp. Miguel Castro Castro	1,539	4
Procesados Primarios Lima	403	4
Procesados de Canta	1	0
Procesados Carquin Huacho	650	2
Nuevo Imperial Cañete	656	3
Procesados de Yauyos	3	0
Procesados de Tambo de Mora	362	3
TOTAL	13,892	47

DIRECCION REGIONAL NORTE CHICLAYO

ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	POBLACION	ASISTENTES SOCIALES
Sentenciados de Castilla Piura (Rio Seco)	1,195	3
Procesados de Ayabaca	21	0
Mujeres de Sullana	111	2
Sentenciados de Trujillo	1,135	2
Procesados San Pedro de Lloc	64	0
Huacariz - Cajamarca	411	1
Procesados de Jaen	148	0
Procesados de Cajabamba	12	0
Procesados de Celendin	10	0
E.P. Chota	54	0
Procesados de Bambamarca	14	0
Procesados de San Ignacio	37	0
Procesados de Santa Cruz	26	0
Mujeres de Trujillo	94	1
Procesados de Santiago de Chuco	20	0
E.P. Pícsi Chiclayo	978	3
E.P. Mujeres de Chiclayo	56	1
Maxima Seguridad Pícsi	142	1
Huancabamba	15	0
E.P. Tumbes (Func. Como carcelita)	22	0
TOTAL	4,565	14

DIRECCION REGIONAL ORIENTE PUCALLPA

ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	POBLACION	ASISTENTES SOCIALES
Sentenciados de Huanuco	1,242	1
Procesados de la Unión	22	0
Sentenciados de Pucallpa	689	1
procesados de Cerro de Pasco	58	0
TOTAL	2,011	2

Anexo N° 9
ASISTENTES SOCIALES
EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS

DIRECCION REGIONAL CENTRO HUANCAYO

ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	POBLACION	ASISTENTES SOCIALES
Procesados de Oxapampa	28	0
Sentenciados de Huamancaca	620	3
Procesados de La Merced	191	1
Procesados de Jauja	31	0
Procesados de Satipo	36	0
Procesados de Tarma	31	0
Procesados La Oroya - Yauli	46	0
Proc. Mujeres de Concepción	77	0
Sentenciados de Huancavelica	59	0
Procesados de Pampas Tayacaja	5	0
Procesados de Huanta	21	0
Max. Seg. Yanamilla Ayacucho	729	2
TOTAL	1,874	6

DIRECCION REGIONAL NOR ORIENTE SAN MARTIN

ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	POBLACION	ASISTENTES SOCIALES
Procesados de Juanjui Mariscal Caceres	123	0
Sentenciados de Moyobamba	309	0
Procesados de Tarapoto	357	0
Sentenciados de Iquitos	564	1
Anexo Sentenciados de Iquitos	69	0
Procesados de Yurimaguas	74	0
Sentenciados de Chachapoyas	143	0
Procesados de Bagua Grande	231	0
TOTAL	1,870	1

DIRECCION REGIONAL SUR ORIENTE CUSCO

ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	POBLACION	ASISTENTES SOCIALES
Procesados de Sicuani	46	0
Sentenciados de Abancay	141	0
Procesados de Andahuaylas	26	0
Procesados de Cotabambas	9	0
E.P. Chincheros	10	0
Procesados de Chumbivilcas	18	0
Procesados de Yauri	21	0
Procesados de Quillabamba	57	0
Procesados de Paucartambo	4	0
Procesados de Urcos - Quispicanchis	8	0
Mujeres de Quencoro	59	1
Sentenciados de Quencoro	656	1
Procesados de Tambopata	79	0
TOTAL	1,134	2

Anexo N° 9
ASISTENTES SOCIALES
EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS

DIRECCION REGIONAL SUR AREQUIPA

ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	POBLACION	ASISTENTES SOCIALES
Sentenciados de Socabaya	627	4
Procesados de Camana	34	1
Procesados de Chivay Caylloma	8	0
Procesados de Mollendo - Islay	14	0
Mujeres de Socabaya	64	1
Procesados de Moquegua	19	1
Sentenciados de Pocollay	327	1
TOTAL	1,093	8

DIRECCION REGIONAL ALTIPLANO PUNO

ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	POBLACION	ASISTENTES SOCIALES
Sentenciados de Yanamayo	375	1
Procesados de Azangaro	4	
Procesados Macusani	1	
Procesados de Huancane	21	
Regimen Especial Challapalca	138	
Max. Seg. La Capilla Juliaca	450	1
TOTAL	989	2

TOTAL GENERAL	27,428	82
---------------	--------	----

Anexo N° 10
SERVICIO PSICOLOGICO
EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS

DIRECCION REGIONAL LIMA

ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	POBLACION	PSICOLOGOS
Sentenciados de Huaraz	336	1
Procesados de Chimbote	454	1
Sentenciados de Ica	595	2
E.T.P. Callao	1,119	8
Mujeres de Chorrillos	854	4
Reg. Cerr. Esp. Mujeres de Chorrillos	287	6
Reg. Cerr. Ord. Lurigancho	6,633	11
Reg. Cerr. Esp. Miguel Castro Castro	1,539	4
Procesados Primarios Lima	403	7
Procesados de Canta	1	0
Procesados Carquin Huacho	650	3
Nuevo Imperial Cañete	656	4
Procesados de Yauyos	3	0
Procesados de Tambo de Mora	362	2
TOTAL	13,892	53

DIRECCION REGIONAL NORTE CHICLAYO

ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	POBLACION	PSICOLOGOS
Sentenciados de Castilla Piura (Rio Seco)	1,195	1
Procesados de Ayabaca	21	0
Mujeres de Sullana	111	1
Sentenciados de Trujillo	1,135	1
Procesados San Pedro de Lloc	64	0
Huacariz - Cajamarca	411	1
Procesados de Jaen	148	0
Procesados de Cajabamba	12	0
Procesados de Celendin	10	0
E.P. Chota	54	0
Procesados de Bambamarca	14	0
Procesados de San Ignacio	37	0
Procesados de Santa Cruz	26	0
Mujeres de Trujillo	94	1
Procesados de Santiago de Chuco	20	0
E.P. Pícsi Chiclayo	978	3
E.P. Mujeres de Chiclayo	56	0
Maxima Seguridad Pícsi	142	1
Huancabamba	15	0
E.P. Tumbes (Func. Como carceletera)	22	1
TOTAL	4,565	10

DIRECCION REGIONAL ORIENTE PUCALLPA

ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	POBLACION	PSICOLOGOS
Sentenciados de Huanuco	1,242	1
Procesados de la Unión	22	0
Sentenciados de Pucallpa	689	2
procesados de Cerro de Pasco	58	0
TOTAL	2,011	3

Anexo N° 10
SERVICIO PSICOLOGICO
EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS

DIRECCION REGIONAL CENTRO HUANCAYO

ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	POBLACION	PSICOLOGOS
Procesados de Oxapampa	28	0
Sentenciados de Huamancaca	620	2
Procesados de La Merced	191	1
Procesados de Jauja	31	0
Procesados de Satipo	36	0
Procesados de Tarma	31	0
Procesados La Oroya - Yauli	46	0
Proc. Mujeres de Concepción	77	1
Sentenciados de Huancavelica	59	0
Procesados de Pampas Tayacaja	5	0
Procesados de Huanta	21	0
Max. Seg. Yanamilla Ayacucho	729	1
TOTAL	1,874	5

DIRECCION REGIONAL NOR ORIENTE SAN MARTIN

ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	POBLACION	PSICOLOGOS
Procesados de Juanjui Mariscal Caceres	123	0
Sentenciados de Moyobamba	309	0
Procesados de Tarapoto	357	1
Sentenciados de Iquitos	564	1
Anexo Sentenciados de Iquitos	69	0
Procesados de Yurimaguas	74	0
Sentenciados de Chachapoyas	143	0
Procesados de Bagua Grande	231	0
TOTAL	1,870	2

DIRECCION REGIONAL SUR ORIENTE CUSCO

ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	POBLACION	PSICOLOGOS
Procesados de Sicuani	46	0
Sentenciados de Abancay	141	0
Procesados de Andahuaylas	26	0
Procesados de Cotabambas	9	0
E.P. Chincheros	10	0
Procesados de Chumbivilcas	18	0
Procesados de Yauri	21	0
Procesados de Quillabamba	57	0
Procesados de Paucartambo	4	0
Procesados de Urcos - Quispicanchis	8	0
Mujeres de Quencoro	59	0
Sentenciados de Quencoro	656	2
Procesados de Tambopata	79	0
TOTAL	1,134	2

Anexo N° 10
SERVICIO PSICOLOGICO
EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS

DIRECCION REGIONAL SUR AREQUIPA

ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	POBLACION	PSICOLOGOS
Sentenciados de Socabaya	627	3
Procesados de Camana	34	0
Procesados de Chivay Caylloma	8	0
Procesados de Mollendo - Islay	14	0
Mujeres de Socabaya	64	2
Procesados de Moquegua	19	0
Sentenciados de Pocollay	327	1
TOTAL	1,093	6

DIRECCION REGIONAL ALTIPLANO PUNO

ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	POBLACION	PSICOLOGOS
Sentenciados de Yanamayo	375	1
Procesados de Azangaro	4	
Procesados Macusani	1	
Procesados de Huancane	21	
Regimen Especial Challapalca	138	1
Max. Seg. La Capilla Juliaca	450	1
TOTAL	989	3

TOTAL GENERAL	27,428	84
---------------	--------	----

Anexo N° 11
POBLACION PENAL QUE TRABAJA Y REDIME PENA
EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS SUPERVISADOS

DIRECCION REGIONAL LIMA

ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	POBLACION	TRABAJA Y NO REDIME	REDIME PENA POR TRABAJO
Sentenciados de Huaraz	336	190	55
Procesados de Chimbote	454	258	88
Callao	1119	502	400
Mujeres de Chorrillos	854	294	227
Reg. Cerr. Esp. Mujeres de Chorrillos	287	208	0
Reg. Cerr. Ord. Lurigancho	6633	2813	2137
Reg. Cerr. Esp. Miguel Castro Castro	1539	215	205
Procesados Carquin Huacho	650	112	48
Nuevo Imperial Cañete	656	227	227
Procesados de Tambo de Mora	362	337	71
TOTAL	12890	5156	3458

DIRECCION REGIONAL NORTE CHICLAYO

ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	POBLACION	TRABAJA Y NO REDIME	REDIME PENA POR TRABAJO
Sentenciados de Castilla Piura (Rio Seco)	1195	733	366
Procesados de Ayabaca	21	25	18
Mujeres de Sullana	111	38	4
Sentenciados de Trujillo	1135	930	651
Procesados San Pedro de Lloc	64	44	44
Huacarez - Cajamarca	411	206	33
Procesados de Jaen	148	119	40
TOTAL	3085	2095	1156

DIRECCION REGIONAL ORIENTE PUCALLPA

ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	POBLACION	TRABAJA Y NO REDIME	REDIME PENA POR TRABAJO
Sentenciados de Huanuco	1242	856	721
procesados de Cerro de Pasco	58	10	10
TOTAL	1300	866	731

DIRECCION REGIONAL CENTRO HUANCAYO

ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	POBLACION	TRABAJA Y NO REDIME	REDIME PENA POR TRABAJO
Procesados de Oxapampa	28	20	0
Procesados de Satipo	36	15	15
Procesados de Tarma	31	36	18
Procesados La Oroya - Yauli	46	16	7
Proc. Mujeres de Concepción	77	46	46
Procesados de Huanta	21	0	0
Max. Seg. Yanamilla Ayacucho	729	483	178
TOTAL	968	616	264

Anexo N° 11
POBLACION PENAL QUE TRABAJA Y REDIME PENA
EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS SUPERVISADOS

DIRECCION REGIONAL NOR ORIENTE SAN MARTIN

ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	POBLACION	TRABAJA Y NO REDIME	REDIME PENA POR TRABAJO
Procesados de Juanjui Mariscal Caceres	123	147	25
Sentenciados de Iquitos	564	314	135
Anexo Sentenciados de Iquitos	69	0	0
Procesados de Yurimaguas	74	49	16
Sentenciados de Chachapoyas	143	128	33
Procesados de Bagua Grande	231	210	5
TOTAL	1204	848	214

DIRECCION REGIONAL SUR ORIENTE CUSCO

ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	POBLACION	TRABAJA Y NO REDIME	REDIME PENA POR TRABAJO
Procesados de Sicuani	46	54	27
Sentenciados de Quencoro	656	585	569
Mujeres de Quencoro	59	0	0
Procesados de Tambopata	79	34	24
TOTAL	840	673	620

DIRECCION REGIONAL SUR AREQUIPA

ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	POBLACION	TRABAJA Y NO REDIME	REDIME PENA POR TRABAJO
Sentenciados de Socabaya	627	593	373
Procesados de Camana	34	14	9
Procesados de Mollendo - Islay	14	24	14
Mujeres de Socabaya	64	70	49
Procesados de Moquegua	19	15	5
Sentenciados de Pocollay	327	241	201
TOTAL	1085	957	651

DIRECCION REGIONAL ALTIPLANO PUNO

ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	POBLACION	TRABAJA Y NO REDIME	REDIME PENA POR TRABAJO
Sentenciados de Yanamayo	375	0	0
Max. Seg. La Capilla Juliaca	450	367	239
TOTAL	825	367	239
TOTAL GENERAL	22197	11578	7333

Anexo N° 12
POBLACION PENAL QUE ESTUDIA Y REDIME PENA
EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS SUPERVISADOS

DIRECCION REGIONAL LIMA

ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	POBLACION	ESTUDIAN	REDIMEN POR ESTUDIO
Sentenciados de Huaraz	336	127	127
Procesados de Chimbote	454	107	107
Callao	1119	126	126
Mujeres de Chorrillos	854	250	250
Reg. Cerr. Esp. Mujeres de Chorrillos	287	0	0
Reg. Cerr. Ord. Lurigancho	6633	2000	2000
Reg. Cerr. Esp. Miguel Castro Castro	1539	390	12
Procesados Carquin Huacho	650	113	113
Nuevo Imperial Cañete	656	320	320
Procesados de Tambo de Mora	362	123	123
TOTAL	12890	3556	3178

DIRECCION REGIONAL NORTE CHICLAYO

ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	POBLACION	ESTUDIAN	REDIMEN POR ESTUDIO
Sentenciados de Castilla Piura (Rio Seco)	1195	140	140
Procesados de Ayabaca	21	0	0
Mujeres de Sullana	111	43	43
Sentenciados de Trujillo	1135	334	50
Procesados San Pedro de Lloc	64	17	17
Huacariz - Cajamarca	411	47	47
Procesados de Jaen	148	20	12
TOTAL	3085	601	309

DIRECCION REGIONAL ORIENTE PUCALLPA

ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	POBLACION	ESTUDIAN	REDIMEN POR ESTUDIO
Sentenciados de Huanuco	1242	485	328
procesados de Cerro de Pasco	58	44	44
TOTAL	1300	529	372

DIRECCION REGIONAL CENTRO HUANCAYO

ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	POBLACION	ESTUDIAN	REDIMEN POR ESTUDIO
Procesados de Oxapampa	28	0	0
Procesados de Satipo	36	22	22
Procesados de Tarma	31	0	0
Procesados La Oroya - Yauli	46	0	0
Proc. Mujeres de Concepción	77	11	11
Procesados de Huanta	21	0	0
Max. Seg. Yanamilla Ayacucho	729	115	115
TOTAL	968	148	148

Anexo N° 12
POBLACION PENAL QUE ESTUDIA Y REDIME PENA
EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS SUPERVISADOS

DIRECCION REGIONAL NOR ORIENTE SAN MARTIN

ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	POBLACION	ESTUDIAN	REDIMEN POR ESTUDIO
Procesados de Juanjui Mariscal Caceres	123	76	76
Sentenciados de Iquitos	564	205	205
Anexo Sentenciados de Iquitos	69	0	0
Procesados de Yurimaguas	74	23	23
Sentenciados de Chachapoyas	143	0	0
Procesados de Bagua Grande	231	0	0
TOTAL	1204	304	304

DIRECCION REGIONAL SUR ORIENTE CUSCO

ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	POBLACION	ESTUDIAN	REDIMEN POR ESTUDIO
Procesados de Sicuani	46	0	0
Sentenciados de Quencoro	656	216	189
Mujeres de Quencoro	59	0	0
Procesados de Tambopata	79	33	28
TOTAL	840	249	217

DIRECCION REGIONAL SUR AREQUIPA

ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	POBLACION	ESTUDIAN	REDIMEN POR ESTUDIO
Sentenciados de Socabaya	627	149	79
Procesados de Camana	34	0	0
Procesados de Mollendo - Islay	14	10	10
Mujeres de Socabaya	64	21	21
Procesados de Moquegua	19	10	10
Sentenciados de Pocollay	327	146	131
TOTAL	1085	336	251

DIRECCION REGIONAL ALTIPLANO PUNO

ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS	POBLACION	ESTUDIAN	REDIMEN POR ESTUDIO
Sentenciados de Yanamayo	375	0	0
Max. Seg. La Capilla Juliaca	450	320	142
TOTAL	825	320	142

TOTAL GENERAL	22197	6043	4921
----------------------	--------------	-------------	-------------